

PANORAMA DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS COLOMBIA

CICLO DE PROGRAMACIÓN
HUMANITARIA

2021

PUBLICADO ABRIL 2021



Sobre este documento

Este documento ha sido consolidado por OCHA en nombre de la comunidad humanitaria del País y de los socios. En éste se ofrece un entendimiento común de las emergencias, incluidas las necesidades humanitarias más apremiantes y el número estimado de personas que necesitan asistencia humanitaria. También, representa una base de pruebas consolidada y ayuda a informar la planificación estratégica conjunta de la respuesta. Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites. Este es un documento técnico y debe ser interpretado como tal sin implicaciones o connotaciones políticas.

FOTO DE LA PORTADA

Amazonas. Colombia
Crédito de la foto: MMI

Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Últimas actualizaciones



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por emergencias con impacto humanitario reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por emergencias y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/latin-america-andcaribbean-rolac/colombia
twitter.com/ochacolombia

Humanitarian RESPONSE

Humanitarian Response es el sitio web central para las herramientas y servicios de gestión de la información, permitiendo el intercambio entre los clústeres y los socios del IASC que operan en una emergencia prolongada o repentina.

<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia>



Humanitarian InSight apoya a los tomadores de decisiones brindándoles acceso a datos humanitarios. La herramienta provee la última información verificada sobre necesidades, entrega de la respuesta humanitaria y las contribuciones financieras.

www.hum-insight.com



El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor primario de los datos reportados constantemente sobre el financiamiento humanitario global y contribuye a la toma de decisiones estratégicas identificando brechas y prioridades para una asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada en los principios humanitarios.

fts.unocha.org

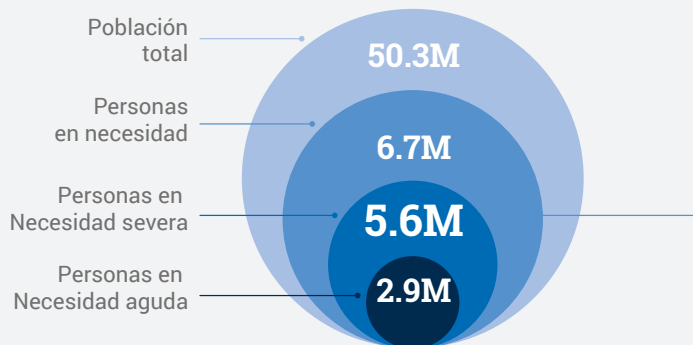
Tabla de contenido

09	Resumen de Necesidades Humanitarias y resultados claves
18	Parte 1: Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias
19	1.1 Contexto de la crisis
23	1.2 Choques e Impacto de la Crisis
59	1.3 Alcance del análisis
60	1.4 Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades
71	Parte 2: Análisis de riesgo y monitoreo de situación y necesidades
72	2.1 Análisis de riesgos
77	2.2 Monitoreo de la Situación y Necesidades
78	Parte 3: Análisis Sectorial
83	3.1 Protección
87	Sub-grupo de Protección Violencia Basada en Género (VGB)
88	Sub-grupo de Protección Protección a la Niñez
90	Sub-grupo de Acción Contra Minas
91	3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición
94	3.3 Agua Saneamiento e Higiene
98	3.4 Salud
101	3.5 Recuperación Temprana
104	3.6 Educación
108	3.7 Alojamientos Temporales
110	Parte 4: Anexos
111	4.1 Fuente de los datos
113	4.2 Metodología
115	4.3 Vacíos de información y limitaciones
117	4.4 Acrónimos

Personas en Necesidad (PiN)



PiN Intersectorial situación interna



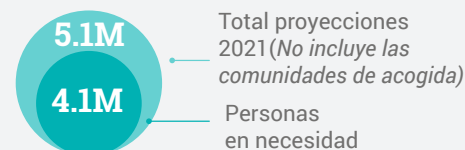
Desagregación por sexo y edad de personas en necesidad

Hombres	Niñas	Adultos mayores
2.318.086	999.509	790.000
Mujeres	Niños	Personas discapacitadas
2.366.652	1.046.894	192.668



Refugiados y Migrantes*

*Refugiados y Migrantes de Venezuela, retornados colombianos y sus comunidades de acogida.



Hombres	Niñas
1.360.271	690.453
Mujeres	Niños
1.370.176	706.136

Grupos vulnerables



1.3M

Comunidades afrodescendientes



954.7k

Comunidades indígenas



236.5k

Personas afectadas por desastres naturales



790k

Adultos mayores



829.4k

Comunidades anfitrionas



450.7k

Personas desplazadas



17k

Personas con enfermedades preexistentes



192k

Personas con discapacidad



26.3k

Personas confinadas



22k

Personas en situación de calle



4.9M

Personas que viven bajo influencia de los GAO/GAD



1.64M

Personas con vocación de permanencia



13k

Población en Transito



99k

Población pendular



63k

Colombianos Retornados



74k

Comunidades de acogida

Personas en Necesidad (PiN) por año

Factores relacionados para el análisis del PIN:



COVID-19



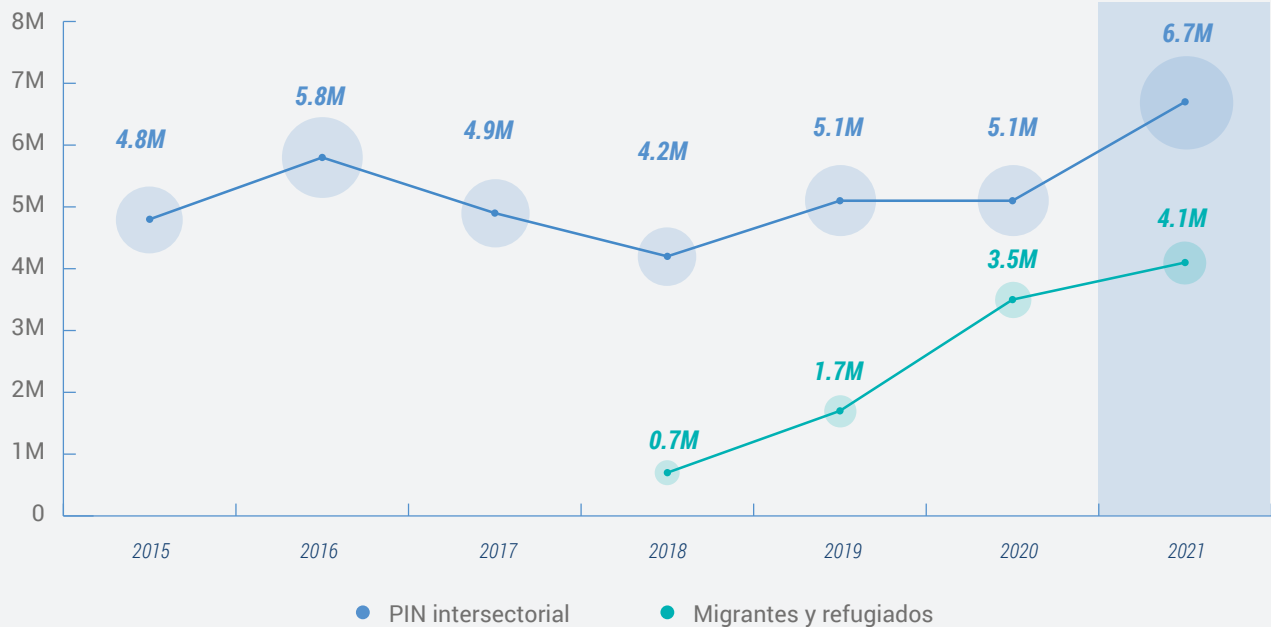
Violencia armada



Desastres naturales

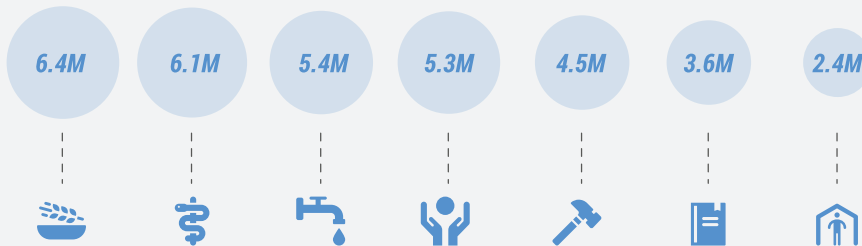


Flujos migratorios

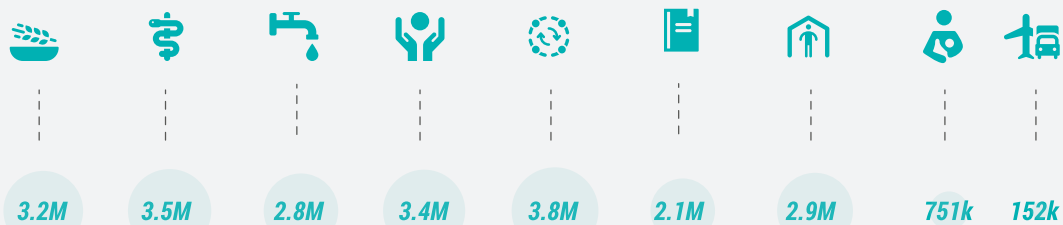


Personas en Necesidad (PiN) por clúster

PiN Intersectorial



Refugiados y Migrantes

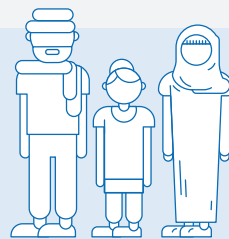


Cifras clave:



6.7 millones

Personas con necesidades de asistencia humanitaria en el 2021



5.6 millones

tienen necesidades severa (685 Municipios)

2.9 millones

tienen necesidad aguda (47 Municipios)

Las principales necesidades humanitarias se localizan en **zonas rurales, periféricas y de difícil acceso en el país.**



Las principales necesidades identificadas se concentran en la **protección, seguridad alimentaria, salud y acceso a algunos servicios de base.**



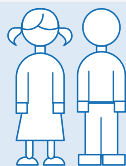
6.2 millones

tienen necesidades de seguridad alimentaria y nutrición en los 1122 municipios (agravada por la pandemia por COVID.19)



3.5 millones

tienen un grado de inseguridad alimentaria aguda, para **2021** la cifra puede ascender a **10M** extendiéndose a zonas urbanas y periurbanas



302 mil

Menores de 5 años están en riesgo de padecer un alto grado de desnutrición.

304 municipios

presentan casos de desnutrición infantil por encima de la media nacional



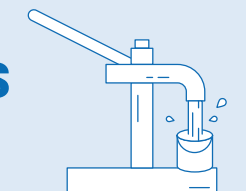
Más de 18 mil

neonatos están en riesgo de tener **bajo peso al nacer.**



Al menos 4.4 millones

de personas no cuentan con acceso a fuentes de agua mejorada (**corresponde al 72.2% de las personas a nivel nacional que se encuentran en esta situación.**)



1.5 millones

de personas no cuentan con acceso al servicio ni a medios disposición sanitaria segura.



10 millones

de Niños, Niñas y Adolescentes quedaron por fuera de las escuelas y **dejaron de asistir a Causa de la Pandemia**



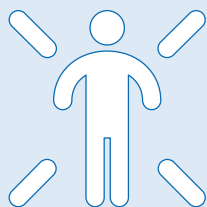
2.5 millones

de Estudiantes tienen dificultades para acceder a servicios de internet.



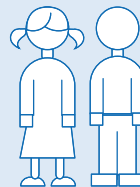
102 mil

Niños, Niñas y Adolescentes desertaron completamente de la actividad escolar durante 2020



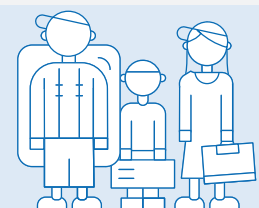
4.9 millones

Personas viven en zonas bajo la influencia de grupos, MAP/MUSE y cultivos ilícitos (**545 municipios**)



1.9 millones

Niños, niñas y adolescentes están con necesidades de protección en el país, **derivadas de la violencia armada**



500 mil

Personas han sido desplazadas desde la firma del Acuerdo Final, de ellos **450k no han superado su condición de vulnerabilidad**



Se estima que cerca de

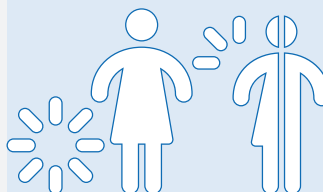
20 mil personas

Pertenecen a poblaciones indígenas y **48 mil personas** a población afro.



268 mil

Personas tienen necesidades por afectación por presencia de artefactos explosivos en **148 municipios**



1.5 millones

de personas, entre ellas mujeres, población LGTBQ+ y niños, niñas y adolescentes están en riesgo de sufrir VBG, Violencia Sexual y Violencia Intrafamiliar.

5.7 millones

de personas tienen dificultades para acceder a servicios salud, a causa de violencia armada, restricciones de movilidad y **poca cobertura del sistema, agravada por la pandemia.**



1.6 millones



de contagios por COVID se acumularon durante 2020. (**6% pertenecieron a comunidades étnicas**).

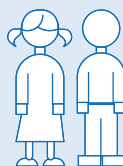
Más de 43 mil

muerter estuvieron provocados por complicaciones derivadas del virus.



14%

de la población total del país tiene un alto grado de vulnerabilidad ante la COVID-19 (**Adultos mayores y personas con comorbilidades**)



477 municipios

tienen una tasa de mortalidad infantil por encima de la media nacional.

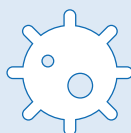


67 municipios

tienen una tasa de mortalidad materna por encima de la media nacional

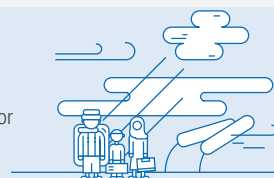
202 mil

personas tienen una mayor probabilidad de padecer **Malaria y Dengue.**



610 mil

personas estuvieron afectadas por **emergencias de origen natural** durante 2020.



Resumen de Necesidades Humanitarias y resultados claves

Cifras proyectadas (2021)

PERSONAS EN NECESIDAD	TENDENCIA (2015-2020)	MUJERES	NIÑOS	CON DISCAPACIDAD
6.7M		49%	32%	3%

Cifras 2020

PERSONAS EN NECESIDAD	TENDENCIA (2015-2020)	MUJERES	NIÑOS	CON DISCAPACIDAD
5.1M		61%	31%	3%



TUMACO/NARIÑO, COLOMBIA

Jornada de Tamizaje prevención COVID adulto mayor.

Crédito de la foto: Alianza por la Solidaridad

Severidad de las necesidades: 2020

MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
1.2M	1.4M	1.7M	663k	-

Severidad de las necesidades: proyectadas (2021)

MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
3k	1.1M	2.7M	2.5M	310M

Severidad de las necesidades por nodos* de ruralidad

NODOS DE RURALIDAD	SEVERIDAD/ # MUNICIPIOS					TOTAL
	MÍNIMO (1)	ESTRÉS (2)	SEVERA (3)	EXTREMO (4)	CATASTRÓFICA (5)	
Ciudades intermedias	43	152	74	45	-	314
Ciudades y aglomeraciones	20	68	27	2	-	117
Rural	22	74	195	81	1	373
Rural disperso	8	50	141	100	19	318
TOTAL GENERAL	93	344	437	288	20	1.122
Participación %	8%	31%	39%	20%	2%	100%
Participación %	(Severidad 1 y 2) 39%		(Severidad 3,4 y 5) 61%			

Severidad de las necesidades por tipo de terreno


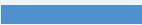




TIPO DE TERRENO	SEVERIDAD/ # MUNICIPIOS					TOTAL
	MÍNIMO (1)	ESTRÉS (2)	SEVERA (3)	EXTREMO (4)	CATASTRÓFICA (5)	
No selvático	93	336	410	172	5	1016
Selvático	-	8	27	56	15	106
TOTAL GENERAL	93	344	437	288	20	1.122

*Territorios con características homogéneas entre si pero heterogéneas en comparación con otros nodos, conformando categorías de clasificación de desarrollo.

Por población vulnerable

GRUPO VULNERABLE	PERSONAS EN NECESIDAD
Personas que habitan en municipios con presencia de GAOS	4.9M 
Niñas y niños	2.2M 
Comunidades afrocolombianas	1.3M 
Población Indígena	954k 
Comunidades anfitrionas	829k 
Población adulto mayor	790k 
Desplazados	450k 
Afectados por desastres naturales	236k 
Personas en condición de discapacidad	192k 
Confinados	26k 
Personas en situación de calle	22k 

Tasa de mortalidad infantil por miles de habitantes




AÑO	VÍCTIMAS MORTALIDAD INFANTIL
2015	219k 
2016	223k 
2017	227k 
2018	236k 
2019	244k 
2020*	251k 

Fuente: Fuente DANE: Defunciones No Fetales-Estadísticas Vitales
*Proyectado (fecha de corte noviembre de 2020)




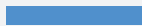


Por género

GÉNERO	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Hombres	3.3M 	50%
Mujeres	3.3M 	49%
Niñas	1.1M 	17%
Niños	1.1M 	16%

Por edad

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Adultos (18 - 60)	3.6M 	55%
Niños, niñas y adolescentes (0 - 17)	2.2M 	34%
Adultos mayores (61+)	790k 	12%

Evolución anual de población en situación de desplazamiento

AÑO	VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
2015	236k 
2016	136k 
2017	130k 
2018	179k 
2019	153k 
2020	72k 

*Fuente: UARIV (fecha de corte diciembre de 2020)

Contexto, choques/eventos, e Impacto de la Crisis¹

Colombia ha vivido avances importantes en los últimos años: redujo la pobreza a la mitad durante los últimos diez años; mantuvo un historial de manejo fiscal y macroeconómico prudente que permitió que la economía creciera desde el 2000 hasta el momento y llegó a un Acuerdo Final² para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el cual trajo un período de alivio humanitario no visto en décadas previas. En los últimos años, Colombia ha recibido un flujo masivo y acelerado de migrantes desde Venezuela asumiendo un papel de liderazgo en la adopción de una política de fronteras abiertas y en la implementación de buenas prácticas en la respuesta a refugiados y migrantes.

A pesar de estos avances, el país se enfrenta a una serie de desafíos: El crecimiento económico estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, pero la pandemia COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó una recesión profunda, impactando a los más vulnerables³. A pesar de que el Gobierno Nacional respondió rápidamente a la emergencia y tomó medidas decididas para proteger vidas y medios de subsistencia y para apoyar la economía, no fue posible minimizar todos los impactos en los sectores y grupos vulnerables de la sociedad más desfavorecidos.

En algunas regiones apartadas del país, continua habiendo presencia de organizaciones criminales y grupos armados no estatales que generan violencia y nuevas dinámicas

de conflicto, con implicaciones humanitarias para poblaciones en condición de vulnerabilidad⁴.

Enfrentamientos entre estos grupos y combates con las fuerzas armadas siguen impactando a la población civil generando pérdidas de vida y desplazamiento forzado⁵.

El actuar de los grupos armados también ha provocado confinamientos⁶, ataques contra la población y la infraestructura civil incluso, contra misiones médicas y humanitarias; mayor contaminación por artefactos explosivos; aumento en los asesinatos colectivos (masacres) y, homicidios (líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, entre otros civiles), al igual que otros eventos que no son visibilizados como las restricciones de acceso, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños y niñas, violencia sexual y basada en género⁷. Todo lo anterior ha agravado las necesidades de protección y de otros sectores. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres, así como los afrocolombianos y las comunidades indígenas se han visto afectados de manera desproporcionada por las diferentes emergencias con impacto humanitario.

El paso de dos ciclones por el Caribe, principalmente el huracán Iota Categoría cinco (5) y el fenómeno de la Niña, que tendrá presencia hasta el primer trimestre del 2021,

¹ Para uso de este documento se entiende por crisis o emergencias las situaciones humanitarias ocasionadas por la violencia armada, los desastres, la COVID-19 y las situaciones mixtas que generan afectaciones en la protección y la pérdida de medios de vida de la población civil.

² De aquí en adelante se denominará Acuerdo Final al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera alcanzado en Noviembre de 2016 al final del proceso de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP.

³ El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó para 2020 una caída del 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia. <https://www.dane.gov.co/index.php/component/search/?searchword=PIB%20percapita&searchphrase=all&Itemid=109>

⁴ Reporte del Secretario General de Naciones Unidas. UNMVC. S/2020/603. <https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n2015182.pdf> y los impactos del covid-19 en la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz

⁵ Impacto Humanitario y Tendencias de 2020. OCHA Colombia. <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/impacto-humanitario-y-tendencias-entre-enero-y-diciembre-de-2020>

⁶ Nota conceptual: Acceso humanitario, limitaciones de movilidad y confinamiento. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf

⁷ Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2020. <https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9547-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2020>

En este documento se utiliza la terminología “afectado por violencia armada” en línea con la terminología utilizada por el Gobierno, sin perjuicio a otras caracterizaciones del contexto utilizadas en otros informes oficiales de las Naciones Unidas o de otras organizaciones humanitarias.

también generaron afectaciones en el norte y noroccidente de Colombia no vistas en años anteriores, devastando las islas de Santa Catalina y Providencia y afectando a más de 330.000 personas en 14 departamentos del país⁸. En total, más de 610,000 personas resultaron afectadas por desastres naturales en 2020, principalmente por inundaciones.

Dadas las dificultades socioeconómicas para mantenerse en Colombia, en el segundo y tercer trimestre del año refugiados y migrantes venezolanos retornaron a su país, y más recientemente se han evidenciado reingresos de venezolanos a Colombia, que se prevé aumentarán para 2021, generando nuevas necesidades de asistencia y apoyo a esta población; además la migración transcontinental que se da en menor proporción.

La combinación de estos eventos y factores sumada a la vulnerabilidad preexistente de la población en zonas rurales y remotas del país ha tenido un impacto multisectorial estimado de 6,7 millones de personas con necesidades, de las cuales 5,6 millones requieren alguna

forma de asistencia humanitaria. No obstante, como consecuencia del impacto socioeconómico del COVID-19, a mediano plazo se estima que, más allá de la asistencia humanitaria, muchas más personas requerirán un apoyo social y económico, para recuperar sus medios de vida y superar su vulnerabilidad.

Alcance del Análisis

La situación humanitaria e interna del país determinada en gran parte por el reciente impacto de la pandemia del COVID-19, junto a dinámicas de violencia, la pobreza, los desastres naturales tuvo un deterioro considerable de las consecuencias humanitarias, reflejado en un aumento del 31 por ciento de las personas con necesidades respecto al año anterior. El análisis de severidad de las necesidades que prioriza grupos vulnerables y las zonas más afectadas se llevó a cabo a través de un análisis cuantitativo y cualitativo en consulta con los equipos de terreno en varias regiones del país.



ARAUCA/ COLOMBIA

Granja que promueve el trabajo para personas con discapacidad
Crédito de la foto: WFP

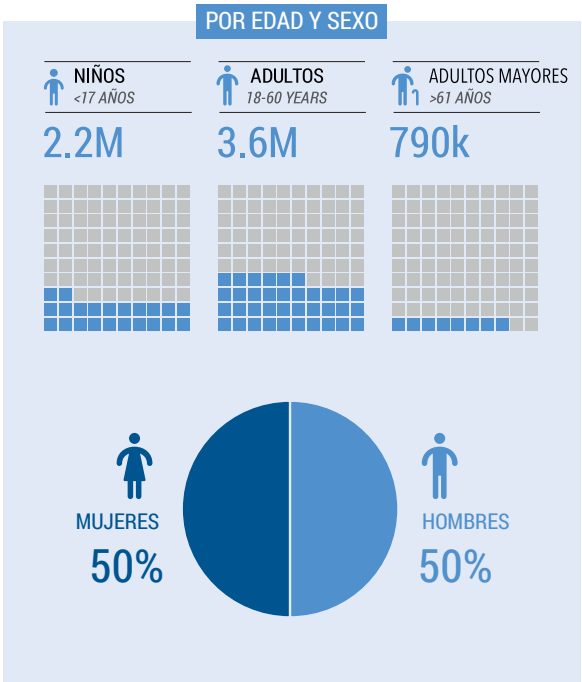
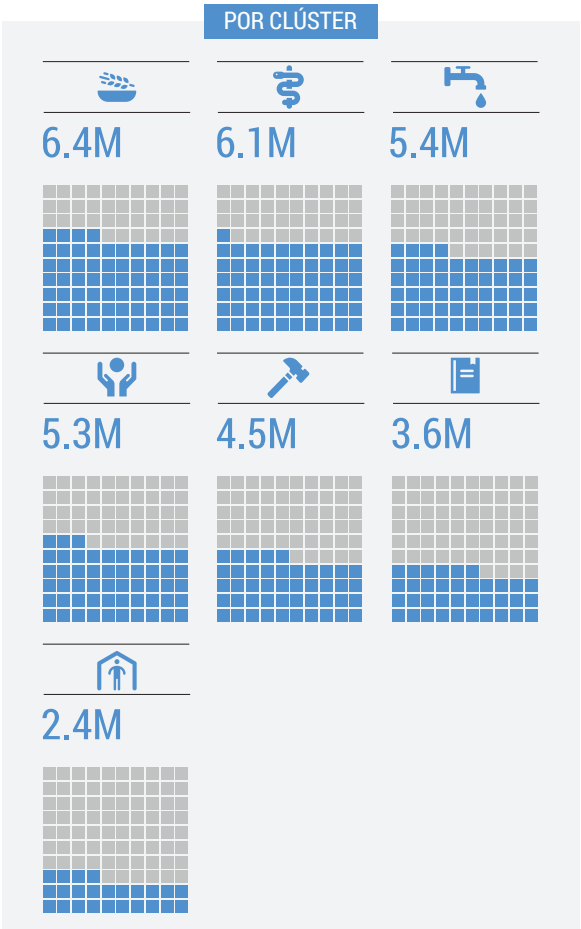
⁸ Informe de situación No.5 - Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias (03/12/2020) Actualización No.8 <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no5-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada>

Número estimado de personas en necesidad

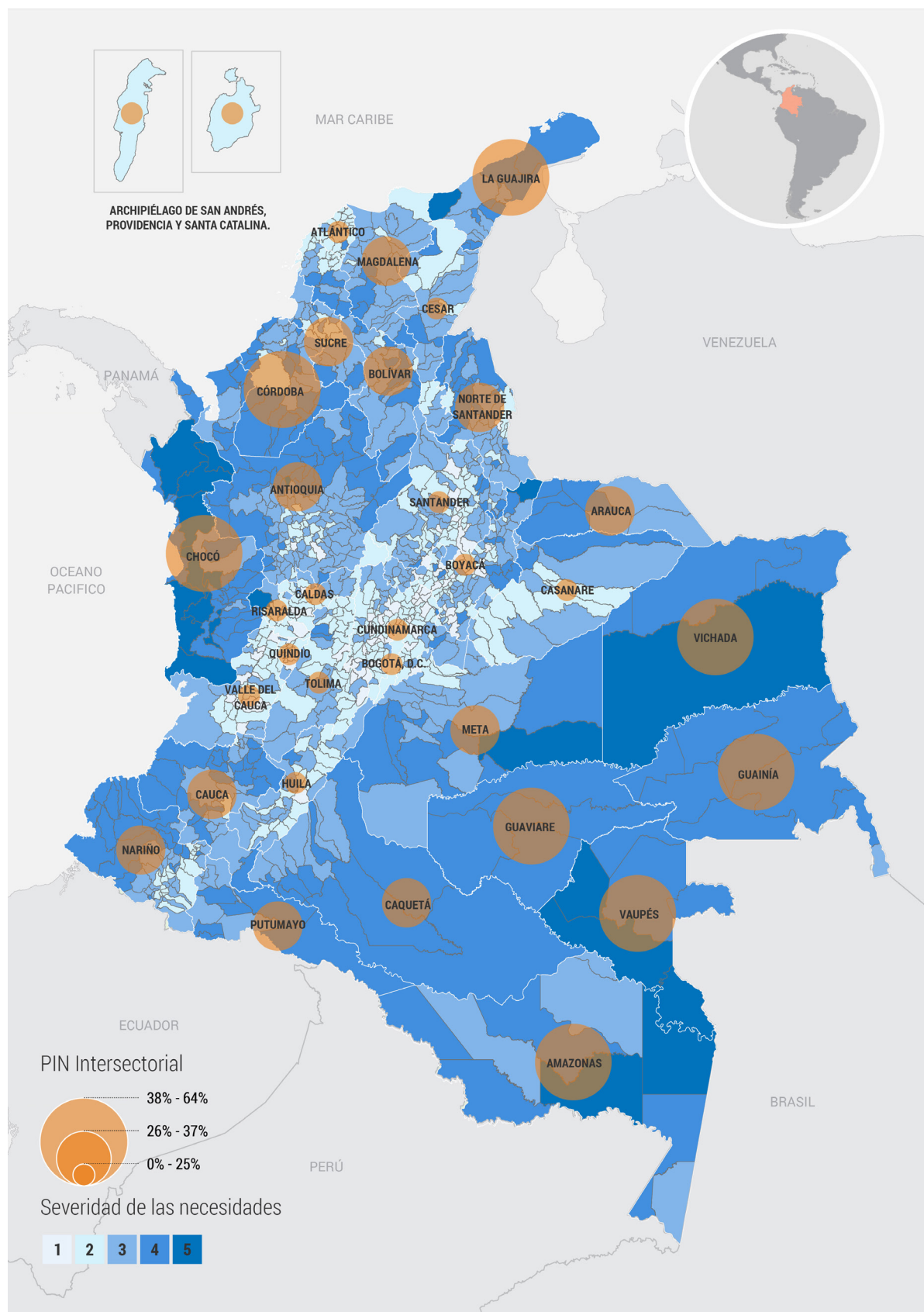
POBLACIÓN TOTAL



PERSONAS EN NECESIDAD

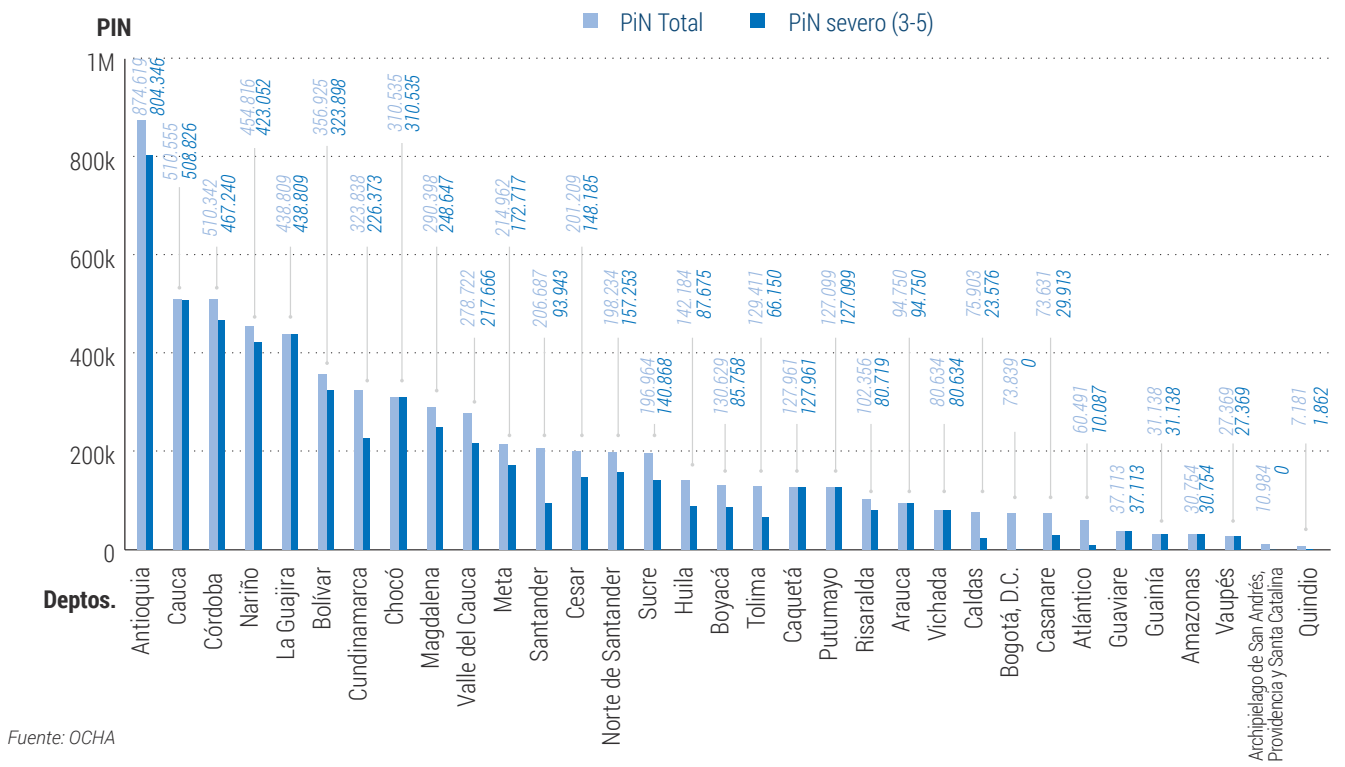


SEVERIDAD DE LAS CONDICIONES HUMANITARIAS Y NÚMERO DE PERSONAS EN NECESIDAD



Fuente: OCHA

Personas en necesidad por departamento



RÍO OPOGADÓ/ CHOCÓ. COLOMBIA

Clúster Agua Saneamiento e Higiene dando atención a la Unión Bakiasa,
Resguardo Indígena Embera
Crédito de la foto: Alianza por la Solidaridad

PIN POR DEPARTAMENTO POBLACIÓN Y SEVERIDAD

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE PERSONAS EN CADA NIVEL DE SEVERIDAD					PIN SEVERO (3-5)	PIN TOTAL
	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO		
Amazonas	-	-	13.809	12.616	4.329	30.754	30.754
Antioquia	147	70.126	444.337	357.329	2.680	804.346	874.619
Arauca	-	-	26.657	68.093	-	94.750	94.750
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	-	10.984	-	-	-	0	10.984
Atlántico	-	50.404	1.772	8.315	-	10.087	60.491
Bogotá, D.C.	-	73.839	-	-	-	0	73.839
Bolívar	-	33.027	166.929	156.969	-	323.898	356.925
Boyacá	518	44.353	59.479	17.825	8.454	85.758	130.629
Caldas	467	51.860	23.576	-	-	23.576	75.903
Caquetá	-	-	67.420	60.541	-	127.961	127.961
Casanare	-	43.718	21.908	8.005	-	29.913	73.631
Cauca	-	1.729	220.067	288.759	-	508.826	510.555
Cesar	-	53.024	114.117	34.068	-	148.185	201.209
Chocó	-	-	34.104	111.620	164.811	310.535	310.535
Córdoba	-	43.102	169.089	298.151	-	467.240	510.342
Cundinamarca	613	96.851	223.076	3.297	-	226.373	323.838
Guainía	-	-	74	31.064	-	31.138	31.138
Guaviare	-	-	-	37.113	-	37.113	37.113
Huila	67	54.442	82.308	5.367	-	87.675	142.184
La Guajira	-	-	91.337	311.208	36.264	438.809	438.809
Magdalena	-	41.751	175.759	72.888	-	248.647	290.398
Meta	-	42.245	71.669	96.381	4.667	172.717	214.962
Nariño	-	31.764	99.381	323.671	-	423.052	454.816
Norte de Santander	6	40.975	65.429	91.824	-	157.253	198.234
Putumayo	-	-	49.694	77.405	-	127.099	127.099
Quindío	285	5.033	1.862	-	-	1.862	7.181
Risaralda	53	21.584	67.079	-	13.640	80.719	102.356
Santander	317	112.428	80.276	13.667	-	93.943	206.687
Sucre	-	56.096	79.169	61.699	-	140.868	196.964
Tolima	84	63.177	62.226	3.924	-	66.150	129.411
Valle del Cauca	469	60.587	217.666	-	-	217.666	278.722
Vaupés	-	-	-	19.310	8.059	27.369	27.369
Vichada	-	-	-	13.144	67.490	80.634	80.634
TOTAL GENERAL:	3.027	1.103.099	2.730.269	2.584.252	310.394	5.624.915	6.731.041

PIN TOTAL DESAGREGADO POR GÉNERO, EDAD Y PERSONAS DESPLAZADAS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	POR GÉNERO HOMBRES / MUJERES (%)		POR EDAD NIÑOS / ADULTOS / ADULTOS MAYORES (%)		DISCAPACITADOS (%)	PERSONAS DESPLAZADAS (QUE NO SUPERARON SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD)
Amazonas	52 / 48	<div><div></div><div></div></div>	44 / 48 / 8	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	239
Antioquia	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	31 / 56 / 13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	75.7k
Arauca	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	35 / 56 / 9	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	6.8k
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	48 / 52	<div><div></div><div></div></div>	27 / 60 / 13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	-
Atlántico	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	32 / 56 / 12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	1k
Bogotá, D.C.	48 / 52	<div><div></div><div></div></div>	23 / 63 / 14	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	610
Bolívar	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	34 / 54 / 12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	20k
Boyacá	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	30 / 52 / 18	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	646
Caldas	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	27 / 55 / 18	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	583
Caquetá	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	36 / 54 / 10	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	8.8k
Casanare	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	33 / 58 / 9	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	1k
Cauca	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	31 / 56 / 13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	28.8k
Cesar	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	37 / 53 / 9	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	3.9k
Chocó	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	40 / 51 / 9	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1%	43k
Córdoba	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	33 / 54 / 13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	27.5k
Cundinamarca	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	28 / 60 / 12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	520
Guainía	52 / 48	<div><div></div><div></div></div>	47 / 47 / 6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1%	679
Guaviare	53 / 47	<div><div></div><div></div></div>	38 / 54 / 8	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	2k
Huila	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	34 / 54 / 12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	7%	3.5k
La Guajira	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	41 / 52 / 7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1%	2.1k
Magdalena	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	36 / 53 / 11	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	3.3k
Meta	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	33 / 56 / 11	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	5.1k
Nariño	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	33 / 55 / 12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	78.2k
Norte de Santander	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	35 / 55 / 11	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	69.3k
Putumayo	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	35 / 56 / 9	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	6k
Quindío	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	23 / 58 / 20	<div><div></div><div></div><div></div></div>	5%	332
Risaralda	48 / 52	<div><div></div><div></div></div>	28 / 56 / 16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	2k
Santander	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	29 / 57 / 14	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	1.5k
Sucre	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	33 / 54 / 13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	6.2k
Tolima	51 / 49	<div><div></div><div></div></div>	30 / 53 / 17	<div><div></div><div></div><div></div></div>	4%	5.3k
Valle del Cauca	48 / 52	<div><div></div><div></div></div>	32 / 54 / 14	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	43.8k
Vaupés	52 / 48	<div><div></div><div></div></div>	53 / 41 / 6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2%	230
Vichada	53 / 47	<div><div></div><div></div></div>	46 / 49 / 6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1%	1k
TOTAL GENERAL:	50 / 50	<div><div></div><div></div></div>	34 / 55 / 12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	3%	450.715

Parte 1:

Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias

GUAPÍ / CAUCA, COLOMBIA

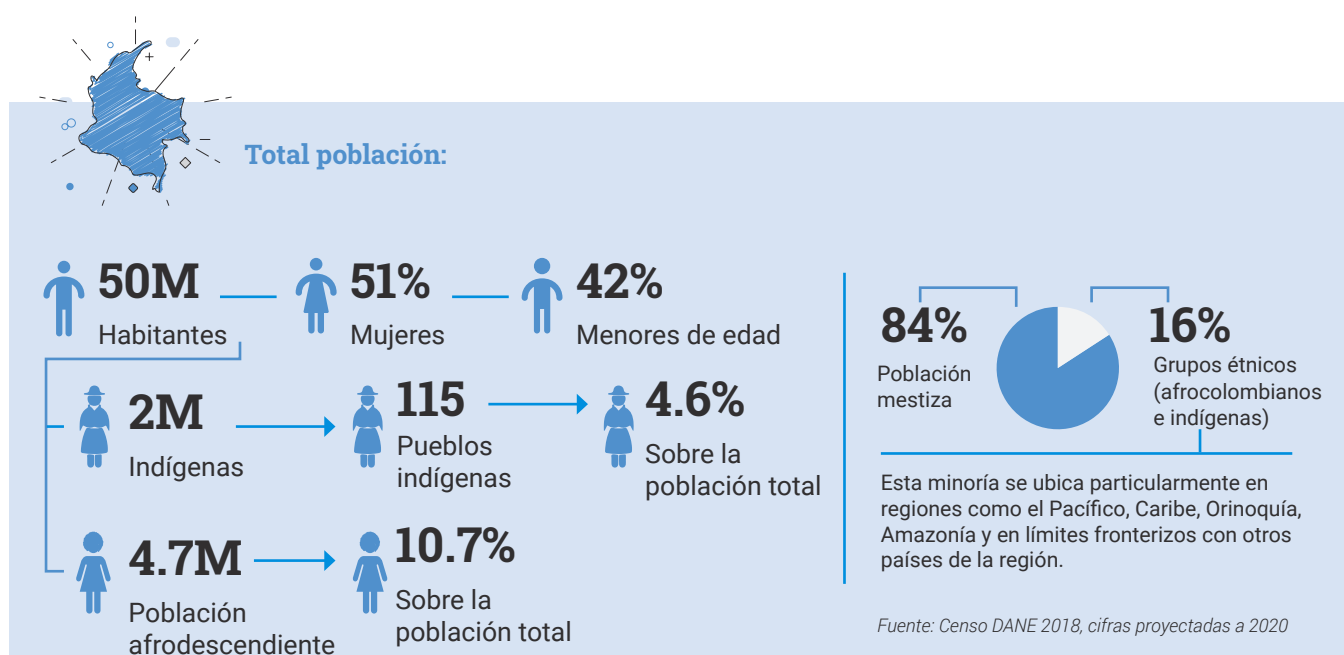
Comunidades recibiendo suministros de agua potable

Crédito de la foto: Clúster WASH, Nadya González



1.1

Contexto de la crisis



En el primer trimestre de 2020 y tras casi cuatro años de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia con las extintas guerrillas FARC-EP⁹, el impacto por la pandemia de la COVID-19¹⁰ se ha sumado a la situación interna del país donde se había observado un alivio humanitario en algunas poblaciones de las zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC), e importantes avances en sus indicadores socioeconómicos, sin embargo el deterioro se había empezado a evidenciar desde 2018, con la intensificación de la violencia¹¹, los altos índices de violencia armada en algunos

territorios, y las afectaciones desencadenadas por fenómenos naturales y/o antrópicos. Adicionalmente, los movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes con necesidad de protección internacional profundizan las necesidades humanitarias existentes, particularmente en comunidades de acogida en varias zonas del país. En este contexto, la múltiple afectación que al mismo tiempo configura una crisis de protección, deja consecuencias humanitarias y socioeconómicas importantes, limitando además el acceso humanitario en algunos lugares.

⁹ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, con 12.144 excombatientes desmovilizados y en proceso de reincorporación colectiva: <http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20en%20Cifras%20corte%20Septiembre%20%202020.pdf>

¹⁰ Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, bajo el Decreto No. 417 del 17 de marzo del 2020: <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf>

¹¹ El término violencia armada se utiliza sin perjuicio a la clasificación del CICR disponible en: <https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario>; así como al derecho internacional humanitario y a la ley 2078 de 2021 a los cuales se adhiere la comunidad humanitaria en el país

Contexto demográfico, económico, de infraestructura y ambiental.

Los indicadores muestran que al menos un 17,5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional¹². Esta proporción es casi el doble para la población que habita en centros poblados y rurales dispersos, correspondiendo al 34,5 por ciento. Así mismo, un 35,7 de la población a nivel nacional se encuentra en situación de pobreza monetaria y un 9.6 por ciento en pobreza monetaria extrema¹³. Es decir, al menos 4,6 millones de colombianos no cuentan con la posibilidad económica para adquirir una canasta de consumo básica.



El crecimiento económico del país se vio fuertemente impactado por la pandemia de la COVID-19.

A partir del segundo trimestre del año y a pesar de los grandes esfuerzos de mitigación del Gobierno Nacional¹⁴, el riesgo de inseguridad alimentaria y nutrición, impactos en la salud, educación y protección de las personas en el país incrementó ante la contracción de la economía, reflejado especialmente en el Producto Interno Bruto (PIB)¹⁵ con un -9.0 por ciento; así mismo, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)¹⁶ muestra un -7.25 por ciento respecto al mismo período del año anterior, asociados particularmente a las medidas de cierre y aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19 durante cinco meses, que impactaron las principales actividades económicas. Con corte a Octubre de 2020, la tasa de desocupación total nacional fue 14.7 por ciento, lo que significó el aumento de personas trabajando en la economía informal con repercusiones en las condiciones de vida y su bienestar¹⁷. En este contexto, llama la atención la pérdida de empleos desproporcionada de las mujeres

(27%)¹⁸ en relación con los hombres (18%), reflejando una brecha amplia en términos de género, a pesar de la significativa participación que tienen hombres y mujeres en diferentes sectores.



En las últimas décadas, el país también presentó un progreso en su infraestructura relacionada a la red vial, tecnologías de la información y comunicación, vivienda, minas y energía, entre otros, debido a la alta inversión en obras civiles. Sin embargo, la cobertura de los servicios básicos evidencia grandes brechas entre las áreas urbanas y rurales de algunos lugares, especialmente los más apartados y de difícil acceso por su geografía; esta situación se presenta en algunas vías secundarias y terciarias, requiriendo esfuerzos para mejorar y expandir la conexión entre las zonas productivas rurales con las troncales, al igual que el acceso a servicios.



En relación con el contexto ambiental, la biodiversidad y la riqueza de Colombia en recursos naturales y minerales ha hecho necesario la creación de leyes para su protección y conservación. A pesar de estas medidas, en ocasiones tanto eventos relacionados al cambio climático como proyectos relacionados con la explotación de algunos recursos, más allá de aportar al crecimiento económico también dejan daños socioambientales, en los ecosistemas, y hasta consecuencias o riesgos en la salud, seguridad alimentaria, medios de subsistencia y/o hábitat de las personas. A estos factores se suma la ocurrencia de otros eventos de origen natural como la temporada de sequía y/o lluvias, que en la ocurrencia de afectaciones graves sobrepasan en ocasiones la capacidad instalada para la respuesta local, particularmente en zonas rurales y remotas.

¹² Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza multidimensional se refiere a la población que afronta paralelamente: analfabetismo, barreras de acceso a servicios de cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, trabajo informal, desempleo de larga duración, sin acceso a servicios de salud y condiciones de vivienda y servicios públicos adversas (carencia de acceso a agua potable, hacinamiento crítico, entre otros).

¹³ Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2019. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019#pobreza-multidimensional>

¹⁴ Acciones realizadas por el Gobierno Nacional para la prevención del COVID-19 y para mitigar el impacto socio-económico sobre la población vulnerable: <https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-economia.html>

¹⁵ Producto Interno Bruto (PIB) Nacional Trimestral. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

¹⁶ Indicador de seguimiento a la economía (ISE) Septiembre de 2020. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_ISE_sep2020.pdf

¹⁷ Según el DANE, comparado con octubre de 2019, hay 1.5 millones de personas ocupadas menos, ya que en este período, se contaba con al menos 22.8 millones de personas trabajando. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_20.pdf

¹⁸ Las mujeres ocupadas pasaron de 9,2 millones en el segundo trimestre de 2019 a 6,7 en el mismo trimestre de 2020: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf>

Marco legal y Contexto de seguridad



Colombia como Estado Social de Derecho cuenta con sólidos marcos jurídicos y arquitectura de respuesta basados en la Constitución Política¹⁹ y estándares internacionales para la defensa y estabilización del territorio. Estos

garantizan la protección y el acceso a derechos fundamentales de la población en los diferentes sectores. Entre estos marcos se destaca la Ley 1448 de 2011²⁰ más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual se prorrogó hasta 2030 y cubre actualmente a más de 9.1 millones de víctimas de las cuales el 89 por ciento corresponde a desplazados internos, y entre los cuales 7,3 millones aún están en proceso de reparación. De la misma manera, para la gestión, prevención y atención de desastres por fenómenos naturales o antrópicos existe la Ley 1523 de 2012²¹ que desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres brinda protección a la población civil en su entorno físico e integridad. El Gobierno Nacional ha dispuesto un marco jurídico para la atención a refugiados, migrantes, retornados colombianos y binacionales provenientes de Venezuela, donde se destacan las medidas para la regularización de la población venezolana²² mediante las rondas de renovación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) y la implementación de dos rondas adicionales; además de las medidas de confirmación de nacionalidad colombiana de niños y niñas nacidos en Colombia de padres venezolanos, para la prevención de la apatridia. El desafío principal en la aplicación de estas leyes corresponde a algunas restricciones en los recursos financieros y capacidades a nivel territorial para implementarlas.



Por otro lado, en el actual escenario pos-acuerdo persisten desafíos de seguridad para las comunidades.

A pesar de varios logros alcanzados gracias a la implementación del Acuerdo Final, (reincorporación de excombatientes) se observa una persistencia e incremento de los índices de violencia armada durante los últimos tres años, como consecuencia del accionar de grupos armados organizados (GAO)²³ y grupos armados delictivos (GAD)²⁴ o de crimen organizado (de orden nacional y transnacional), como parte de las disputas territoriales en algunas zonas rurales apartadas y urbanas antes controlados por la extinta guerrilla FARC-EP²⁵. La proliferación, reconfiguración, expansión de estos GAO y GAD, es propiciado por la baja presencia de instituciones Estatales en territorios remotos, lo que afecta la dinámica social en estas comunidades. La presencia y accionar de estas estructuras armadas coincide también con unas áreas rurales de marcadas desigualdades, altos índices de pobreza multidimensional, falta de oportunidades económicas legales, presencia de cultivos ilícitos, altas tasas de homicidios, y que por su ubicación se consolidan como puntos estratégicos para el flujo de economías ilegales (cultivos de uso ilícito, laboratorios de procesamiento de hoja de coca, tráfico de drogas, minería ilegal, trata de personas, entre otras). Este año, en el marco de las restricciones por la COVID-19, los grupos armados expandieron su alcance territorial y agudizaron las restricciones de las medidas oficiales decretadas por el Gobierno Nacional, declarando objetivo militar a las personas que no cumplan con las medidas de toque de queda y aislamiento, e incluso a quienes se contagiaran. Es así como el contexto de seguridad sigue siendo frágil en algunas zonas del país con presencia de grupos armados lo cual impacta el acceso de las instituciones y actores humanitarios a varias de estas zonas.

¹⁹ Constitución Política de la República de Colombia. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

²⁰ Con una vigencia hasta el 2030: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=155306#>

²¹ Ley 1523 del 24 Abril 2012. <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley152324042012.pdf>

²² Dentro de los esfuerzos del Gobierno Nacional se incluye que junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil se expidió la Resolución 8470 del 5 de agosto de 2019 (https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/resolucion_8470.pdf), por medio de la cual se ha confirmado la nacionalidad colombiana a 47.617 niños y niñas nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos, con corte al 30 de agosto de 2020.

²³ Vincula a la guerrilla del ELN, EPL y los frentes de las extintas FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo Final denominados "grupos disidentes de las FARC-EP"

²⁴ Otros grupos ya existentes generadores de violencia como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, y nuevas estructuras armadas conformadas por actores reclutados, vinculados y/o desertores, de otras estructuras; llama la atención la "Segunda Marquetalia" liderados por algunos antiguos altos mandos de las FARC-EP que retomaron las armas en agosto de 2019.

²⁵ 13 gráficos para entender la violencia organizada en el post-Acuerdo de Paz. Fundación Ideas para la Paz. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1928> y Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace>

LÍNEA DE TIEMPO DE EVENTOS RELEVANTES 2020



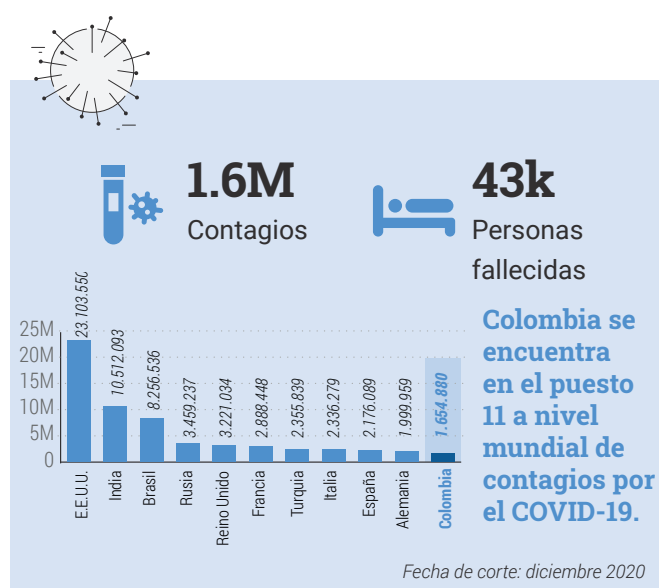


LETICIA, AMAZONAS, COLOMBIA

Atenciones en salud física y mental Leticia

Crédito de la foto: Médicos del Mundo

1.2 Choques e Impacto de la Crisis



Impacto y dinámicas en curso



La pandemia del COVID-19 ha tenido un **impacto importante en Colombia tanto en el sector de salud como en la seguridad alimentaria de la población.** Con la llegada y evolución de la pandemia del COVID-19 al país y a pesar de la implementación de medidas de afrontamiento y grandes esfuerzos del Gobierno Nacional para fortalecer el sistema sanitario y de salud, entre marzo y diciembre se han reportado cerca de 1,6 millones de personas contagiadas (el 93% recuperadas) y más de 43.000 personas fallecidas²⁶, ubicando a Colombia en

²⁶ Instituto Nacional de Salud <https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx>

el 12 puesto a nivel mundial de contagios y muertes (hasta diciembre²⁷). El incremento en los niveles de inseguridad alimentaria para aproximadamente 3,5 millones de personas, según estimaciones de WFP, es uno de los principales impactos como parte de la contracción de la economía por el cierre que tuvo el país. Tanto los entornos urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) pero con mayor énfasis los rurales de difícil acceso y con niveles intermedio o bajos de desarrollo²⁸ (Chocó, Amazonas, Vaupés, Vichada), ha puesto a prueba la prestación de servicios de salud de comunidades vulnerables, en algunos casos con desborde en la capacidad de respuesta, pudiendo afectar la supervivencia de algunos pueblos indígenas. Por la misma causa, más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron por fuera de las

escuelas y dejaron de asistir a estas, entendiéndolas como espacios protectores de garantía y confluencia de varios derechos. Si bien seguían vinculados formalmente al sistema educativo, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen los medios de conectividad para continuar con un proceso educativo virtual a distancia, y esto se constituyó en un factor expulsor del sistema durante la pandemia, además de las dificultades para continuar con un proceso regular, periódico y de seguimiento efectivo a los aprendizajes.

Los actores humanitarios identificaron que al menos 10.4 millones de personas se vieron afectadas directa e indirectamente por las consecuencias de la pandemia en Colombia, incluyendo afectaciones en términos de salud, a nivel socioeconómico e impacto humanitario²⁹.



Colombia sigue siendo el mayor receptor personas refugiadas y migrantes venezolanos²¹.



1.74M (43%)
Personas refugiadas y migrantes venezolanos



844.666
Retornados colombianos y binacionales



La intensidad y regularidad de las acciones de violencia armada por parte de los diferentes GAO o GDA, en algunas zonas del país ocasionaron nuevas emergencias y afectaciones a la población civil. Ya sea por enfrentamientos entre grupos o los combates de éstos con la Fuerzas Armadas entre otros (más de 590 en lo que va de año) con algunas infracciones al derecho internacional humanitario, paros armados impuestos, entre otros ocasionaron emergencias masivas como desplazamientos forzados y/o confinamientos afectando a más de 91.000 personas de comunidades rurales vulnerables destacándose grupos étnicos, mujeres, niños y niñas.

No deja de preocupar a las autoridades, a las organizaciones humanitarias y otros sectores de la sociedad, los ataques y agresiones directas contra personas y bienes civiles (1.778 eventos), y el uso de minas antipersonal (MAP), Municiones Sin Explosionar (MSE) que presentan una tendencia al alza; estos se manifiestan en víctimas por casos de reclutamiento forzado y vinculación de menores, violencia sexual y basada en género (VBG), accidentes e incidentes con artefactos explosivos, amenazas, imposición de códigos de conducta, homicidios y otros ataques contra bienes protegidos e indispensables para la supervivencia, como parte del control social y territorial que imparten estos grupos armados. Se resaltan regiones como Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño Valle

²⁷ John Hopkins University. Mapa global de casos reportados de Coronavirus <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

²⁸ Tipologías Departamentales y Municipales <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Tip-FormatoPublicacion.pdf>

²⁹ Plan Intersectorial de Respuesta COVID-19 - Versión N°1-2 <https://www.humanitarianresponse.info/es/op%C3%A9rations/colombia/document/covid-19-response-plan-summary#:~:text=Este%20plan%20est%C3%A1%20basado%20en,respuesta%20a%20la%20COVID%2D19.>

del Cauca); Noroccidental (Norte de Antioquia, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar); Frontera con Venezuela (La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada) y Suroriente (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo).

Colombia sigue siendo el mayor receptor de personas³⁰ refugiadas y migrantes venezolanas con 1,74 millones de personas, representando el 43 por ciento de los 4,2 millones de venezolanos en la región³¹; a esta cifra se suman los retornados colombianos y binacionales (un total de 844.666³²), y se entremezclan dinámicas de movimientos pendulares entre los dos países.

En este contexto, la convergencia de los diferentes grupos vulnerables de nacionalidad colombiana y las personas refugiadas y migrantes en el país, configuran una doble, triple e incluso múltiple afectación humanitaria, cuando confluyen afectaciones por flujos migratorios, desastres, violencia y/o COVID-19. las cuales requieren de una mayor articulación y coordinación desde todos los niveles ante el impacto humanitario y riesgos de protección.

El tránsito de personas hacia terceros países continúa y se agrava para aquellos que hacen el recorrido caminando. La falta de documentación válida y el estatus irregular son factores de riesgo de protección para esta población durante el cruce fronterizo y el tránsito (especialmente debido a riesgos de trata y tráfico, violencia sexual y basada en el género, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otros incidentes) así como a su llegada a los departamentos de acogida, ante la imposibilidad o dificultad de acceder a derechos y servicios básicos. Un total de 693.694 PEP se expidieron a octubre 2020³³, sin embargo, más de la mitad (55.5%) de los venezolanos en el país carecen de un estatus regular³⁴. Entre los meses de marzo y noviembre, dadas las medidas de aislamiento obligatorio preventivo y el cierre oficial de las fronteras internacionales, más de 119.000 ciudadanos venezolanos han retornado a su país desde Colombia³⁵, sin embargo, Migración Colombia calcula que “cerca del 80 por ciento de los venezolanos que han retornado a su país ya están regresando a Colombia como estaba previsto en los siguientes meses, en compañía de una persona más”³⁶.



DADEIBA/ ANTIOQUIA, COLOMBIA

Víctimas de la violencia armada pertenecientes a la comunidad indígena Embera Katio
Crédito de la foto: PNUD

³⁰ Según Migración Colombia, a 30 de agosto 2020, un total de 1.722.919 venezolanos con vocación de permanencia se encuentran en Colombia, <https://bit.ly/2IC5zFh>. De ellos, 37% son hombres, 37% mujeres, 12% niñas y 12% niños.

³¹ Refugiados y migrantes venezolanos en la región, noviembre 2020: <https://r4v.info/es/documents/details/82846>

³² Registraduría Nacional del Estado Civil, periodo de reporte: 01 enero - 30 agosto 2020

³³ Migración Colombia - Tablero Público PEP, disponible en: <https://tabsoft.co/33nPpH5>

³⁴ Migración Colombia, 30 de agosto 2020: <https://bit.ly/2IC5zFh>

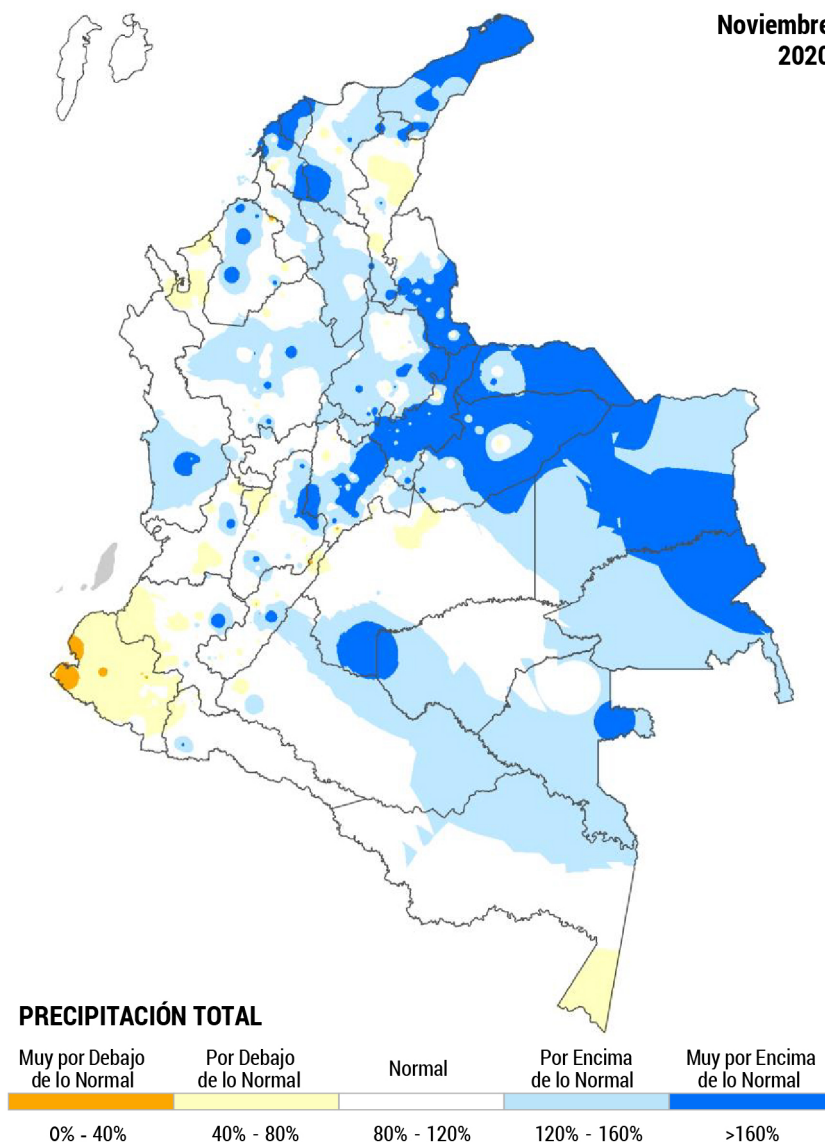
³⁵ Migración Colombia, corte 16 noviembre. Estos retornos incluyen algunos movimientos pendulares de los primeros días de cierre fronterizo.

³⁶ Ver más en <https://bit.ly/3hvlwYf>

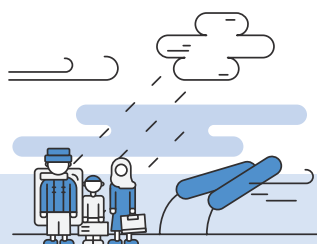
FENÓMENO DE LA NIÑA (CICLO ENOS)

Anomalía Porcentual Precipitación Mensual

Noviembre
2020



Fuente: IDEAM



610k

Afectados por desastres de origen natural



>3k

Eventos de desastres de origen natural en toda Colombia

Precipitaciones más altas



18

Estación Andagoya
Municipio Medio
San Juan (Chocó)
264 mm



18

Estación La Vuelta
Municipio Lloró
(Chocó)
156.3 mm



19

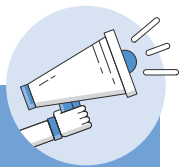
Estación Puerto
Angosturas
Municipio Cubarral
(Meta) 160 mm



19

Estación Puertoimón
Municipio Mocoa
(Putumayo)
152 mm

Impacto por eventos excepcionales



“Con las inundaciones se recrudece la vulnerabilidad de las poblaciones. La violencia armada de por sí tiene las comunidades confinadas, estas inundaciones recrudecen este confinamiento y lo extienden a más personas”

- Testimonio de Comunidades



Durante 2020 y particularmente en noviembre, confluyó la segunda temporada de lluvias con el desarrollo del Fenómeno de la Niña³⁷ y el paso con coletazos de tormentas tropicales y huracanes por El Caribe colombiano, afectando a más de 303.000 personas ubicadas en zona de alto riesgos y áreas de influencia de estos fenómenos. Las inundaciones, deslizamientos desencadenados por las crecientes de ríos, además de los fuertes vientos, ocasionaron graves afectaciones a los miles de damnificados particularmente en la zona insular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en la continental, en departamentos como Chocó, La Guajira, Antioquia, entre otros de las regiones centro y oriente. Los grandes daños en viviendas, pérdida de bienes, enseres, cultivos e incluso vidas, han profundizado necesidades sectoriales ya existentes, relacionadas principalmente a alojamientos, seguridad alimentaria y medios de vida, agua, saneamiento básico e higiene y salud. La magnitud de las emergencias ha requerido la activación y movilización de la capacidad de respuesta de todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres

(SNGRD), liderado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD) en coordinación con la cooperación internacional y organizaciones humanitarias para la complementariedad en la respuesta inmediata y la recuperación de los daños y afectaciones. Cabe señalar que la población refugiada y migrante que está ubicada en zonas de alto riesgo y proclives a los desastres naturales, han sido afectadas gravemente durante la temporada invernal. A final de año la UNGRD reportó al menos 610.000³⁸ personas afectadas por la ocurrencia de 3.319 emergencias de origen natural.

Impactos en la población



“Frente al desplazamiento forzado estamos viendo una etapa muy compleja. Comunidades que están pensando en no regresar jamás a sus territorios. Otras que retoman territorios diferentes y vuelven a ser desplazadas”

- Testimonio de Comunidades



El desplazamiento forzado³⁹ y el confinamiento⁴⁰ como hechos victimizantes siguen dejando víctimas.

A cuatro años de la firma de paz, más de 500.000 personas se han desplazado –con una media de 150.000 desplazados por año⁴¹– y de estas, al menos 120.000 han sido en eventos masivos, mientras que más de 114.000 personas han sido confinadas en el mismo período, la mayoría en 2020⁴² según el Registro

³⁷ El fenómeno de La Niña se consolida y amenaza con lluvias por encima de lo normal en el norte de América del Sur <https://news.un.org/es/story/2020/10/1483212>

³⁸ De éstas, aproximadamente 330.000 se ubicaron en 14 departamentos afectados principalmente por el paso del Huracán Iota y la confluencia de la temporada de lluvias y el fenómeno de la Niña. <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/informe-de-situacion/C3%B3n-no5-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada>

³⁹ Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión a las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 (infracciones al DIH o de violaciones graves y manifestadas a las normas internacionales de DDHH, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno). El desplazamiento masivo es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas. (<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf>)

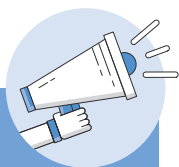
⁴⁰ Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es la conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la movilidad de un sujeto o un grupo por una zona geográfica específica causado por amenazas de Grupos Armados Organizados (GAO), situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la supervivencia personal y del grupo (www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf). Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del confinamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. Ver nota conceptual: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf

⁴¹ Red Nacional de Información y Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV): <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento>

⁴² Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte a agosto 2020 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

Único de Víctimas (RUV), a 31 de octubre de 2020 existe un consolidado de más de ocho millones de personas desplazadas y más de 46.000 confinados, de las cuales se han identificado más de 477.000 personas con necesidades intersectoriales.

Estos hechos victimizantes reconocidos por la Ley 1448 de 2011 en Colombia, continúan causando emergencias con un número importante de víctimas, por la persistencia de enfrentamientos, accidentes por MAP/MSE, amenazas con imposición de normas, homicidios por parte de los grupos armados. Mientras que en los desplazamientos las personas o comunidades dejan sus hogares como medida de autoprotección cuando ven amenazada su integridad, en los confinamientos restringen su movimiento limitando el acceso a bienes o servicios básicos para la supervivencia.



“Las propias comunidades han normalizado el hecho de vivir confinadas. Hay unos grises que no son todavía claros en términos de hasta donde se permite la movilidad de las comunidades y desde donde empiezan ellas a ejercer resistencia”

- Testimonio de Comunidades.



El confinamiento como nueva dinámica de victimización presenta un aumento exacerbado.

En lo corrido de 2020, los confinamientos han aumentado un 247 por ciento debido al accionar de los GAO/GAD, utilizándolo como táctica de victimización y afectando a unas 68,000 personas⁴³. Estos hechos evidencian una nueva dinámica que al mismo tiempo invisibiliza otros impactos y agresiones contra civiles. Mientras que en los desplazamientos masivos como en los confinamientos, se ve comprometida particularmente la protección, la seguridad alimentaria, el acceso a agua

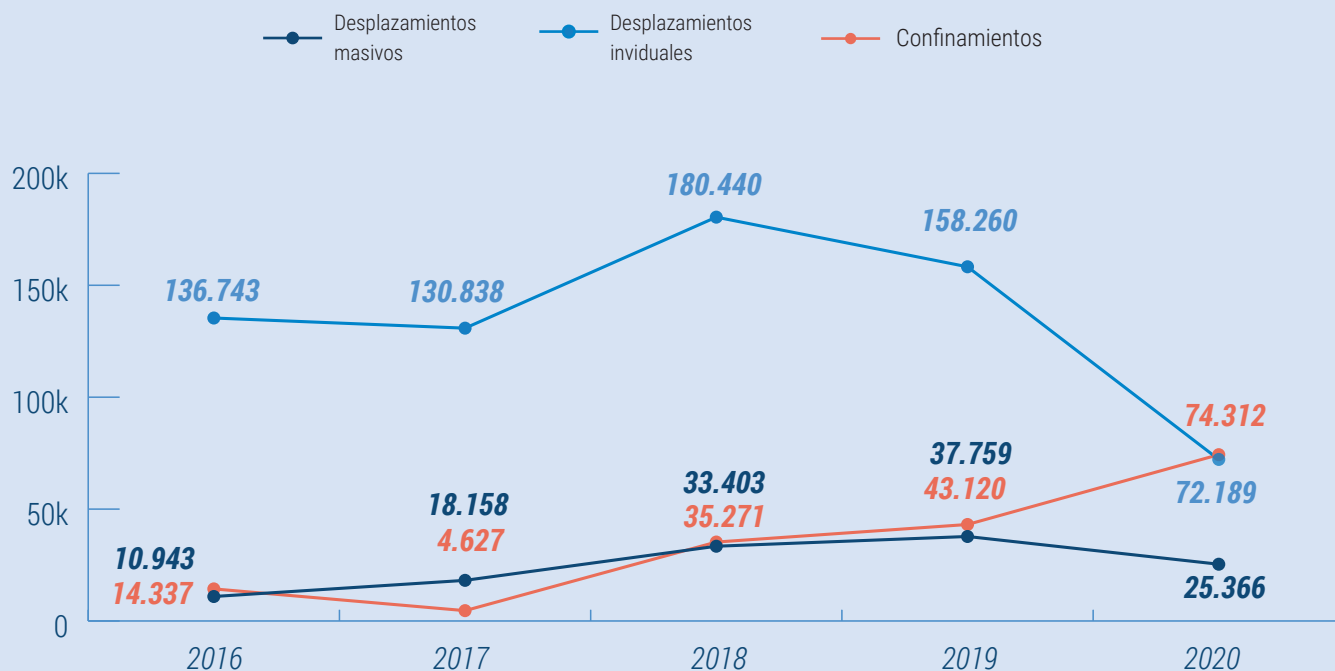
y saneamiento básico, salud, educación y medios de vida de la población civil, en la mayoría de los casos de desplazamientos masivos, las condiciones de los alojamientos temporales generalmente no son las adecuadas, además de la afectación en otros sectores. Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Córdoba reportaron el mayor número de eventos en 2020, sin embargo, preocupa la situación humanitaria en Huila y Bolívar, departamentos en los cuales no se registraban estos hechos en los últimos años.

Las mujeres, hombres, niños, niñas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas han sido gravemente afectados por los desplazamientos masivos y los confinamientos en 2020. Sin embargo, como consecuencia de las medidas de aislamiento, las cifras oficiales presentan un rezago de la información, debido a que la documentación de las declaraciones para que surtan los procesos de registro y valoración, han presentado retrasos al seguir protocolos de seguridad y estar estancados en los territorios por el cierre mismo de las vías terrestres y aéreas de comunicación.

También se destacan los desafíos que enfrentan los refugiados y migrantes que tuvieron que salir de sus hogares en Venezuela, quienes padecen también del accionar de los grupos armados en límites con Venezuela e incluso en otras zonas del país, ya que no cuentan con las herramientas para que se les reconozca como víctimas a través de la Ley 1448/2011, en la mayoría de los casos debido a falta de documentación cuando están en condiciones de migración irregular o por falta de conocimiento sobre la ruta de atención. Las organizaciones humanitarias han hecho un trabajo destacado de incidencia con autoridades locales y nacionales para asegurar la atención de esta población, sin embargo, aún se requiere de mayores esfuerzos para que a nivel departamental y local para que se conozca la ruta.

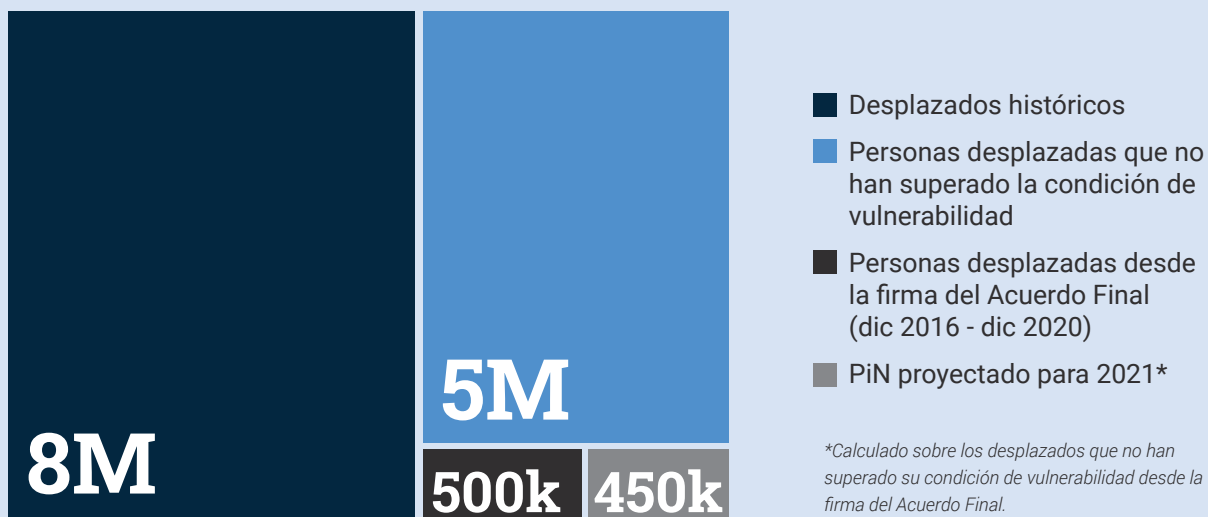
⁴³ Impacto Humanitario y Tendencias de 2020. OCHA Colombia. <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/impacto-humanitario-y-tendencias-entre-enero-y-diciembre-de-2020>

EVOLUCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS INDIVIDUALES Y MASIVOS



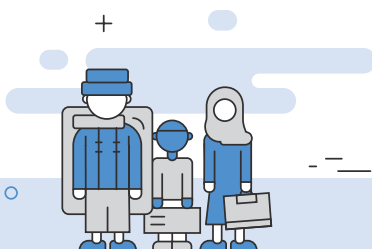
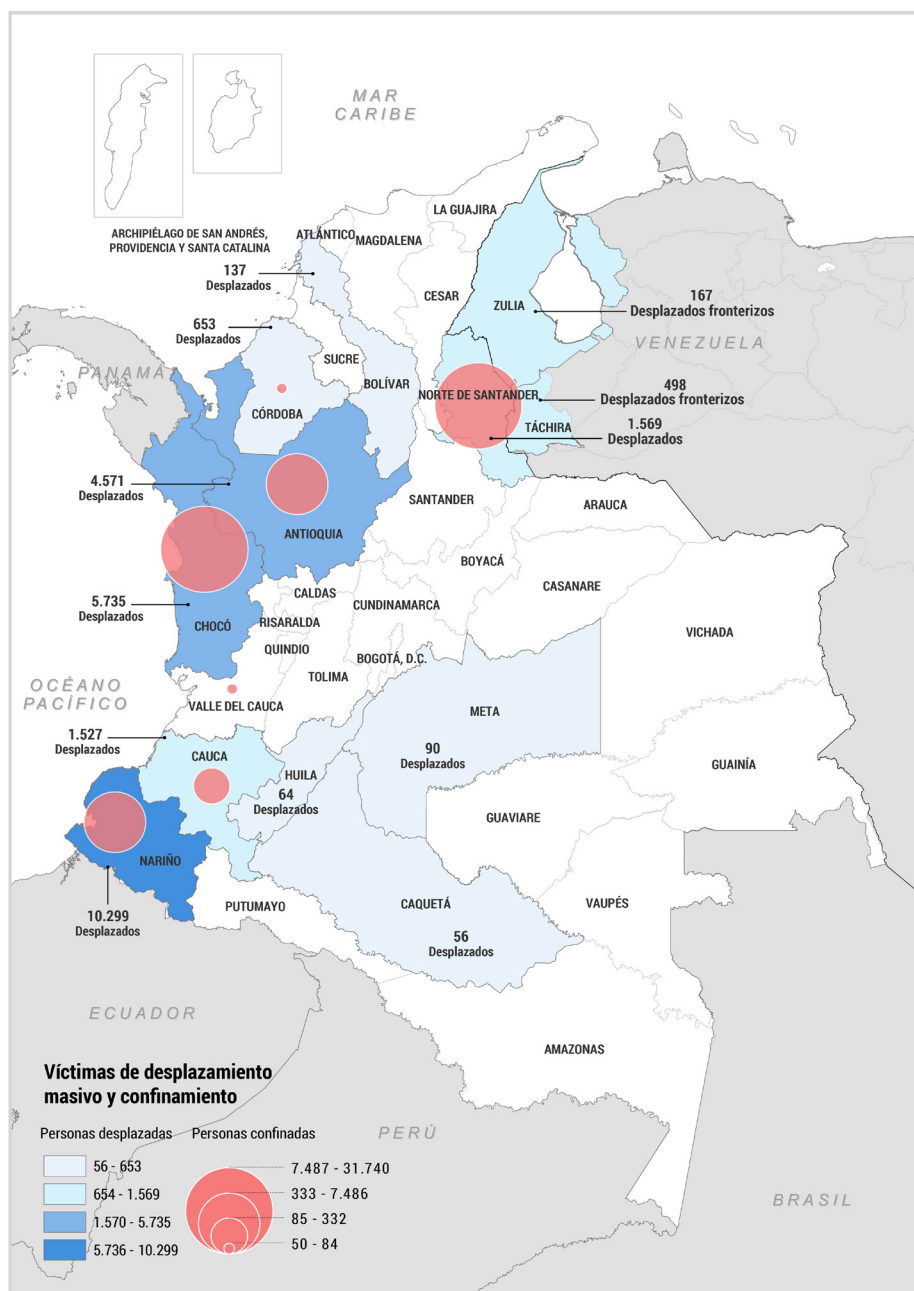
Fuente: Confinamientos y Desplazamiento masivo - Monitor OCHA corte diciembre 2020.
Desplazamiento Forzado- UARIV corte diciembre 2020. Durante 2020 puede haber subregistro considerando que la pandemia dificultó las declaraciones y otros procesos de registro. Incluye desplazamientos individuales y masivos.

PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS INDIVIDUALES Y MASIVOS



*Calculado sobre los desplazados que no han superado su condición de vulnerabilidad desde la firma del Acuerdo Final.

MAPA DE DESPLAZAMIENTOS Y CONFINAMIENTOS EN 2020



PERSONAS EN NECESIDAD

450k
26k



25%
Desplazados
(2020)



75%
Confinados
(2020)



2.234
Personas en
desplazamiento
transfronterizo



1.003
Refugiados y
migrantes
desplazados

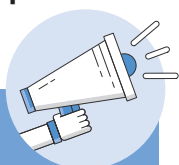


BOJAYÁ / CHOCÓ. COLOMBIA

Edificaciones abandonadas luego de la reubicación del pueblo consecuencia de la violencia armada

Crédito de la foto: OCHA, Claudia Rodríguez

Impacto en la protección de la población por incremento en los niveles de violencia:



"... Ahí no han explotado, pero que se sabe que tienen minas todo alrededor"

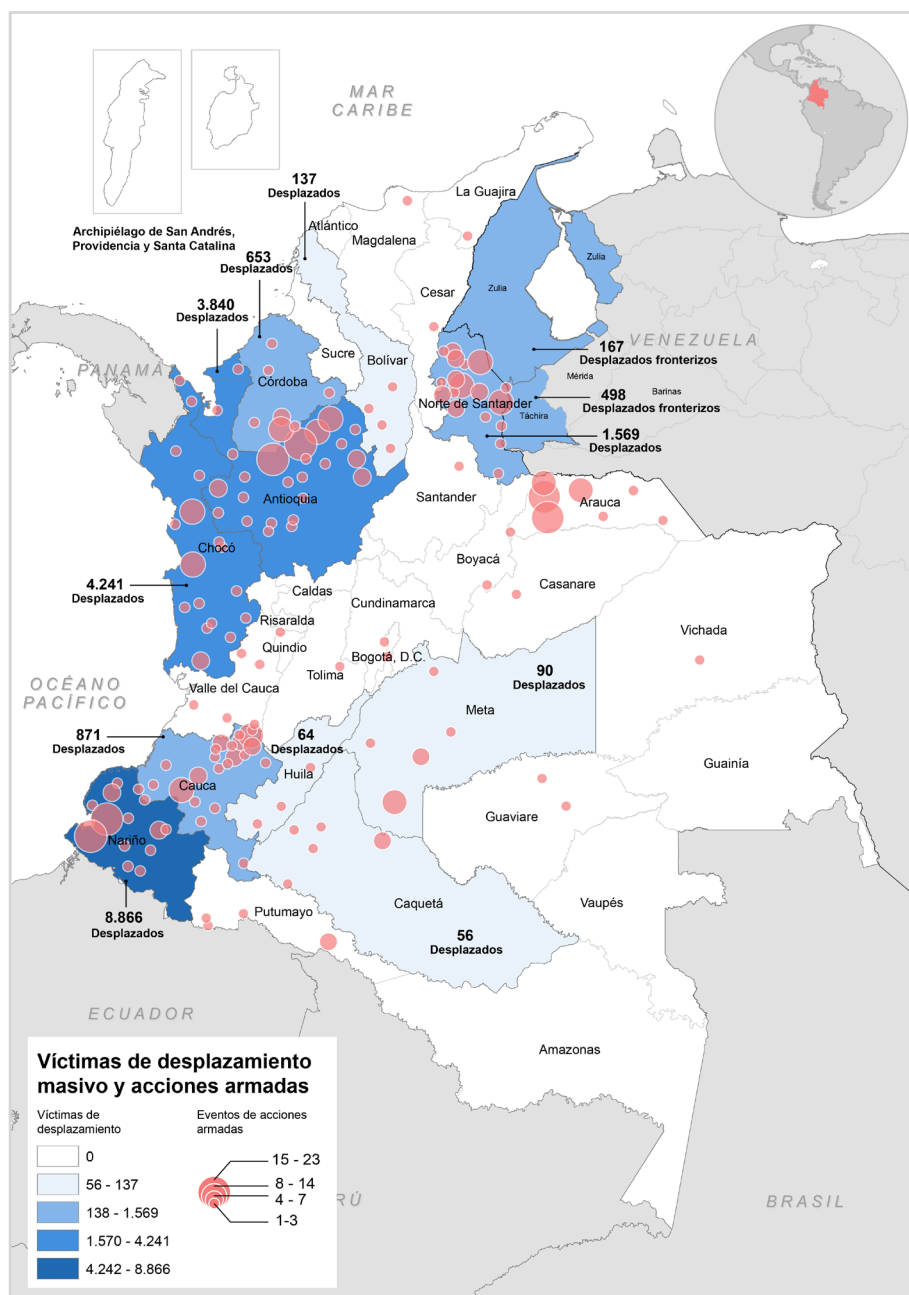
-Testimonio Comunidad de Nambua

La expansión territorial y accionar de los GAO y GAD contra la población civil vulnerable en las zonas con especial influencia, presencia y/o control de estos grupos genera afectaciones y riesgos de protección, que más allá de los confinamientos y desplazamientos, también se refleja en las amenazas y asesinatos de líderes sociales, excombatientes en proceso de reincorporación, entre otros. En 2020 también se generaron directamente nuevas afectaciones, relacionadas en parte con las dificultades de acceso

a la educación virtual (medida implementada durante la pandemia), dado que, para población joven y rural, particularmente indígena y afrocolombiana, se presentan mayores casos de reclutamiento forzado, uso y vinculación a las actividades de los GAO y GAD, dejando a cerca de 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes con necesidades humanitarias de protección en el país.

De otro lado, se estima que 268.319 personas están en riesgo de sufrir un accidente por la presencia de MAP/MSE en las zonas donde estos grupos armados se disputan el control de los territorios y los cultivos ilícitos. El uso indiscriminado de minas ha limitado a cientos de personas su movilidad y acceso a agua, salud, educación y medios de vida. También preocupa la situación humanitaria de al menos 1,46 millones de personas, entre ellas mujeres, población LGTBIQ+, niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de sufrir Violencia Basada en Género, Violencia Sexual y Violencia Intrafamiliar.

Víctimas de desplazamiento masivo y acciones armadas



"... La población vive en condiciones precarias, acá hay gente que vivía del día a día que vendían sus productos y ahora ni tienen ..."

- Testimonio líder comunitaria en Vaupés

Aumento de la inseguridad alimentaria por deterioro de la situación interna y el impacto socioeconómico del COVID-19:

En lo corrido de 2020 se evidenció un incremento de población con inseguridad alimentaria de 2.4 a 6.2 millones de personas, reflejando un aumento del 158 por ciento, y una inseguridad alimentaria aguda para 3.3 millones de personas, ampliándose a zonas urbanas y periurbanas. Esto ha generado mayor preocupación en términos de malnutrición infantil y de mujeres

embarazadas y en estado de lactancia, en particular las zonas donde ya había incidencia alta de malnutrición, desnutrición y niños con bajo peso al nacer como en Amazonas y La Guajira entre otros departamentos donde se ha concentrado el 50 por ciento de los diagnósticos. Hogares con jefatura femenina, grupos étnicos, hogares con pérdida de empleo o en el sector informal y en áreas rurales, son los grupos más vulnerables que requieren atención. Se destaca que, las temporadas de sequía y lluvias en el país también repercute en la producción y acceso a alimentos tanto para el autoconsumo como también la comercialización en comunidades rurales y dispersas. Por esta razón los impactos multisectoriales de estos eventos se acentúan para gran parte de poblaciones en zona rural, incluso para comunidades de acogida, refugiados, migrantes y retornados provenientes de Venezuela, configurando escenarios de doble y múltiple afectación. La disminución de ingresos como consecuencia del impacto socio económico, es otro factor que influye en el acceso a alimentos y que ya se alerta para tomar medidas que mitiguen las emergencias y afectaciones en la salud física y mental de comunidades vulnerables.

Impactos en salud por el aumento en la demanda de servicios por el COVID-19

La pandemia ha hecho necesario el refuerzo de los sistemas de vigilancia, el diagnóstico y la capacidad de los servicios de salud para atender el manejo de casos graves, sin embargo en algunas regiones esta capacidad está siendo insuficiente frente al incremento de casos de COVID-19 y las necesidades de atención por otro tipo de patologías no atendidas durante la emergencia⁴⁴, todo lo anterior se materializa en el aumento de la demanda de servicios de salud, así como la necesidad de acceso a elementos de protección personal, agua segura, productos de higiene y servicios de saneamiento y elementos de aseo para la limpieza y bioseguridad, como medidas mínimas de prevención de la COVID-19 y otras enfermedades transmisibles.

El impacto se ha dado ante todo en personas con comorbilidades, mayores de 60 años, personal de salud, resaltando también los impactos en grupos vulnerables

como son las comunidades indígenas, la población migrante y los no afiliados al sistema de salud y las mujeres embarazadas, quienes tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19 que las mujeres que no están embarazadas. Además, las mujeres embarazadas con COVID-19 podrían tener mayor riesgo de registrar resultados adversos durante el embarazo, como el nacimiento prematuro, en las zonas con capacidades limitadas y barreras de acceso geográficas se han acentuado las brechas. Otros servicios de salud se vieron negativamente impactados por la demanda de servicios y la capacidad reducida a causa de la pandemia, como los servicios de salud materno infantil, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas, control de vectores, etc.

En algunos lugares del país, las tasas de mortalidad infantil siguen siendo elevadas (el 57% de municipios de 837 con casos de mortalidad infantil, tiene una tasa de mortalidad por encima de la media nacional), en otros casos, se evidenció el incremento en algunas enfermedades endémicas como el dengue y la malaria, al igual que otras enfermedades transmisibles, no transmisibles y enfermedades inmunoprevenibles. Tras el paso de las lluvias se incrementó el riesgo de contagio de la COVID-19, aunado a enfermedades relacionadas con la calidad del agua (cerca de 4.4 millones de personas sin acceso regular a agua segura), alimentos, el hacinamiento y la inocuidad de los alimentos.

Las situaciones de violencia desencadenan también necesidades de apoyo psicosocial por afectaciones en la salud mental, el apoyo a instituciones de salud afectadas y el refuerzo con insumos y equipos para la atención clínica, existen también otras barreras, como son la falta de modelos de atención en salud (salud rural) adaptados para comunidades indígenas y afrodescendientes, la necesidad de incrementar las capacidades institucionales en atención primaria en salud.

⁴⁴ Plan de Respuesta COVID-19. Equipo Humanitario Colombia. <https://www.who.int/health-cluster/countries/colombia/Colombia-COVID-19-response-plan.pdf?ua=1>

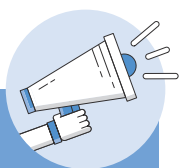


LETICIA, AMAZONAS / COLOMBIA

Atención en salud materno infantil

Crédito de la foto: Médicos del Mundo

Impacto y riesgos en la niñez por situaciones asociadas a la violencia y violencia física y sexual:



“Hay una variedad y un universo de estrategias para reclutar. Actualmente ya no están reclutando a la fuerza, más bien estudian a la gente, la pobreza y las necesidades. Ahora les proponen a los jóvenes ir a trabajar”

- Testimonio de Comunidades

Se han identificado necesidades de protección en al menos 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes. La pandemia ha impactado el sistema educativo con efectos diferenciales según la población, el contexto, zona rural o urbana, sector oficial o privado y los distintos niveles educativos. De los nueve millones de niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema de educación (público y privado), al menos 102.880 niños y niñas desertaron completamente de las escuelas entre abril y agosto de 2020⁴⁵. Este escenario los deja expuestos a riesgos de protección asociados con la vinculación en el trabajo infantil, reclutamiento forzado y economías ilícitas. Para 2020 el reclutamiento forzado por parte de GAO o GAD aumentó en un 113 por ciento en comparación con 2019⁴⁶. Los programas

⁴⁵ <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/401634:Trabajamos-en-equipo-por-prevenir-y-mitigar-los-impactos-del-COVID-19-en-la-desercion-en-educacion-Preescolar-Basica-Media-y-Superior>

⁴⁶ COALICO. <http://coalico.org/prensa/coalico-en-medios/falta-de-clases-aumento-el-reclutamiento-forzado-en-colombia/>

de alimentación escolar también se vieron afectados inicialmente por las restricciones a la movilidad generales impactando la nutrición de niños y niñas.



PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA / COLOMBIA

Taller de cartografía para niños y adultos

Crédito de la foto: WFP, María Camila Posada

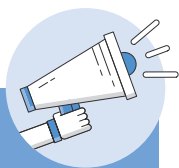


Los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos siguen siendo los más impactados por las múltiples afectaciones

humanitarias de las emergencias. Estos grupos representados en comunidades indígenas y afrocolombianas⁴⁷ e incluso pueblos indígenas binacionales y migrantes integrantes de comunidades indígenas, se ubican en territorios ancestrales de regiones apartadas y con geografía compleja para el acceso a los servicios básicos; también pueden estar en zonas de reserva, con presencia de cultivos ilícitos en territorios que además son utilizados por los GAO y GAD como corredores estratégicos. A pesar de contar con niveles organizativos como son los Resguardos (indígenas), los Consejos Comunitarios (afrocolombianos) y otras medidas especiales para su protección y conservación colectiva, estas minorías viven en medio de grandes necesidades humanitarias y ciertos pueblos están en riesgo de extinguirse.

Preocupa que, constantemente son víctimas de desplazamientos, confinamientos, homicidios y presentan restricciones de acceso por la contaminación con MAP/MSE, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en especial pueblos como los Embera, Embera Dobida, Embera Eyábida, y Awá en economías ilícitas. Esta situación además de romper su tejido social los aleja más de sus costumbres al tener que enfrentar dinámicas diferentes a su cosmovisión. Se identifican al menos 1.3 millones de personas afrocolombianas y más de 954.000 personas indígenas con necesidades humanitarias. Departamentos del Pacífico como Chocó y Nariño, llaman la atención y preocupan ante las repetidas emergencias.

Con la llegada del COVID-19 se configuró una múltiple afectación en algunos pueblos, viéndose obligados a establecer puntos de control para evitar el ingreso de personas externas a sus comunidades y así evitar contraer el virus. Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, han sido los departamentos donde se han presentado altas tasas de contagio, alertando la baja capacidad de atención médica por su débil infraestructura sanitaria.

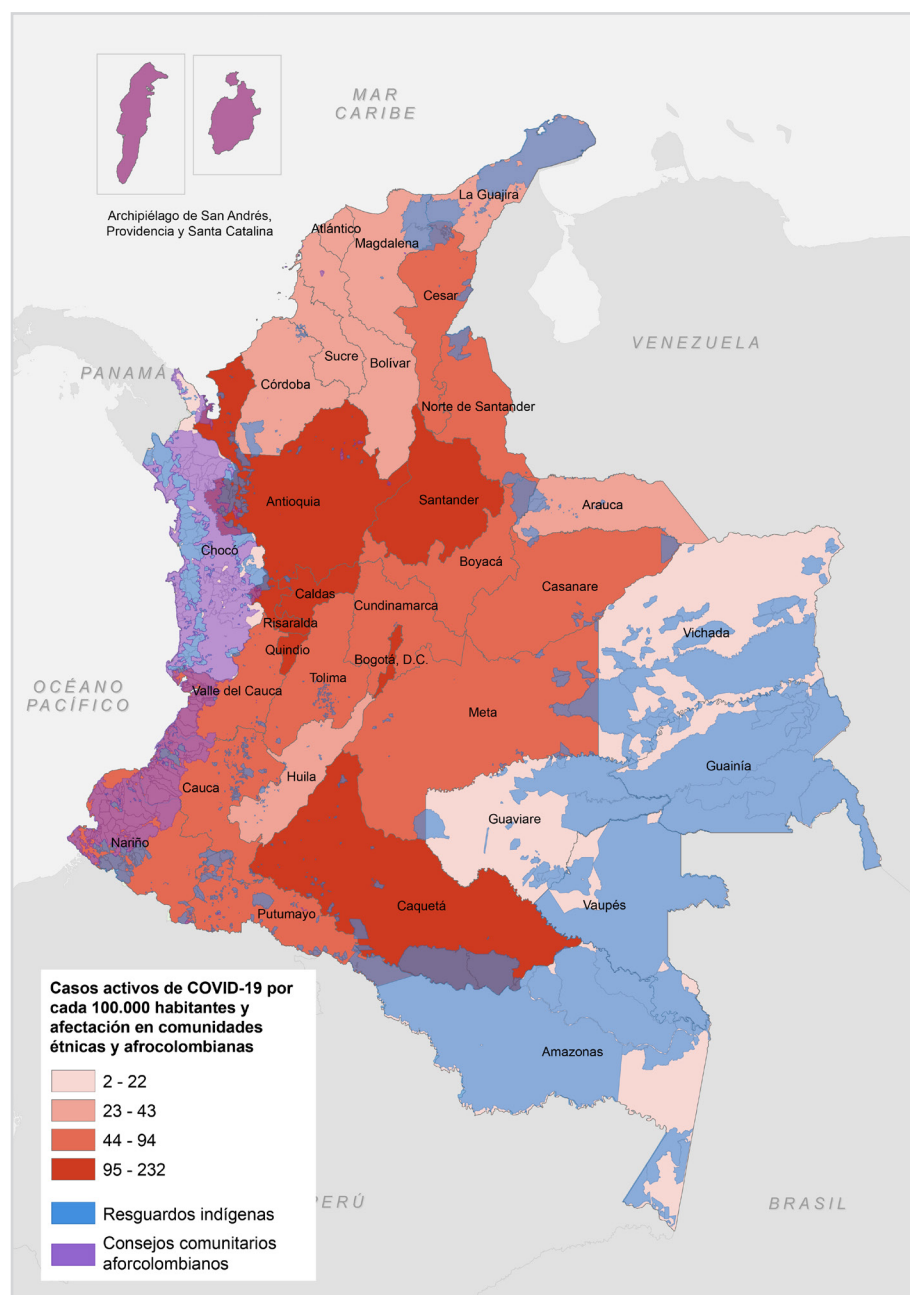


“Muchas comunidades desplazadas se resignan a vivir en cascos urbanos, cabeceras de municipios, grandes ciudades, e incluso en otros países. Sabemos de personas que buscan oportunidades en Ecuador y en Panamá”

-Testimonio de Comunidades

⁴⁷ De acuerdo con el Ministerio de Salud, los grupos étnicos en Colombia son aquellos cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia. Tienen unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones. En Colombia, los grupos étnicos se han categorizado de la siguiente manera: Pueblos indígenas, Comunidades Afrocolombianas, Raizales (Nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Palenqueros y ROM o pueblos gitanos. <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx>

CASOS ACTIVOS DE COVID-19 Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS



281k

Casos positivos de COVID-19 en población étnica



1.2k

Indígenas fallecidos



35.7k

Indígenas recuperados



31k

Casos en población indígena perteneciente a 73 pueblos

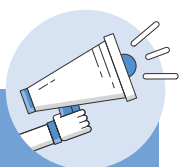


249k

Casos positivos por COVID-19 en poblaciones afrocolombianas

Fuentes: INS (fecha de corte: diciembre 31 2020) y ONIC (Fecha de corte: diciembre 13 2020)

Violencia Basada en Género



“No duermen bien por hambre y temor de los grupos armados [...] Las mujeres ya no pueden ir a sus fincas con sus maridos”

- Testimonio de Comunidades

En Colombia la violencia armada tiene un impacto humanitario diferenciado en mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (comunidad LGTBQ+). En especial, las mujeres y niñas pertenecientes a los grupos étnicos indígenas y afrodescendientes, que habitan en zonas rurales y/o cuentan con algún tipo de discapacidad, se enfrentan a patrones culturales patriarcales con consecuencias violentas a nivel familiar y comunitario (violencia física, psicológica, económica, patrimonial y social); a lo anterior se suma las afectaciones por la presencia, influencia y/o control de grupos armados,

incrementando las restricciones a la movilidad como prácticas de control social, e incluyendo el control de los cuerpos y conductas de mujeres y personas LGTBQ+, incluyendo el de población refugiada y migrante venezolana. Respecto a los desastres de origen natural, existen muy pocas cifras e información desagregada por género, edad, etnia y discapacidad sobre las personas damnificadas y afectadas en Colombia, sin embargo, se estima que las mujeres son mayormente afectadas debido a que están en la primera línea de respuesta, y se convierten en cuidadoras de sus familias y comunidades gestionando la recuperación. Todas las y los sobrevivientes de VBG presentan necesidades que requieren la intervención de otros sectores, incluyendo la garantía de servicios de protección, salud, alojamientos, transporte, agua y saneamiento, y la generación de medios de vida.



Los reportes a la línea de atención de violencia intrafamiliar, incrementaron en un 116% durante el 2020⁴⁸.

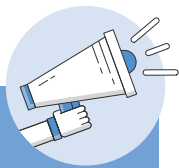


DADEIBA/ ANTIOQUIA, COLOMBIA

Víctimas de la violencia armada pertenecientes a la comunidad indígena Embera Katio

Crédito de la foto: PNUD

Vivir bajo la influencia de grupos armados



"Vivimos amenazados, nos fuerzan a vender nuestras tierras, no podemos salir a cazar o a pescar para garantizar el pancoger. Tenemos miedo"

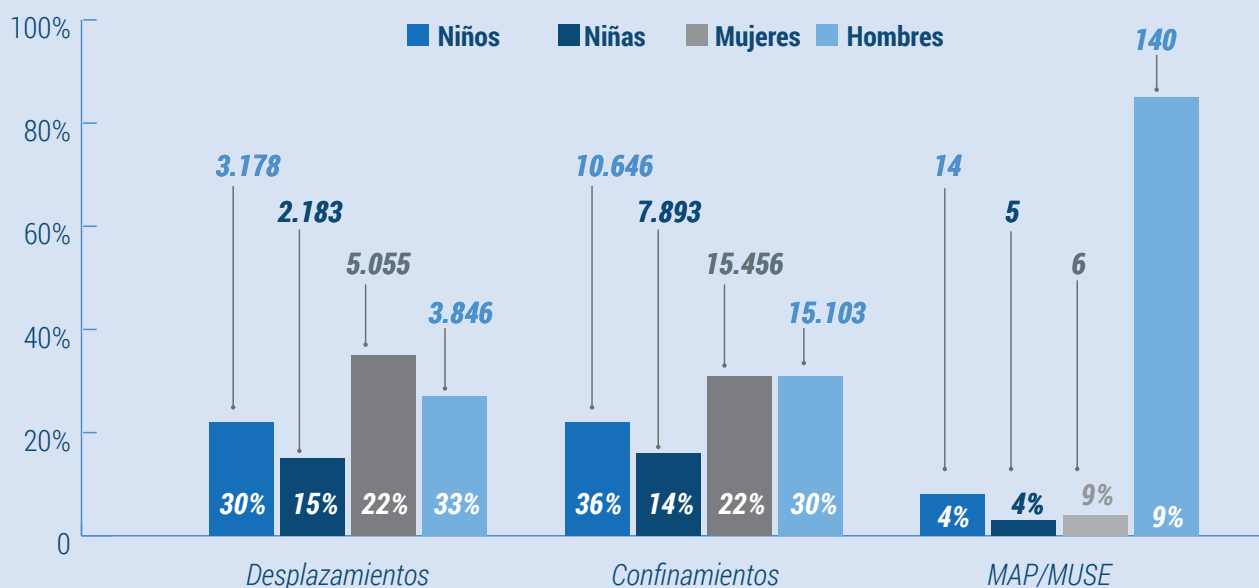
-Líder comunidad

Las dinámicas de control territorial y social que ejercen los GAO y GAD como parte de las disputas o alianzas entre ellos, significa, entre varios aspectos, vivir bajo la imposición de códigos de conducta, toques de queda, retenes ilegales y amenazas cometiéndose en muchas ocasiones graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario (DIH) y afectando el acceso de la población a bienes y servicios básicos.

En muchas zonas controladas por grupos armados y donde falta la presencia regular e integral del Estado, éstos regulan muchas facetas de la vida cotidiana de la población incluyendo su movilidad, su capacidad de

obtener alimentos o de garantizar sus medios de vida. La resolución de tensiones en las comunidades es mediada por los grupos armados que hacen presencia, así como impartir la justicia, sin llegarse a conocer la gravedad de los hechos y sin ser denunciadas por el temor a represalias. En algunas zonas, la comunidad reporta estar amenazada, es obligada a vender sus tierras y/o a participar en actividades ilícitas sin posibilidad de abstenerse. En otras zonas, las comunidades incluso reportaron la confiscación de medios de comunicación. El temor generalizado se mantiene en las comunidades, quienes como medida extrema – y cuando pueden – se desplazan de los territorios en busca de protección, exponiéndose a difíciles condiciones y sin los medios de vida para la supervivencia. En muchas ocasiones, el desplazamiento como medida de protección es restringido por estos grupos que limitan la movilidad de las personas. Otro de los riesgos que implica para las comunidades rurales vivir bajo el control de los GAO o GAD, es quedar en medio del fuego cruzado sufriendo heridas o la muerte, por las incursiones, combates, enfrentamientos que se lleven a cabo; así mismo, casos de violencias sexual que no son denunciados dejan daños irreversibles en las mujeres o incluso hombres, y con impacto psicológico; situación similar sucede con los casos de reclutamiento, uso y vinculación de niños,

PROPORCIÓN DE LA DESGREGACIÓN POR EDAD Y GÉNERO EN RELACIÓN A CADA AFECTACIÓN



Fuentes: OCHA (fecha de corte: diciembre 31 2020)

⁴⁸ Todos podemos poner fin a la violencia contra la mujer. Ministerio de Salud. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Todos-podemos-poner-fin-a-la-violencia-contra-la-mujer.aspx>

niñas y adolescentes donde además sus expectativas de vida se reducen. La ocupación de bienes civiles y la instalación de artefactos explosivos, es utilizada como mecanismo de defensa de los grupos armados, y con ellas se incurre en infracciones del DIH.

Se ha identificado al menos siete millones de personas que viven en un área de aproximadamente 550 municipios, en donde hay presencia, influencia y/o control de GAO y/o GDO. El acompañamiento de la institucionalidad y las organizaciones humanitarias es necesario en contextos con presencia de GAO y GAD, para actuar oportunamente y evitar daños irreversibles en las personas. Es importante resaltar que, en departamentos donde se llevan a cabo procesos de erradicación de cultivos ilícitos (Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Putumayo, Chocó, Córdoba, Cauca, Meta, entre otros), se presentaron tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública ante la oposición de familias a estos procesos, ya que, por un lado, les quitan su medio de sustento y por otro lado los expone al contagio del COVID-19. En medio de estas tensiones, se menciona que no se están tomando las medidas de bioseguridad. Estas zonas de influencia de grupos armados corresponden a las zonas más pobres del país, donde el acceso a los territorios es difícil, los servicios básicos son limitados y donde se evidencian algunos de los indicadores de inseguridad alimentaria, nutrición, problemas de salud y falta de acceso al agua y a la educación más altos del país.

Existe un deterioro de manera significativa en las condiciones de vida de los refugiados y migrantes con vocación de permanencia en Colombia, dada la pérdida de ingresos en trabajos formales e informales resultando en una menor capacidad para acceder a bienes y servicios básicos como alimentación, salud y educación⁴⁹. Los desafíos para pagar arriendos ha generado situaciones de desalojos y hacinamiento,

las personas no tienen cómo pagar servicios públicos o tienen dificultades para acceder a agua segura y saneamiento básico, así como a elementos básicos como productos de higiene, teniendo que recurrir a situación de alta permanencia o vida en calle, explotación sexual y hasta mendicidad ajena. Esto ha tenido un impacto en su calidad de vida y salud física y mental. A su vez, la falta de recursos para protegerse del virus también ha exacerbado situaciones de discriminación y xenofobia⁵⁰, y ha deteriorado la relación con las comunidades de acogida, algunas de ellas con población desplazada con necesidades insatisfechas.



BOJAYÁ / CHOCÓ. COLOMBIA

Niños trabajando como auxiliares de transporte fluvial
Crédito de la foto: OCHA, Claudia Rodríguez

⁴⁹ El 60% de los hogares encuestados en julio declararon que el trabajo es una fuente de ingresos a través del empleo o el autoempleo, en comparación con el 86% antes de COVID-19 (ECN GIFMM Julio 2020). Asimismo, se destaca que el 69% de los encuestados en julio declaró haberse privado de al menos una comida diaria de las tres necesarias, con un 60% de los hogares que comieron dos veces al día y 9% que lo hicieron solo una vez, y el 42% de hogares encuestados se vieron forzados a pedir dinero en la calle. Ver más en la Evaluación Conjunta de Necesidades (ECN) del GIFMM, tercera ronda - julio 2020: <https://r4v.info/es/documents/details/79280>.

⁵⁰ Según una encuesta telefónica de la revista Semana (Proyecto Migración Venezuela), con apoyo de ACDI/VOCA a 1.003 personas en 91 ciudades y municipios del país, "el 71% de los encuestados considera que la migración aumenta la pobreza; el 64%, que impone una carga para los servicios sociales del Estado; y apenas el 28% la ve como una oportunidad para el desarrollo del país", señalando que "desde el confinamiento, los encuestados demostraron mayor rechazo hacia los migrantes que en julio de 2019, cuando se llevó a cabo la línea de base de la misma encuesta". Ver más en: <https://bit.ly/3iFMdLs>

Impacto en los servicios y sistemas



En Colombia, un 81 por ciento de la población cuenta con acceso a servicios públicos, privados o comunales.

La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018-2019⁵¹ permite evidenciar resultados positivos por encima del 70 y 90 por ciento en la caracterización sociodemográfica de las personas, los hogares y sus condiciones de vida, teniendo en cuenta el acceso a vivienda, agua para consumo humano, sistemas de saneamiento básico, salud, educación, tenencia de bienes, fuerza de trabajo y uso de tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, **la brecha y desigualdad se amplía al comparar lo urbano y rural (los centros poblados rurales y dispersos) dejando a un 20% de la población sin acceso regular a servicios de base.** Al menos 4.4 millones de personas (72.2% de las personas a nivel nacional que se encuentran en esta situación) no cuenta con acceso a fuentes de agua mejorada, mientras que 1.5 millones de personas no cuentan con acceso al servicio ni a medios de disposición sanitaria segura (73% de la población a nivel nacional en esta condición); lo anterior facilita la proliferación de vectores que transmiten enfermedades como el dengue y la malaria. Ante esta situación las personas en situación de calle, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas desplazadas y confinadas, las personas con discapacidad, con enfermedades preexistentes y afectados por desastres naturales podrían ser las más afectadas.

Son las poblaciones en estas áreas y con mayor énfasis los grupos étnicos, quienes constantemente enfrentan el colapso de estos sistemas y servicios por las diferentes emergencias. En la coyuntura actual que vive el país y el mundo por el COVID-19, las condiciones sanitarias y de salud evidencian vacíos históricos en su infraestructura, capacidades y servicios básicos en zonas periféricas para prevenir y contener los contagios, con riesgo de dejar consecuencias trágicas.



La pandemia generó un impacto importante en la prestación de servicios de salud.

No sólo en la atención dirigida a los casos que presentan complicaciones por COVID-19 que requerían hospitalización general y hospitalización en unidades de cuidados intensivos, el impacto fue visible en la atención a enfermedades preexistentes que requieren un control periódico (VIH, Cáncer, hipertensión arterial, diabetes, entre otras), en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, y también en más de 30.045 trabajadores de la salud que contrajeron el nuevo virus disminuyendo la capacidad operativa de hospitales y centros de prestación de salud. La falta de equipos de protección personal para prevenir el contagio fue evidente en muchos centros hospitalarios del país.

En complementariedad a la respuesta del Gobierno Nacional que incluyó el 91% de incremento de camas UCI en el país, medidas de mitigación al impacto socio-económico y entregas de alivios financieros a los sectores económicos del país⁵², las organizaciones del equipo humanitario país (EHP) desarrollaron el Plan Intersectorial de Respuesta al COVID-19⁵³ que ha permitido una adaptación al contexto presentado por la pandemia y facilitó que más de un millón de personas en 31 de los 32 departamentos recibieran asistencia directa representada en la provisión de alimentos, transferencias monetarias multipropósito, atención en salud, , instalación de puntos de lavado de manos, entrega de kits de higiene y desinfección, entre otras actividades de respuesta intersectorial.



La pandemia también tuvo un fuerte impacto en los sistemas de educación por las medidas de aislamiento obligatorio preventivo del COVID-19. Mas de 10M de niños se vieron impactados por el cierre de escuelas. Las comunidades étnicas generalmente se ubican en territorios con vacíos estructurales relacionados a la

⁵¹ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/CP_ECV_2019.pdf . Permite la desagregación de los datos para los 32 departamentos del país y Bogotá, y la desagregación por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso)

⁵² Aumento de camas UCI. Ministerio de Salud <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Total-de-camas-UCI-en-el-pais-para-la-atencion-de-covid-19-incremento-91.aspx> y Acciones tomadas por el Gobierno <https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-economia.html>

⁵³ <https://www.who.int/health-cluster/countries/colombia/Colombia-COVID-19-response-plan.pdf?ua=1>

conectividad a internet, falta de implementos técnicos que aseguren la conexión como celulares y computadores, dificultando entre otras cosas el acceso a educación por parte de los menores de edad. La fuerte temporada de lluvias que se experimentó en noviembre, además de afectar a 303.000 personas dejó el acueducto de al menos 16 municipios en Chocó y el conducto de aguas residuales en el archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina. parcial o totalmente destruidos, los sistemas de alcantarillados de algunos municipios incluyendo Chocó, Meta, Antioquia y La Guajira, también colapsaron propiciando inundaciones en zonas pobladas⁵⁴. Además de ello, algunos hospitales y sistemas de electricidad también sufrieron impacto, generando afectaciones a los enseres de las comunidades.



MAICAO/ LA GUAJIRA, COLOMBIA

Unidad móvil de la ESE hospital Maicao brindando atención médica a colombianos y migrantes en condición de calle durante la pandemia del COVID-19

Crédito de la foto: OIM

⁵⁴ Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias Informe de Situación No. 5 (05/12/2020) Actualización N°8 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05122020_sitrepno5_afectaciones_por_lluvias_y_h_iota_update_8_vf.pdf

Impacto en el acceso humanitario

En algunas zonas controladas por GAO o GAD, la población se enfrenta a restricciones de movilidad que afectan su acceso a bienes y servicios básicos. Estas restricciones de acceso se deben especialmente a códigos de conducta en horarios específicos e intimidaciones impuestas, u hostilidades y contaminación con MAP/MSE por parte de los GAO o GAD. Durante el 2020 se registraron 97,000 personas afectadas por estas dinámicas⁵⁵. Más allá de limitar la movilidad de las personas y el acceso a sus medios de vida, la salud, incluso se ve comprometido recibir asistencia humanitaria, configurando a veces situaciones de confinamiento que agravan los estándares de vida de las comunidades. Los departamentos que se han visto más afectados por estos eventos son Antioquia, Nariño, Putumayo, Córdoba, Arauca y Chocó⁵⁶.

Los actores humanitarios también han evidenciado mayores restricciones de acceso en algunas partes del territorio. Por las mismas causas además de factores como el acceso físico, amenazas y ataques directos contra los trabajadores humanitarios (nacional e internacional) o sus bienes, bloqueos de vías y/o retenes ilegales, siendo objeto o expuestos a riesgos que dificultan la operatividad de sus proyectos o actividades, y en el peor de los casos la cancelación

de estos⁵⁷. En lo corrido del año se han identificado cerca de 39 incidentes de acceso humanitario en Arauca, Chocó, Antioquia, Meta, Caquetá, entre otros en el suroriente del país. Estas restricciones de acceso humanitario no solo alertan por las condiciones de seguridad, sino por el retraso para atender o mitigar las necesidades sectoriales de las comunidades afectadas (al menos 181.438 personas tuvieron dificultades para recibir asistencia), desde la institucionalidad o desde las organizaciones humanitarias⁵⁸.



El 2020 también evidenció el aumento en los ataques contra la misión médica.

Hasta finales de septiembre, se habían registrado 242 ataques a la misión médica⁵⁹, el 52 por ciento de éstos perpetrados por los mismos pacientes, familiares y miembros de las comunidades, el 38 por ciento relacionado con el contexto de la pandemia (al ser acusados de negligencia médica o discriminados por ser considerados foco de contagio, situación que dificulta la atención de personas que requieren servicios médicos por el nuevo coronavirus y otras patologías), representando un aumento del 63 por ciento frente a las cifras del mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 148 incidentes. Los ataques perpetrados por GAO también aumentaron, especialmente en los departamentos de frontera (Norte de Santander)⁶⁰.



CÓRDOBA, COLOMBIA

Cruce del río en planchón durante la Misión de Evaluación de Necesidades en Córdoba
Crédito de la foto: WFP, María Camila Posada

⁵⁵ Monitor de Violencia Armada. <https://monitor.salahumanitaria.co/>

⁵⁶ Impacto Humanitario y Tendencias de 2020. OCHA Colombia. <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/impacto-humanitario-y-tendencias-entre-enero-y-diciembre-de-2020>

⁵⁷ Infografía de Acceso Humanitario en Colombia. <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/infograf%C3%ADa-de-acceso-humanitario>

⁵⁸ Monitor de Violencia Armada. <https://monitor.salahumanitaria.co/>

⁵⁹ Información de la Mesa Nacional de Misión Médica, conformada por el Ministerio de Salud, OPS/OMS, CICR y otras organizaciones. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mision-Medica-ha-recibido-242-ataques-en-el-transcurso-del-ano.aspx>

⁶⁰ <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mision-Medica-ha-recibido-242-ataques-en-el-transcurso-del-ano.aspx>

Las medidas de aislamiento obligatorio preventivo decretadas por el Gobierno de Colombia durante cinco meses por el COVID-19, influenciaron indirectamente a que los grupos armados aumentaran también los controles, agudizando más las restricciones a medios de vida y bienes básicos en poblaciones en todo el país. Muchos hechos victimizantes posiblemente se han invisibilizado al interior de comunidades, ante la imposibilidad de autoridades y otros actores para realizar seguimiento y llegar a las zonas. Sin embargo, el decreto 531 de 2020, emitido en abril, permitió el restablecimiento de las

misiones humanitarias que responden a emergencias, respetando otras directrices internas establecidas por cada organización para proteger al personal humanitario y para no causar acciones con daño en las comunidades donde el virus no había sido identificado; en otros casos, algunas comunidades rurales tomaron medidas autónomas de prevención del contagio de la COVID-19 y no dejaban ingresar personal externo. Las limitaciones de movilidad propias del territorio dificultan la respuesta humanitaria aunado a ataques directos y prohibiciones frente al paso e implementación de proyectos de respuesta humanitaria en los territorios.

MAPA DE EVENTOS SOBRE RESTRICCIONES AL ACCESO A LA POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES

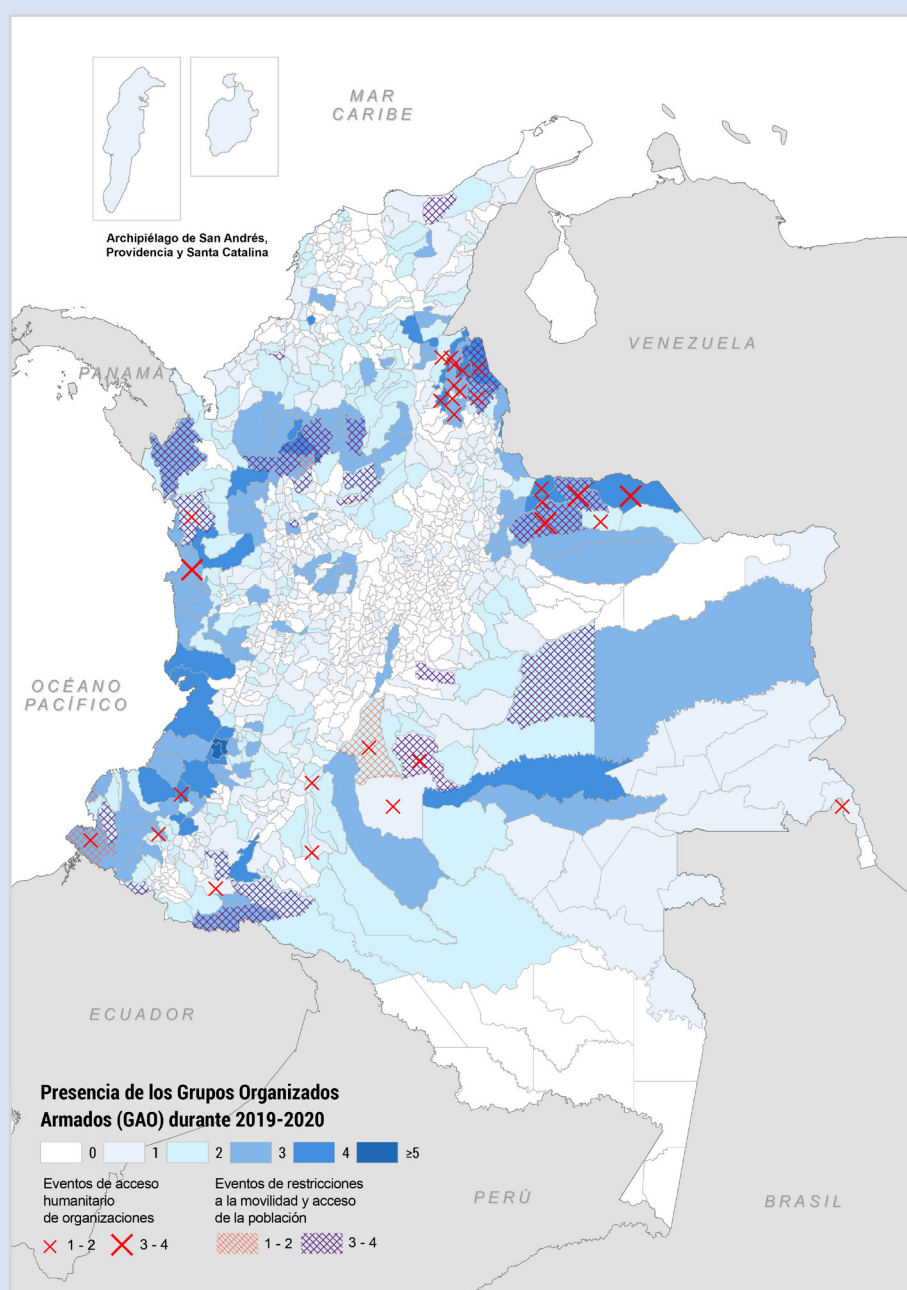
+

◇



43
Eventos de restricción al acceso por violencia armada.

242
Ataques a la misión médica



Impacto regional:

Las consecuencias humanitarias que sufren algunos grupos vulnerables de varios territorios del país, se manifiestan de forma diferente en varias zonas del país influenciada por factores como la ubicación geográfica, sus características, el contexto histórico, la dificultad de acceso a bienes, servicios y derechos, e incluso los mecanismos de afrontamiento frente a

riesgos y amenazas. Factores estructurales como las necesidades básicas insatisfechas, los altos índices de pobreza, bajo nivel de escolaridad, limitaciones de acceso a los servicios de salud, requieren de estrategias recuperación con enfoque diferencial y de protección, y la resiliencia colectiva o individual de las personas.



La región del Pacífico es una de las zonas más afectadas y complejas del país, requiriendo una atención particular. Los

departamentos de la región Pacífico como Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca (fronteras con Panamá y Ecuador), tienen una ubicación geoestratégica que los hace proclives para el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo y tráfico de coca, minería ilegal, incluso la explotación de otros recursos). De estos se destacan municipios en la frontera con Ecuador y con salida al mar, donde la intensidad de las emergencias humanitarias impacta en comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas en Tumaco, El Charco y Olaya Herrera (Nariño), El Naya (Cauca y Valle del

Cauca), Argelia y El Tambo (Cauca), región de los Baudóes y Litoral del San Juan (Chocó). Alertas de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de los diferentes riesgos, hechos victimizantes y violaciones por cuenta del accionar de los grupos armados, en medio de algunos vacíos históricos visibilizados por el impacto de la pandemia.

Preocupa el acceso humanitario de organizaciones, el cual se ve amenazado en algunas ocasiones por el accionar de los GAO/GAD y por barreras físicas. Las inundaciones, deja graves daños estructurales como en personas, algunas víctimas de las acciones de violencia armada.



TUMACO, NARIÑO / COLOMBIA

Entrega de ayuda humanitaria durante la temporada de pandemia por parte del cuerpo de bomberos

Crédito de la foto: Save the Children

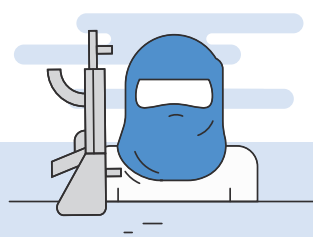
En Chocó:

Las emergencias y multi afectación de algunas comunidades rurales afrocolombianas e indígenas se concentra en los medios de vida, seguridad alimentaria y salud asociada a necesidades de agua y saneamiento. Sólo el 12 por ciento del departamento está destinado a la producción lo que impacta la disponibilidad de recursos sobre todo en comunidades anfitrionas. La pandemia ha incidido en el aumento de las muertes materna y del embarazo adolescente, ante la falta o precaria infraestructura básica, vial y la falta de acceso a servicios de salud. En la región del Baudó, alertan los niveles de desnutrición en menores de cinco años, la mortalidad materna (por abortos no seguros) y muerte por otras enfermedades prevenibles. La salud mental y protección de las personas se ve afectada constantemente por el control y accionar armado de los grupos, quienes también limitan la movilidad de las comunidades dejando víctimas de desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios, reclutamiento forzado. Es necesario acordar medidas de respuesta y protección a los sobrevivientes de explotación sexual y otros hechos victimizantes, al igual que estrategias de respuesta para la recuperación de cultivos e ingresos para garantizar la seguridad alimentaria.

Valle de Cauca:

Se identifican necesidades de educación en emergencia, debido a la emergencia sanitaria, donde muchos niños, niñas y adolescentes desertaron del sistema educativo por la carencia de conectividad y acceso a electricidad; también se identifican necesidades de agua, saneamiento e higiene, atención en salud, seguridad alimentaria, nutrición, protección. La Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas para Jamundí y Tuluá⁶¹, en las cuales se manifiesta que persiste la violación a los derechos humanos, los desplazamientos, restricciones a la movilidad de las comunidades y presencia de GAD. Hay subregistro de casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y trabajo infantil en niños en situación de calle. Se identifican a los niños y niñas y a las personas

en condición de discapacidad física y/o cognitiva como un grupo poblacional vulnerable puesto que se han identificado barreras de acceso a servicios de educación, salud y alimentación. Es importante mencionar que las personas provenientes de Venezuela están sufriendo una doble afectación al ser desplazadas nuevamente por hechos de violencia. Es importante garantizar una atención específica y diferencial en términos de orientación legal y atención integral según sus necesidades o afectaciones.



Incidentes reportados durante 2020 en la región Pacífico



15

Masacres



198

Accidentes por MAP/MSE/TE



14

Reclutamiento forzado



151

Homicidios (promedio 5 diarios)



135

Amenazas a la población civil

Fuente: Monitor-OCHA (2020) <https://monitor.salahumanitaria.co/>
Fecha de corte: diciembre 2020

Cauca:

Comunidades de la zona norte y suroccidente del Cauca tienen presencia de cultivos de uso ilícito, control territorial y enfrentamientos entre grupos armados que dejan a civiles en medio de fuego cruzado. Hay una presencia significativa de MAP/MSE, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de vinculación

⁶¹ Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. <http://alertastempranasdpc-dev.azurewebsites.net/?anioBusqueda=2020&criteroBusqueda=Valle+del+Cauca>

y reclutamiento forzado evidenciado en ocho alertas tempranas vigentes. Los grupos más afectados son los pueblos indígenas y afrocolombianos de la zona del Pacífico, norte y sur caucano; la pandemia además impactó la libre movilidad hacia los cultivos, generando afectaciones en la seguridad alimentaria también en comunidades urbanas. La Gobernación decretó “estado de alerta permanente” frente a feminicidios y otros hechos de violencia contra mujeres y niñas⁶². Durante 2020, se han presentado tres eventos de desplazamiento forzado afectando a 871 personas en los municipios de Guapi y Argelia. El territorio además registra contaminación por artefactos explosivos en 42 municipios del departamento y en 41 se han reportado accidentes o incidentes; 16 son considerados como zonas de alta afectación, y en seis municipios (Suarez, Corinto, Buenos Aires, Caloto, Santa Rosa y Miranda) se encuentran suspendidas las misiones de desminado humanitario por las condiciones de seguridad.

Herrera y Barbacoas. En el departamento se reporta una crisis de protección y en muchos casos algunas de las alcaldías municipales se han declarado en incapacidad financiera para atender algunas de las emergencias. Durante la pandemia, en gran parte de los municipios de costa pacífica, cordillera y frontera (con mayor afectación en Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte, Policarpa, Leiva y Cumbal) se incrementaron las restricciones a la movilidad y control en zonas rurales por amenazas de los GAO y GAD. En municipios como Magüí Payán no se ha podido acceder para brindar respuesta humanitaria debido a las condiciones de seguridad. Adicionalmente, más del 70 por ciento de los estudiantes en áreas rurales no tuvieron acceso a la educación virtual, aumentando aún más los riesgos a violencia infantil, intrafamiliar y reclutamiento forzado.

Nariño:

Se destacan constantes enfrentamientos y violaciones de derechos humanos a comunidades de zonas rurales y en particular al pueblo indígena Awá, ocasionadas por la presencia y accionar de grupos armados organizados en los municipios de Tumaco, Roberto Payán, Olaya

Cifras destacadas en la región Pacífico durante el 2020



1.3M

Personas no tienen acceso a educación



1.8M

Personas viven bajo influencia de GAO's.



629k

Personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

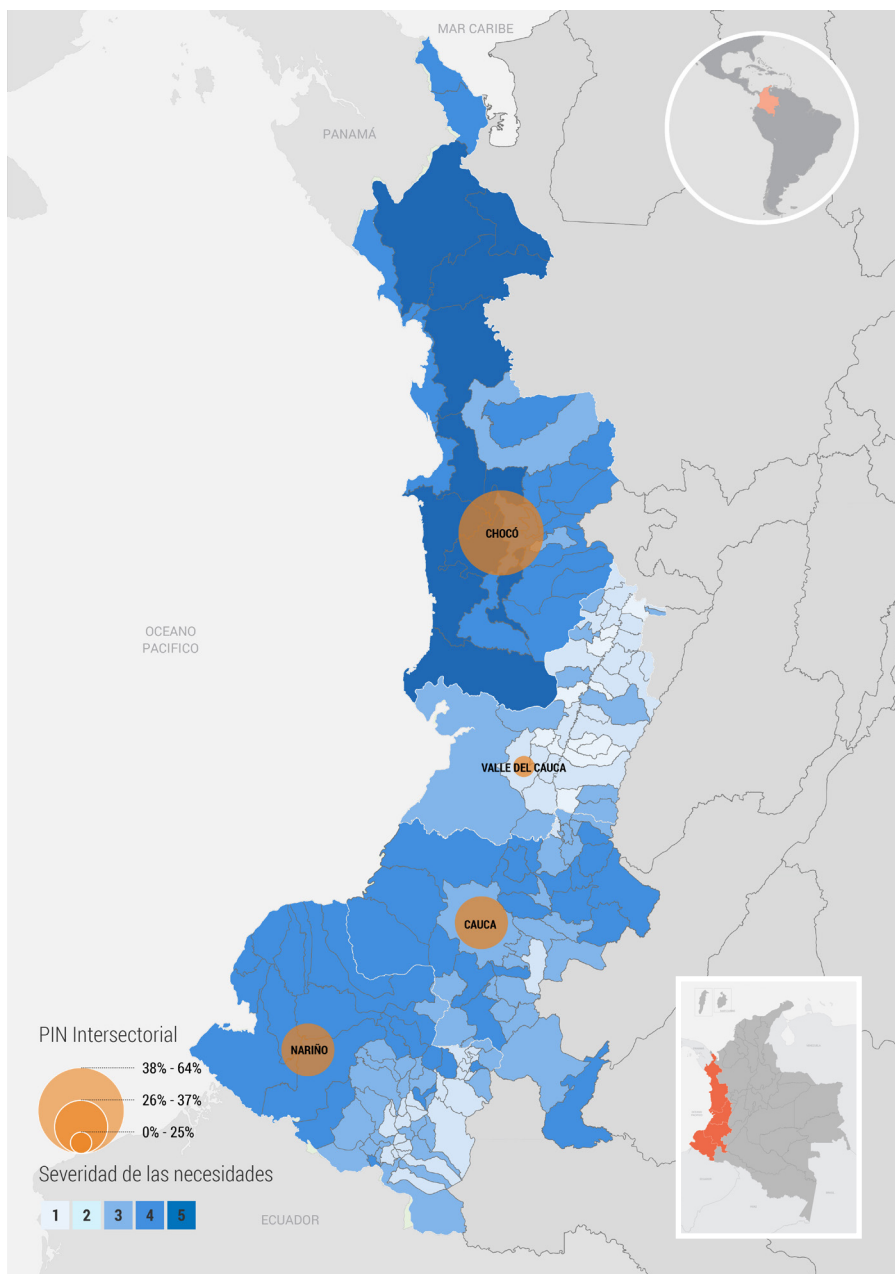


712k

Personas tienen dificultades para acceder a servicios de salud.

Análisis de indicadores de Clusters para el HNO (ver fuentes en tabla de indicadores por clusters)

⁶² <https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66766/gobierno-del-valle-eleva-alerta-por-asesinatos-de-mujeres/>



En la frontera nororiental con Venezuela departamentos como La Guajira, Norte de Santander y Arauca, presentan necesidades humanitarias asociadas a las dinámicas de violencia armada y control territorial de GAO y GAD que operan en la frontera, con imposiciones como parte del control social y territorial en la zona. También se destacan eventos de desastres de origen natural, afectaciones por COVID-19, vinculando a los distintos perfiles de población proveniente de Venezuela. Es una zona con alto tránsito, movimientos pendulares y permanencia de

población refugiada, migrante y retornada en donde la doble afectación se refleja en desplazamientos internos y hasta transfronterizos y otros hechos victimizantes causados por el accionar de grupos armados, donde además se carece de suficiente capacidad instalada en alojamientos temporales. La protección a la niñez y la prevención de las Violencias Basadas en Género deben ser primordiales en los tres departamentos fronterizos, cuyas necesidades se han deteriorado en el marco de la pandemia por COVID-19.



AGUA CLARA, NORDE DE SANTANDER / COLOMBIA

Puesto improvisado de víveres como método de reactivación económica durante la pandemia de COVID-19

Crédito de la foto: OCHA, Javier Carrillo

La Guajira

Se presentan afectaciones relacionadas a la carencia de infraestructura para provisión de agua segura, saneamiento básico e higiene, problemas de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, y cerca del 75 por ciento de su población en áreas rurales tiene necesidades básicas insatisfechas ante la falta de presencia institucional⁶³. Al ser una zona fronteriza poco controlada, se presentan casos de trata de personas y explotación sexual y Violencia Basada en Género (VBG). Existe un alto nivel de informalidad laboral que hace que se profundicen las necesidades humanitarias en relación con la recuperación temprana de medios de subsistencia de las comunidades indígenas binacionales y el impacto socioeconómico en un escenario post-COVID-19, además de contagios en población indígena. Adicionalmente, las condiciones geográficas, con una extensa zona desértica y población indígena dispersa, ha generado una barrera de acceso de los niños, niñas y adolescentes a las herramientas de educación que se profundizó aún más con la implementación de la educación virtual. El

precario acceso a medios de vida de las comunidades principalmente indígenas y campesinas se profundiza por efectos de incendios, sequía y dependencia de ayuda humanitaria, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. El cambio climático (especialmente en la media y alta Guajira) ya ha causado desplazamientos, también poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de algunas poblaciones.

Durante noviembre de 2020, las lluvias generaron limitaciones en la movilidad y restricciones al acceso debido al deterioro de vías, lo cual incrementó las necesidades en la población de la alta Guajira⁶⁴. En comunidades indígenas y campesinas de municipios como Dibulla, se ha presentado control y amenazas por parte de los GAO y GDO. Las lluvias también representan un riesgo de aparición de enfermedades relacionada con vectores como la malaria. Además, los vientos representaron afectaciones a los techos de las viviendas que además generan dificultades para la captación de aguas lluvias.

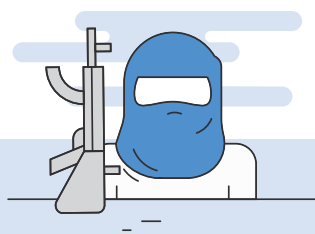
⁶³ DANE. Información Censo Nacional de población y vivienda 2018. Índice de NBI <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

⁶⁴ COLOMBIA: Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias Informe de Situación No. 5 (05/12/2020) Actualización N°8 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05122020_sitrepno5_afectaciones_por_lluvias_y_h_iota_update_8_vf.pdf

Norte de Santander:

La persistencia del accionar armado entre los diferentes GAO por el control territorial en zonas con presencia de cultivos ilícitos, el control sobre comunidades y combates de los GAO/GAD con las fuerzas armadas en zona fronteriza, deja afectaciones humanitarias y de protección. En la subregión del Catatumbo, se encuentra uno de los principales enclaves productivos de hoja de coca, en municipios como Tibú, Sardinata, Teorama y El Tarra⁶⁵. Precisamente en esta subregión se presentó el confinamiento de 31.740 personas ante un paro armado impuesto por el ELN y enfrentamientos de este grupo y el EPL, además de otros ataques como amenazas, homicidios, ataques contra infraestructura civil y misiones médicas con alto impacto emocional y en las condiciones de vida de las personas⁶⁶. Se han

incrementado los riesgos de protección especialmente en mujeres (por aumentos de VBG y Violencia Sexual) y niños, niñas y adolescentes (Protección de Niñez, frente al reclutamiento forzado, utilización en campos de cultivos de uso ilícito, mendicidad, trabajo infantil, entre otras afectaciones), al igual que una necesidad de protección adicional derivada del uso de MAP, MSE. Existen también limitaciones de atención en el sector salud, especialmente en lo relacionado a la capacidad de atención y respuesta para afectaciones físicas y mentales de la población víctima de la violencia armada. Además, al ser el departamento con mayor recepción de personas refugiadas, migrantes y retornadas provenientes de Venezuela, se ha identificado que a menudo esta población se ven también afectadas y/o vinculadas en las acciones de los GAO/GAD.



Incidentes reportados durante 2020 en la región Frontera Nororiental



10 Masacres



111 Accidentes por MAP/MSE/TE



5 Reclutamiento forzado



92 Homicidios (promedio 3 diarios)



55 Amenazas a la población civil



34 Secuestros

Fuente: Monitor-OCHA (2020) <https://monitor.salahumanitaria.co/>
Fecha de corte: diciembre 2020

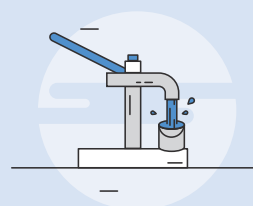


77.166

Personas resultaron afectadas con grave impacto en la población de los municipios Barrancas y Maicao.

56

Eventos de desastres de origen natural en 2020



También se presentan emergencias relacionadas a la falta de presencia institucional y a la carencia de infraestructura para el agua, razón por la cual, el 75 por ciento de su población en áreas rurales tiene NBI⁶⁷, siendo los niños y las mujeres de comunidades indígenas los grupos vulnerables más afectados.

⁶⁵ Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2019) <https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2019.html>

⁶⁶ Briefing Departamental Norte de Santander, Junio de 2020. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_humanitario_nds_enero-junio_2020.pdf

⁶⁷ DANE. Información Censo Nacional de población y vivienda 2018. Índice de NBI <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

Arauca:

Las dinámicas se caracterizan por el control de la línea fronteriza por parte de los GAO, particularmente evidenciado en la comunidad indígena Hitnu. La imposición de reglas, control, amenazas, homicidios, desapariciones, extorsiones contra civiles también hacen parte de las dinámicas que impactan a comunidades. Se destaca una alta contaminación por MAP/ MSE. Asimismo, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes son los grupos más vulnerables predominando sus necesidades en protección, seguridad alimentaria y nutricional, educación, agua y saneamiento y salud. También se registran algunos ataques a la infraestructura petrolera por parte de GAO, situación que genera afectaciones medioambientales

como lo son la contaminación de fuentes de agua, y retrasa la provisión de servicios en algunas zonas; los GAO son responsables de restricciones al acceso humanitario. En cuanto a las afectaciones por desastres⁶⁸ de origen natural, las inundaciones han afectado principalmente a las comunidades ribereñas donde se genera un escenario de doble y triple afectación, tanto en colombianos que habitan asentamientos y hacen parte de comunidades de acogida, como en población refugiada y migrante venezolana. En Arauca se presentan asentamientos (Arauca, Tame, Fortul, Arauquita y Saravena), en su mayoría conformados por víctimas de desplazamiento interno, y también por población proveniente de Venezuela, con restricciones en acceso a bienes y servicios, así como necesidades exacerbadas para ellos y las comunidades de acogida.

Cifras destacadas en la región Frontera Nororiental durante el 2020



51k Personas no tienen acceso a educación



931k Personas viven bajo influencia de GAO's.



433k Personas en riesgo de inseguridad alimentaria.



632k Personas tienen dificultades para acceder a servicios de salud.

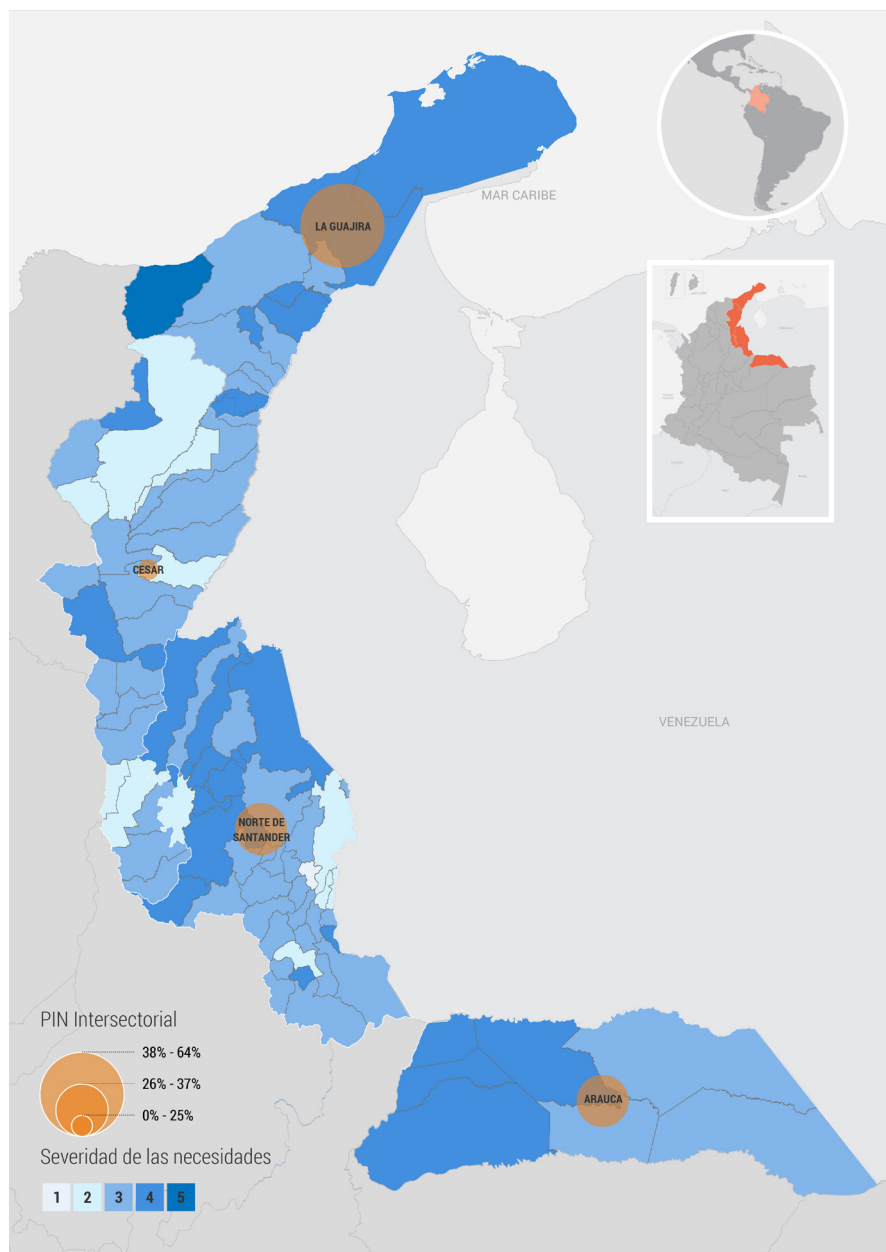
Análisis de indicadores de Clusters para el HNO (ver fuentes en tabla de indicadores por clusters)



ARAUQUITA / ARAUCA. COLOMBIA

Resguardo La Ilusión Comunidad la Vorágine/
Comunidad Hitnu (2018)
Crédito de la foto: ELC Arauca

⁶⁸ <https://www.undrr.org/es/news/llego-el-momento-de-decirle-adios-los-desastres-naturales>



La región Noroccidental está conformada por Córdoba y Antioquia, el Sur de Bolívar y Sur de Sucre, se presenta como una vía estratégica para la salida de economías ilegales hacia Centro América y El Caribe, por ello diferentes GAD y GAO intentan ganar el control territorial y social de la zona, a través de enfrentamientos, amenazas, homicidios, y ataques directo contra la población civil. En 2019, Antioquia y Bolívar disminuyeron la presencia de cultivos ilícitos en un 29 por ciento y 7,5 por ciento, respectivamente, sin embargo, Valdivia, Tarazá y Cáceres (Antioquia) se mantienen como principales enclaves productivos

del país⁶⁹ por parte de GAO que se disputan la zona. Situaciones de desplazamientos forzados, confinamientos, junto a eventos asociados a desastres naturales, configuran situaciones de doble afectación; las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas son las más afectadas. Estas regiones reciben fuerte impacto en las temporadas de lluvias y sequía, situación que limita el acceso a servicios, deteriora las condiciones de vida con impacto en la seguridad alimentaria por la pérdida de cultivos para el sustento.

⁶⁹ Resumen Ejecutivo. Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2019). UNODC <https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2019.html#:~:text=El%20Sistema%20Integrado%20de%20Monitoreo,2018%20a%20154.000%20en%202019.>



BAGRE / ANTIOQUIA. COLOMBIA

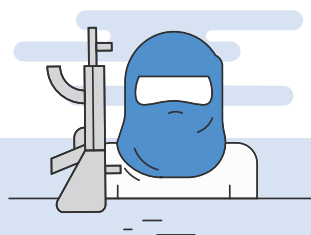
Ejercicio didáctico en comunidades afrodescendientes

Crédito de la foto: UARIV

Antioquia:

Las regiones de Norte, Bajo Cauca Urabá y Nordeste, donde se ubican los municipios de Dabeiba, Urrao, Murindó y Vigía viven bajo la constante influencia y control de GAO, incluso en zonas urbanas como la capital, afectando a los grupos más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y comunidades indígenas particularmente la Emberá y la Zenú. Su ubicación estratégica, la práctica de minería ilegal, presencia de cultivos, construcción de megaproyectos, propicia a que sea uno de los departamentos del país con mayor concentración de hostilidades y por ende impacto humanitario reflejado en múltiples hechos victimizantes que mantienen con temor a algunas comunidades y dejan consecuencias en medios de vida y salud.

Las comunidades indígenas con sus asentamientos en zonas lejanas y selváticas no son hablantes del idioma castellano, lo que dificulta las declaraciones o denuncias y limita su registro nacional. En la región del suroeste se reporta el mayor número de violencia contra niños, niñas y adolescentes y VBG (violencia basada en género). En zona rurales del norte y Urabá las restricciones a la movilidad y acceso es una constante, llegando a confinar a comunidades hasta por ocho meses durante 2020⁷⁰, además de los constantes



Incidentes reportados durante 2020 en la región Frontera Noroccidental



31 Masacres



110 Accidentes por MAP/MSE/TE



10 Reclutamiento forzado



100 Homicidios (promedio 4 diarios)



123 Amenazas a la población civil



21 Secuestros

Fuente: Monitor-OCHA (2020) <https://monitor.salahumanitaria.co/>
Fecha de corte: diciembre 2020

desplazamientos masivos, al igual que la trata y tráfico de personas, economías ilícitas y otros riesgos para las personas refugiadas y migrantes.

Córdoba:

Existe un subregistro de afectaciones por miedo de la población a represalias como parte del control que hacen los GAD. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador (Sur de Córdoba) presentan un alto riesgo de ocurrencia de casos de violencia sexual por parte de GAD⁷¹; llama la atención la naturalización de las restricciones de movilidad y acceso por las imposiciones de horarios por parte de los grupos armados, ante las afectaciones que causa en sus medios de vida incluso en la salud mental de las personas. Se identifican como poblaciones

especialmente vulnerables a comunidades indígenas Emberá Katío y Zenú, NNA, Mujeres, niños, niñas y adolescentes, y afrodescendientes, e incluso población refugiada y migrante. Adicionalmente, un elemento clave que ha afectado en gran medida es la minería que cada vez afecta más a comunidades en el sur del departamento, en términos de protección, medios de vida, seguridad alimentaria, salud principalmente y el Nexus con la paz y desarrollo (tenencia de tierras, y las garantías de seguridad). Durante la pandemia, los GAD restringieron la movilidad de personas y vehículos para disminuir el contagio de COVID-19, agudizando aún más las restricciones ya establecidas por el Gobierno Nacional. También preocupa brotes epidemiológicos y riesgos asociados a la falta de acceso a servicios de agua y calidad de esta.

Cifras destacadas en la región Frontera Noroccidental durante el 2020



109k

Personas no tienen acceso a educación



1.9M

Personas viven bajo influencia de GAO's.



677k

Personas en riesgo de inseguridad alimentaria.



1.3M

Personas tienen dificultades para acceder a servicios de salud.

Análisis de indicadores de Clusters para el HNO (ver fuentes en tabla de indicadores por clusters)



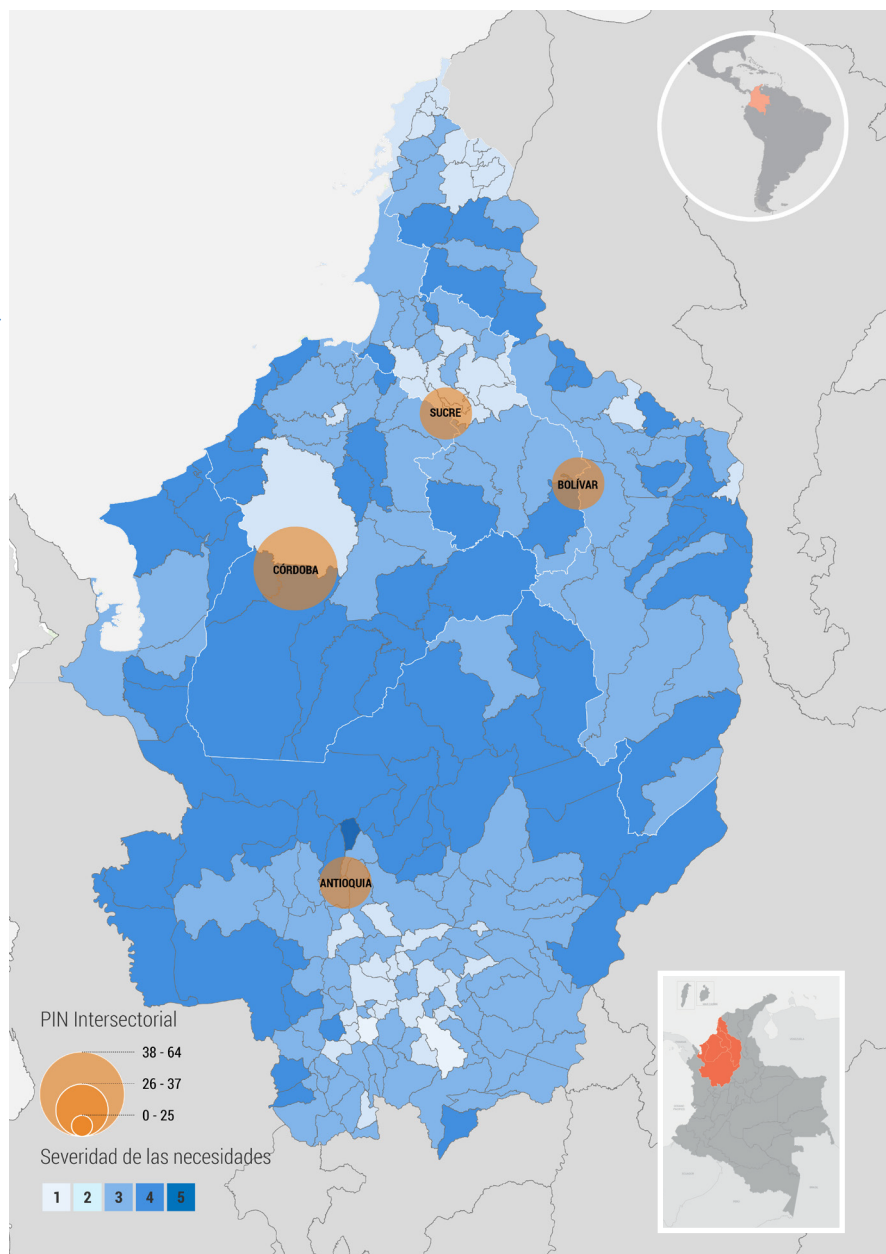
AGUA CLARA/ NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Evaluación de necesidades

Crédito de la foto: OCHA, Javier Carrillo

⁷⁰ Confinamiento en el municipio de Murindó (Antioquia) https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/25102020_flash_update_no.1_confinamiento_en_murindo_antioquia_vf.pdf

⁷¹ Briefing Córdoba, Junio 2020. <https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/document/colombia-briefingdepartamental-c%C3%B3rdoba-0>



La **región Centro-sur** está compuesta por los departamentos Putumayo, Caquetá, Meta-Guaviare, Vaupés y Amazonas, aunado a la frontera oriental Colombo Venezolana conformada por Vichada y Guainía conforman la región Amazónica.

Los departamentos en esta zona, a excepción del Meta, se caracterizan por tener una baja densidad poblacional con un alto porcentaje de personas pertenecientes a grupos indígenas (en promedio del 45,3%, en algunos municipios es hasta del 97,7%). La baja presencia institucional en el Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada dificulta el registro constante de las afectaciones y necesidades humanitarias que son principalmente

causadas por la presencia de GAO, la COVID-19 y la presencia de refugiados, migrantes y retornados provenientes de Venezuela. Al estar localizados en una amplia región selvática, también se presentan dinámicas de deforestación, explotación minera y de otros recursos naturales en algunos casos bajo las órdenes de GAO que también afectan a la población.

Putumayo:

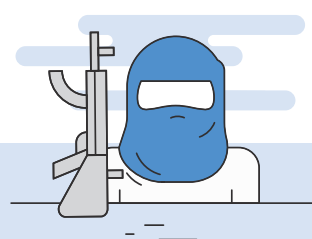
En lo corrido del año se han reportado 57 eventos de tensiones por erradicación forzosa entre la población y la fuerza pública, dejando 32 civiles heridos y cuatro muertos hasta el momento (incluido un menor de

edad). Se destacan municipios (Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo y zonas rurales de Puerto Asís) con difícil acceso incluso a servicios básicos (energía, agua y saneamiento e higiene) y conexión (puentes, infraestructura, señal telefónica, acceso a internet), y poca presencia de la institucionalidad y por ende poca respuesta. Tanto en municipios del Alto Putumayo como algunas zonas del Bajo Putumayo también presentan graves afectaciones por inundaciones, las cuales no son reportadas porque son zonas de difícil acceso, y no llega la respuesta ante la emergencia. Estos vacíos han repercutido en la deserción escolar, agudizados durante la pandemia. El impacto socio económico ha hecho necesario la solicitud de ayuda a la cooperación en términos de seguridad alimentaria y medios de vida⁷².

Caquetá:

A diferencia de años anteriores, se evidencia un incremento en el impacto humanitario, por el accionar, presencia y control por parte de los GAO agudizado en la emergencia sanitaria; estas dinámicas ponen en riesgo de protección a civiles por hechos como desplazamiento forzado de una comunidad indígena (Misak) y casos de reclutamiento. Al ser un territorio extenso, en sus zonas rurales se identifican situaciones de limitaciones de acceso a algunos servicios básicos con impacto en los medios de vida de la población, y también las madres gestantes y lactantes, además de la población refugiada y migrante son grupos vulnerables, pues tienen barreras de acceso a salud. Incidentes de acceso humanitario también preocupan a las organizaciones, debido a las implicaciones de estos eventos sobre las actividades de respuesta humanitaria: un bloqueo a misión humanitaria de atención en salud a 200 personas en el municipio La Montaña.

El impacto del COVID-19 ha repercutido en la generación de ingresos de familias, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de ellas, y especialmente el desarrollo físico y mental de niños y niñas.



Incidentes reportados durante 2020 en la región Frontera Amazónica



7 Masacres



20 Accidentes por MAP/MSE/TE



23 Reclutamiento forzado



142 Homicidios



159 Amenazas a la población civil



18 Secuestros

Fuente: Monitor-OCHA (2020) <https://monitor.salahumanitaria.co/>
Fecha de corte: diciembre 2020

Vichada y Guanía:

En la frontera suroriental con Venezuela conformada por Vichada y Guanía ambos departamentos comparten dinámicas migratorias (movimientos migratorios mixtos), pueblos indígenas transfronterizos vulnerables que algunas veces no hablan español lo que les dificulta acceder a la atención por la barrera del idioma. De otro lado, las comunidades de acogida en condiciones de vulnerabilidad preexistente y con altos niveles de pobreza, en zonas caracterizadas por el acceso limitado a servicios de salud física y mental; se destaca una alta tasa⁷³ de suicidios en adolescentes y jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas amazónicas en parte asociado a la falta de oportunidades que se

⁷² Briefing Departamental Putumayo, Junio 2020 <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-briefing-departamental-putumayo-30062020>

⁷³ ICBF: En 2019, los departamentos con mayor tasa de suicidio en la población mayor de 19 años fueron: Amazonas (26,8), Vaupés (22,8), Guanía (17,1), Tolima (11,7) y Risaralda (10,9). En niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 19 años, los departamentos con las tasas más altas fueron Putumayo (9,8), Arauca (8,7), Quindío (8,3), Risaralda (8,0) y Cauca (7,1). https://www.icbf.gov.co/system/files/infografia_suicidio_vf_vb_21.09.20.pdf

presentan en los territorios. Ante la poca oferta de servicios (campañas de vacunación y prevención de enfermedades endémicas de la región y/o campañas de salud sexual y reproductiva, incluyendo actividades acerca de la higiene de la menstrual), propicia la deserción escolar de las adolescentes. En este contexto es pertinente reforzar las acciones de respuesta y atención humanitaria con el enfoque diferencial étnico. Se destacan casos de restricción al acceso humanitario por parte de la Guardia Venezolana con retención de ayudas humanitarias en vías fluviales compartidas por los dos países.

Amazonas y Vaupés:

Por otro lado, a pesar de que Amazonas y Vaupés tienen menos de mil hectáreas con cultivos ilícitos, lo que representa una oportunidad para consolidar los territorios como libres de cultivos ilícitos⁷⁴, se presentan denuncias sobre el retorno y crecimiento de estos cultivos de uso ilícito, alertando situaciones sobre la utilización y casos de reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes relacionadas a las economías ilegales, agravados durante la temporada de aislamiento obligatorio. La educación de los niños y niñas indígenas a partir de los cinco años se realiza en internados que, como entorno protector están en malas condiciones de infraestructura y de capacidad instalada en los servicios de agua, saneamiento básico e higiene, escasa o nula dotación y carecen de

un número apropiado de docentes y demás personal necesario para la atención de todos los niños, niñas y adolescentes en internados (servicios médicos, alimentación, limpieza). Muchos de los implementos (alimentos y combustible) que son enviados desde el nivel nacional a estos internados, son interceptados por GAO y llegan incompletos. En términos de servicios, el precario acceso a agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales especialmente en asentamientos informales y zonas no municipalizadas de los departamentos, influyen en la persistencia de enfermedades gastrointestinales particularmente en niños y niñas menores de cinco años.

La expansión de la pandemia en el territorio amazónico, por un lado, amenaza la supervivencia de grupos indígenas que no cuentan con la información ni equipos de prevención adecuados para evitar la COVID-19, muchos adultos mayores han fallecido por la enfermedad dificultando el paso del conocimiento y tradiciones de generación en generación, por otro lado, la pandemia tuvo un efecto visibilizador de los vacíos y necesidades humanitarias y estructurales que se presentan en dichos territorios. Los niveles de alarma movilizaron organizaciones del EHP hacia zonas de Vaupés, Amazonas en las que no se tenía presencia o respuesta humanitaria previamente y los coordinadores residentes de Colombia, Brasil y Perú diseñaron el [Plan de Acción de la Triple Frontera Amazónica](#).

Cifras destacadas en la región región Amazónica (frontera colombia, ecuador, peru y brasil)



61k

Personas no tienen acceso a educación



673k

Personas viven bajo influencia de GAO's.



402k

Personas en riesgo de inseguridad alimentaria.



493k

Personas tienen dificultades para acceder a servicios de salud.

Análisis de indicadores de Clusters para el HNO (ver fuentes en tabla de indicadores por clusters)

⁷⁴ Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2019). UNODC <https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2019.html#:~:text=El%20Sistema%20Integrado%20de%20Monitoreo,2018%20a%20154.000%20en%202019.>

Meta y Guaviare:

En el caso particular del Meta y Guaviare las actividades de erradicación forzada generan un impacto humanitario en el acceso a medios de vida y seguridad alimentaria de familias que no tienen la facilidad de migrar a cultivos lícitos, ante amenazas de los GAO oponiéndose a las actividades de erradicación. El municipio de Vista Hermosa se ha visto afectado por la anterior dinámica y además se ha evidenciado la instalación nueva de artefactos explosivos por los grupos armados (misma situación para Macarena, Mesetas y Puerto Rico) para proteger los cultivos de uso ilícito de la erradicación forzada que se adelantan en el departamento. Por su parte, las actividades de desminado humanitario no

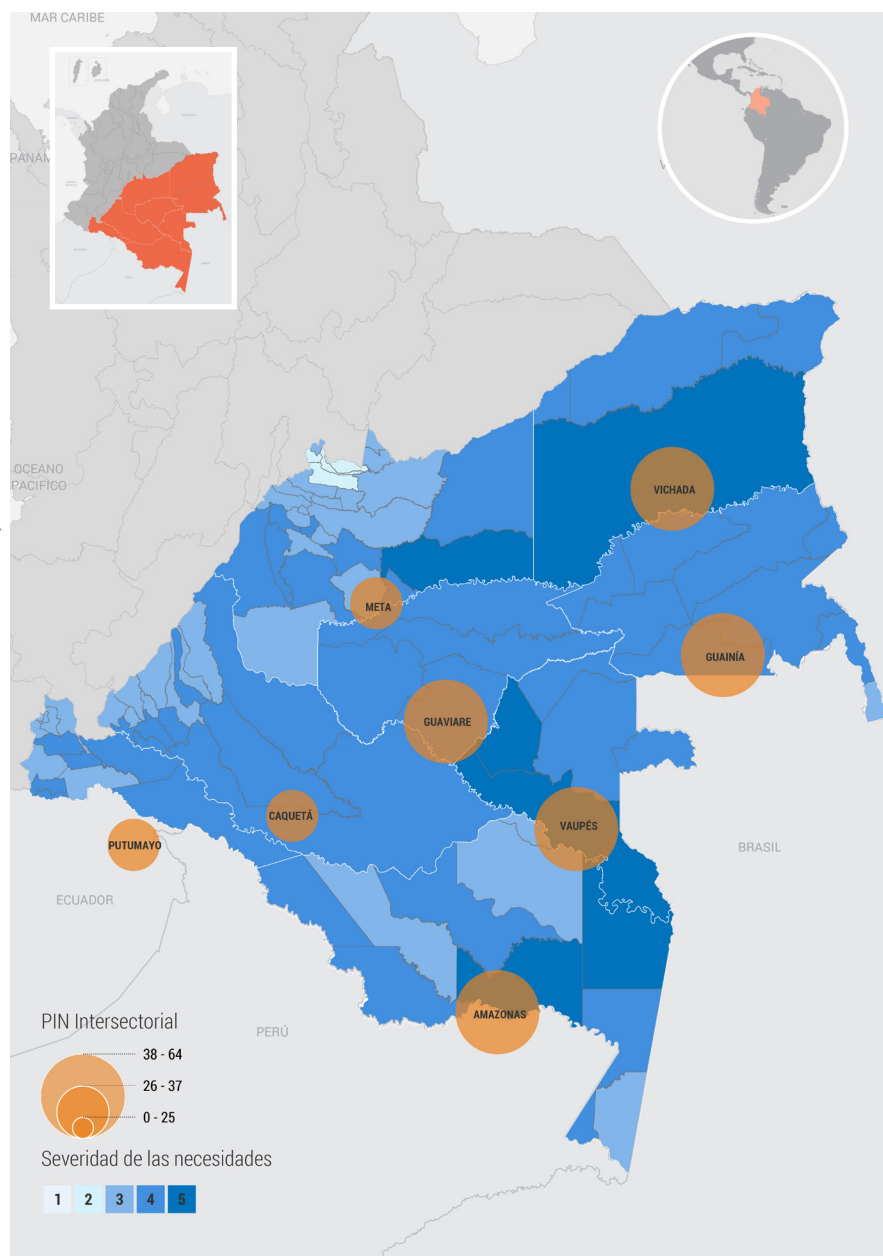
han podido realizarse por el contexto de seguridad, y algunos incidentes de acceso humanitario que se han presentado y afectan las organizaciones que trabajan en estos programas. Preocupan ataques de violencia sexual contra mujeres indígenas de las etnias Jiw y Nükak Makú, por los actores armados que operan en las zonas rurales. Las poblaciones no cuentan con elementos técnicos para resolver los problemas de acceso a la tierra lo que a su vez genera violencia progresiva, y en los municipios del sur de estos departamentos existe un vacío de la información frente a las disputas socio ambientales que se presentan y que afectan los medios de vida de las comunidades campesinas⁷⁵.



AMAZONAS, COLOMBIA

Misión de evaluación de necesidades durante la ejecución del Plan de Acción de la Triple Frontera Amazónica
Crédito de la foto: OCHA

⁷⁵ Briefing Departamental Meta, Junio de 2020. <https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/colombia-briefing-departamental-meta-guaviare>



1.3 Alcance del análisis

Las organizaciones humanitarias del Equipo Humanitario País (EHP) basadas en evidencia y análisis del contexto identificaron los grupos vulnerables más afectados, así como las zonas más afectadas en términos de necesidades humanitarias, definiendo la severidad de sus necesidades y considerando un enfoque diferencial. Una lectura conjunta entre lo cualitativo y cuantitativo basado en estadísticas oficiales y en un proceso de consulta con actores presentes en todos los territorios, permitió tener resultados que dencuenta de las diferentes

afectaciones, llegando esta vez a departamentos de la región de Amazonía y Orinoquía, de los que no se conocía mucha información en años anteriores. La priorización realizada, también identifica lugares para la programación de intervenciones sectoriales ante algunas limitaciones que quedan de la respuesta del Estado ya sea por limitaciones presupuestales o de capacidades, o porque las condiciones de seguridad impiden la presencia o acceso sostenido a estas zonas.

Marco de análisis en Colombia

GRUPOS VULNERABLES



CONDUCTORES

NECESIDADES SECTORIALES

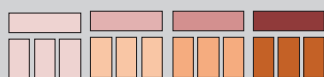


Evaluaciones
Datos



Sector
PIN/ Severidad

Necesidades
intersectoriales
sectoriales



+



+



=

PIN
intersectorial/
Severidad



ARAUQUITA / ARAUCA. COLOMBIA

Resguardo La Ilusión Comunidad la Vorágine/

Comunidad Hitnu (2018)

Crédito de la foto: ELC Arauca

1.4

Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades

PiN distribuido por grupos vulnerables



1.3M

Comunidades
afrodescendientes



954.7k

Comunidades
indígenas



236.5k

Personas afectadas por
desastres naturales



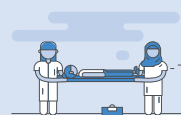
829.4k

Comunidades
anfitrionas



450.7k

Personas
desplazadas



17k

Personas con
enfermedades
preexistentes



26.3k

Personas
confinadas



22k

Personas en
situación de calle



4.9M

Personas que viven
bajo influencia de
los GAO/GAD

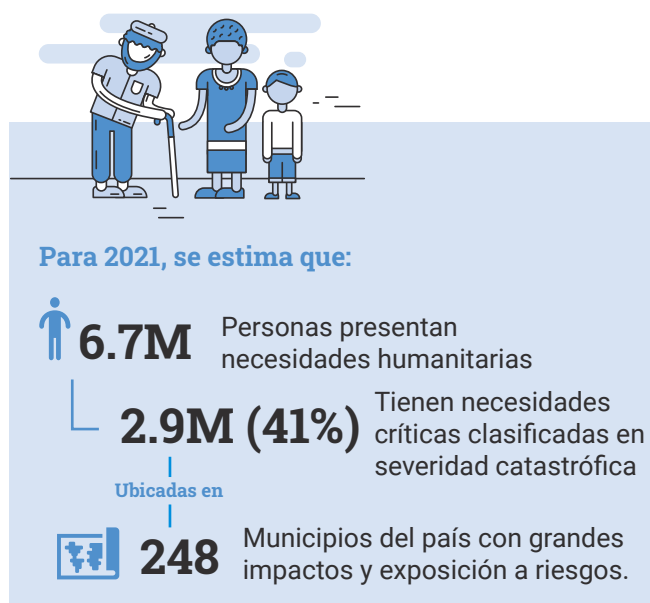
Grupos más vulnerables

Miles de personas (k)

GRUPO VULNERABLE	PIN	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
Personas que habitan en municipios con presencia de GAOs	4.9M	-	737.3k	2M	2.1M	111.9k
Adultos	3.6M	1.6k	639.3k	1.5M	1.3M	152.2k
Hombres	3.3M	1.4k	541.4k	1.3M	1.3M	160.4k
Mujeres	3.3M	1.5k	561.6k	1.3M	1.2M	149.9k
Niños y niñas	2.2M	0.7k	309.9k	851k	962.2k	135.1k
Comunidades afrocolombianas	1.3M	136	72.4k	415.2k	702k	110k
Población Indígena	954.7k	16	27.5k	203.5k	584.8k	138.8k
Comunidades anfitrionas	829.4k	1.5k	91k	222.7k	442.9k	71.1k
Población adulto mayor	790.3k	0.5k	153.8k	351k	262.2k	22.6k
Desplazados	450.7k	1.6k	34.8k	128k	257.1k	29k
Afectados por desastres naturales	236.5k	2k	35.5k	63.9k	100.8k	34.1k
Personas en condición de discapacidad	192.6k	131	35.7k	86k	67.8k	2.9k
Confinamiento	26.3k	-	-	84	10.1k	16.1k
Personas en situación de calle	22.7k	652	22k	111	-	-

Condiciones Humanitarias

Los grupos vulnerables analizados en el Panorama de las Necesidades Humanitarias del país fueron identificados como prioritarios por los equipos locales de coordinación y el EHP como los mas impactados por las emergencias y con más necesidades humanitarias. Dichos grupos se enfrentan a diversos desafíos para combatir los impactos en su bienestar físico y mental asociados a: violencia armada, pandemia, desastres naturales y flujos migratorios mixtos.





MOSQUERA / NARIÑO. COLOMBIA

Hogares elevados para evitar las inundaciones a causa de la alta marea del océano Pacífico

Crédito de la foto: Misión de Verificación de la ONU, Nadya González

El colapso parcial en los niveles de vida y los servicios básicos conlleva un deterioro en la salud física y mental y en los estándares de vida de muchas poblaciones, obligándolas en casos extremos al uso de estrategias de afrontamiento negativas para su supervivencia. A continuación, se describen los impactos en el bienestar físico y mental de los grupos vulnerables aunados a los mecanismos de afrontamiento negativos que éstos asumen para mitigar su impacto humanitario.



Personas que habitan en municipios con presencia de GAO y personas confinadas.

Aproximadamente 4.9 millones de personas se encuentran en zonas con presencia, influencia y/o control de GAO o GAD, principalmente en las regiones Pacífico, nororiental, noroccidente y sur del país. Dicha población tiene afectaciones directas sobre su bienestar físico y mental al ser víctimas de hechos de violencia armada (heridos bajo fuego cruzado, víctimas de MAP/MSE, asesinados, entre otros) y también por el obstáculo que supone la presencia de GAO para acceder a los derechos humanos fundamentales y a bienes y servicios básicos dadas las restricciones que imponen a la población y que dificultan y en algunos casos imposibilitan la ejecución de programas del Estado que mitigan las necesidades de comunidades vulnerables

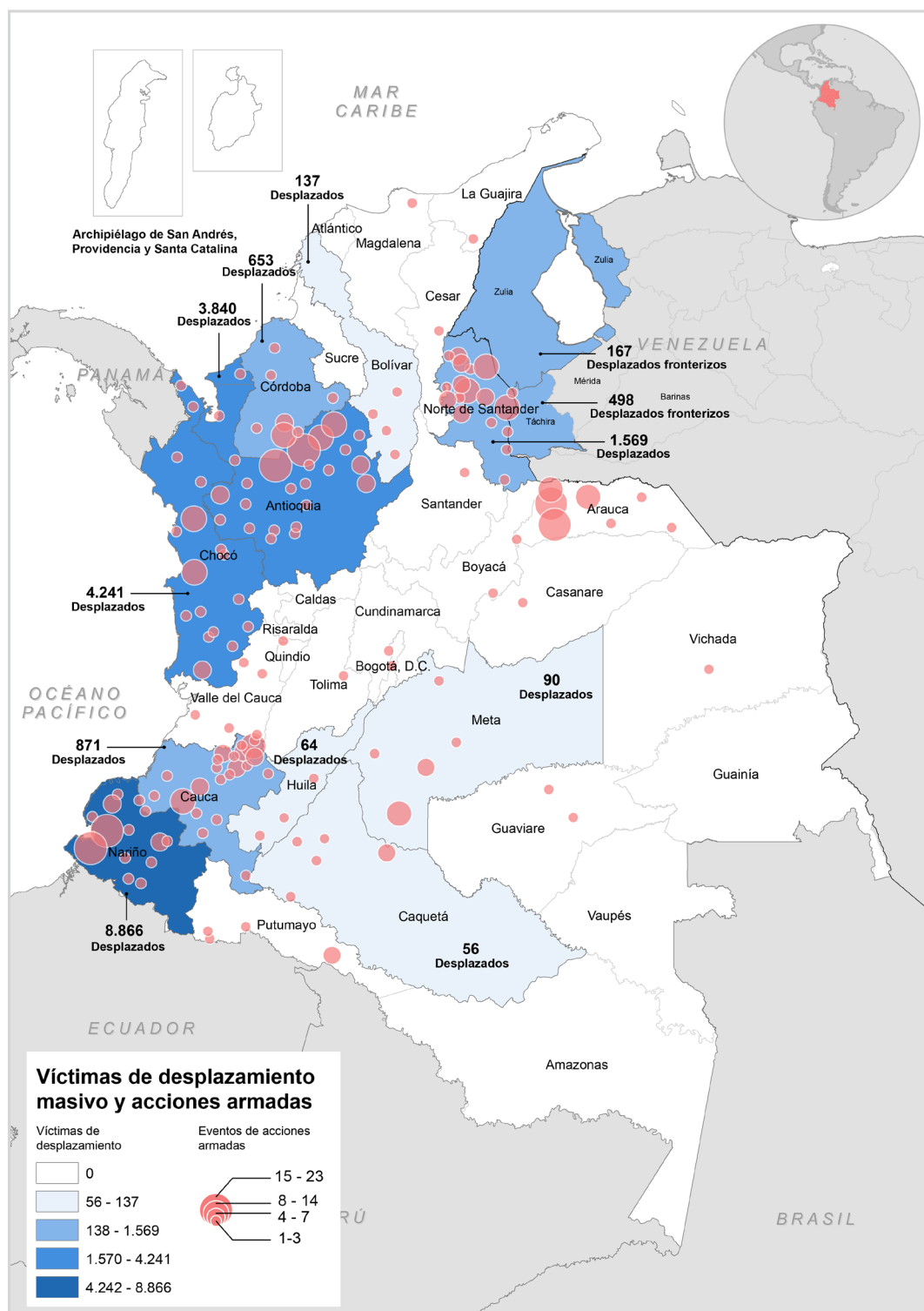
que habitan dichos municipios y se disminuyen las probabilidades de desarrollo en el corto y mediano plazo ya que se limita la factibilidad de proyectos de inversión pública y/o privada. Además, la población que vive bajo presencia de GAO está mayormente en riesgo de ser confinada y están expuestos a problemas en la salud mental a causa de traumas y otras afectaciones a nivel psicológico y físico (violencia sexual) ante el temor a la violencia armada, de estos más de 56 mil podrían ser Niños, Niñas y Adolescentes. Para las mujeres y personas LGTBIQ+ que habitan en estas zonas, aumenta la probabilidad de ocurrencia de violencia basada en el género como parte de los mecanismos de control impuestos por los GAO/GAD; 1.4 Millones de personas se encuentran especialmente vulnerables de sufrir este tipo de violencia.

Los mecanismos de afrontamiento negativos de estos dos grupos vulnerables se relacionan a la posible vinculación a los frentes armados de los GAO o GAD debido a la falta de oportunidades en el territorio y también como medida de autoprotección para sí mismos y sus familias. También aumentan sus probabilidades de participar en economías ilícitas, incluyendo su participación en los cultivos de usos ilícitos y las rutas de flujo de economías ilegales. Las

adolescentes y mujeres en algunos casos optan por ser pareja de miembros de GAO/GDO para proteger a sus familias. Las personas confinadas, además se enfrentan a riesgos directos de protección, seguridad alimentaria, salud, educación y servicios de agua, saneamiento e higiene dadas las restricciones impuestas por los GAO

y GDO, que repercuten en su bienestar general. Aunado a ello, las comunidades no denuncian las situaciones de hechos victimizantes, debido a que consideran que no hay una solución en el corto plazo, están amenazados o porque normalizan la situación.

MAPA DE DESPLAZAMIENTOS Y CONFINAMIENTOS EN 2020





BOJAYÁ / CHOCÓ. COLOMBIA

Edificaciones abandonadas luego de la reubicación del pueblo consecuencia de la violencia armada

Crédito de la foto: OCHA, Claudia Rodríguez



Desplazados y Comunidades Anfitrionas.

Al igual que las personas confinadas, los desplazados presentan necesidades de protección y seguridad alimentaria relacionadas directamente a su bienestar físico debido a que ante la amenazada e intimidación de GAO/GDO abandonan sus propios cultivos y medios de vida, además del trauma psicológico que representa el desplazamiento y desarraigo de sus tierras. Particularmente las poblaciones de algunos municipios en Nariño, Chocó, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, en el que se estima que aproximadamente el 4% de sus poblaciones se verán afectadas al convertirse en comunidades de acogida de personas desplazadas (migrantes y refugiados y además de afectados por desastres de origen natural), sin embargo, la capacidad de respuesta de las administraciones locales se ve desbordada ante la recurrencia de estos eventos.

Muchas comunidades de acogida intentan afrontar estas situaciones dando albergue a los afectados en sus

propios hogares, generando condiciones hacinamiento, en casas con mal estado de infraestructura y sin espacios adecuados ni acceso suficiente a servicios básicos tanto para las comunidades de acogida, como para los desplazados. Dentro de los procesos organizativos de las comunidades de acogida se han desarrollado mecanismos de protección comunitarios que a pesar de que permiten enfrentar las adversidades con más resiliencia, invisibilizan o normalizan eventos traumáticos que afectan su salud emocional.



Para los afectados por Desastres Naturales

de por sí, las emergencias por inundaciones, desbordamiento de ríos y crecientes súbitas propician el contagio de enfermedad diarreica aguda (EDA), infecciones respiratorias agudas (IRA), afectaciones en la piel -en especial a los niños y niñas-, leptospirosis y enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo dengue y malaria. A lo anterior, se suma el riesgo de contagio de COVID-19 debido a las condiciones de hacinamiento en los albergues improvisados y temporales que no proveen las condiciones mínimas de dignidad. El bienestar físico y mental de mujeres, niñas y niños también se ve comprometido al no haber adecuación con enfoque diferencial en la división de dichos espacios, poniendo en riesgo la integridad de las personas ante posibles casos de violencia de género, sexual o infantil.

Así mismo, la población de zonas desérticas del país como la Alta Guajira (en donde habita el pueblo indígena Wayúu) y otros departamentos del Caribe (César, Córdoba) enfrentan sequías extremas en donde cerca de 1.6 millones de personas son susceptibles de padecer algún grado de inseguridad alimentaria, además en las zonas selváticas (Amazonas, Vaupés, Vichada, Caquetá) se pueden presentar incendios forestales; que aumentan los riesgos de supervivencia particularmente de grupos indígenas que habitan en dichas zonas, aunado a la dificultad que ya tienen para conseguir agua potable y alimentos ante el desabastecimiento, más la precaria infraestructura para provisión de servicios básicos que caracterizan dichas zonas.

Las poblaciones afectadas por desastres de origen natural, en donde las necesidades desbordan la capacidad de repuesta, deciden dejar sus viviendas

de manera permanente, habitar a la intemperie o en condiciones de hacinamiento en comunidades de acogida que no están capacitadas ni preparadas para responder ante tales eventos. Por ello, se generan situaciones de conflictividades comunitarias, problemas de convivencia, sumado a factores como el temor al desalojo, inseguridad, desempleo, además de las dificultades de acceso a alimentos y agua potable por falta de infraestructura.



Población afrodescendiente e indígena. Las personas de comunidades indígenas y afrocolombianas concentran las necesidades mas severas. Ubicadas en regiones como el Pacífico, noroccidente, Orinoquía, Amazonía y Caribe (Antioquia, Chocó, Córdoba Guaviare, La Guajira, Nariño, Vaupés, Vichada,) son las que concentran las necesidades más severas, su bienestar físico se ve gravemente afectado por la carencia en la provisión de servicios básicos de salud, agua y saneamiento. Además, durante la pandemia por COVID-19 aumentaron sus necesidades en materia de seguridad alimentaria debido a que tuvieron que dejar de cultivar sus siembras de pancoger y 28.634 personas de más de 76 pueblos indígenas (67% del total nacional) contrajeron la enfermedad, en algunos pueblos pequeños amenazando la supervivencia de sus costumbres con la muerte de los ancianos sabios. Más allá de la pandemia, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente se encuentra en constante riesgo a nivel físico y mental por la presencia de los GAO/GDO en sus territorios. El accionar armado de dichos actores tiene un impacto diferente en cada pueblo, según su propia cosmovisión del mundo, lo cual puede tener afectaciones psicológicas en el largo plazo, especialmente para las víctimas directas de hechos violentos.

Ante la falta de acceso a servicios de salud en los territorios más remotos, en donde habitan dichas comunidades, los grupos indígenas y comunidades afrodescendientes utilizaron remedios tradicionales o caseros para tratar la enfermedad, inclusive algunas comunidades decidieron auto confinarse y desplazarse a sitios aún más remotos para evitar el contagio, en este contexto cerca de 50 mil personas afrodescendientes y 22 mil indígenas son particularmente susceptibles de no recibir asistencia en servicios de salud. Adicionalmente,

las comunidades están utilizando agua no apta para el consumo e inclusive migrando a dietas no tradicionales debido a la falta de alimentos propios, lo que genera una perdida generacional de conocimiento tradicional para la supervivencia en territorios remotos. Así mismo, algunas comunidades optan por ser colaboradoras de los GAO/GDO como medida de autoprotección, brindándoles hospedaje y/o alimentación cuando les es requerido.



Afectación de las mujeres. Durante 2020 el bienestar físico y mental de las mujeres se vio particularmente afectado por la pandemia. Por un lado, la falta de acceso a servicios salud sexual y reproductiva se verán reflejados en el aumento de los embarazos no planeados, así como en las morbilidades relacionadas con la gestación, las ITS/VIH y las violencias intrafamiliares y basadas en el género. Los sectores de la economía que más empleados despidieron debido a la emergencia de la pandemia, incluyen aquellos en donde las mujeres tenían mayor proporción de ocupación (incluyendo comercio, turismo, actividades de cuidado, entre otros).

Las mujeres con jefatura de hogar se ven mayormente afectadas por esta situación, en este sentido, un poco más de 2.9 millones de mujeres son vulnerables de padecer carencias en los ámbitos de salud, la educación y el nivel de vida quienes ante la necesidad de proveer alimentos para los menores, optan por consumir menos alimentos, tomar préstamos de dinero informales con altas tasas de interés e inclusive acudir al sexo por supervivencia. Este último es también usado por personas de la comunidad LGTBQ+ que, ante la falta de oportunidades, sumado al estigma por sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas y la falta de apoyo dentro de sus círculos familiares y comunitarios, lo utilizan como único medio de supervivencia.

A nivel psicológico el incremento de casos reportados de violencia intrafamiliar y basada en género se asociaba principalmente al maltrato físico y verbal a las mujeres del hogar quienes durante más de 5 meses estuvieron encerradas con sus agresores debido al aislamiento preventivo obligatorio.



NARIÑO. COLOMBIA

Niño indígena

Crédito de la foto: Alianza Por La Solidaridad



Niños, Niñas y Adolescentes. Este grupo presenta graves afectaciones en su bienestar físico y mental debido a los diversos riesgos a los que están expuestos. En primer lugar, cerca de 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de GAO/GDO, además de su utilización en cultivos de uso ilícito, en cualquier caso, se retrasa su desarrollo educativo y se disminuye la probabilidad de que ejerzan actividades productivas legales en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, debido a la pandemia, 102.880 niños y niñas en edad escolar han desertado de sus estudios debido a las dificultades de acceso a la educación virtual, a la vez desertando de los programas de alimentación complementaria prestado en instituciones del Estado.⁷⁶ Actualmente, 13.514 niños y niñas presentan niveles de

desnutrición aguda y severa (corresponde al 80.4 por ciento del total nacional de niños y niñas en situación de desnutrición) que ocasiona graves consecuencias en el desarrollo físico y mental de los niños y niñas. También por la pandemia, se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores (inclusive virtualmente), el trabajo infantil, hiperactividad en los niños y niñas y altos riesgos de salud mental.

Muchas comunidades recurren a normalizar mecanismos de afrontamiento negativos que van desde la explotación sexual y laboral de los menores de edad, repercutiendo en la salud física y también en las afectaciones psicológicas y traumas en el largo plazo ocasionados por esta situación. Así mismo, los niños, niñas y adolescentes que crecen en áreas con presencia e influencia de GAO/GDO están propensos a participar de actividades económicas ilícitas debido a que constituyen la única fuente de ingreso económico en áreas remotas.



Adultos mayores, personas con condición de discapacidad y enfermedades preexistentes. Estos tres grupos vulnerables presentan afectaciones similares en su bienestar físico y mental, en especial en relación con la COVID-19. Los tres se encuentran en grupos de riesgos con alta probabilidad de complicaciones por COVID-19 y los tres sufrieron tras la reducción de prestación de servicios de salud debido a la focalización de la atención a casos por COVID-19 y el alto riesgo de contagio que presenta asistir a un centro médico en su condición. En general, la prestación de servicios de salud para las personas con discapacidades físicas o de desarrollo cognitivo (incluyendo a las víctimas de accidentes con minas antipersonal, heridos en atentados o en acciones armadas, entre otras) generalmente es limitado y en los casos que se dan en contextos de emergencias no tienen el seguimiento adecuado. Lo anterior genera un impacto psicológico, dado el mayor riesgo de estrés y ansiedad que se deriva no solo el impacto de la pandemia sino de su precario acceso a servicios de salud. A pesar de que el número de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional aumentó para los casos con complicaciones por COVID-19, de 5.358 a

⁷⁶ Ministerio de Educación. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401634.html?_noredirect=1



LETICIA / AMAZONAS. COLOMBIA

Adulto mayor

Crédito de la foto: OCHA, Nicolás Mayr

10.225, en algunos departamentos como Amazonas, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés se aumentaron las barreras de acceso a la atención primaria en salud.

Algunos de los mecanismos de afrontamiento negativos de estos tres grupos y de su cuidador (que generalmente es una de las mujeres en el hogar) incluyen no asistir a los centros de servicios médicos, aislarse de la vida en comunidad (especialmente para las personas con condición de discapacidad) y por tanto no valerse de sí mismos, convirtiéndose en una carga para los cuidadores que en la mayoría de los casos no reciben un ingreso económico por dicha labor.



Personas en situación de calle. Este grupo tiene un limitado acceso (casi nulo) a servicios básicos de salud, de alimentación y de agua, higiene y saneamiento. Por ende, su bienestar físico se encuentra gravemente afectado. Además, ante la falta de ingresos y la reducción de los medios de vida, personas de zonas rurales con altos índices de pobreza se ven obligadas a convivir o habitar en la calle y otros espacios públicos, recurren a la mendicidad como medio de vida enfrentándose a riesgos de protección al vivir y dormir a la intemperie. En algunos casos el consumo indiscriminado de sustancias psicoactivas es utilizado para disminuir las necesidades físicas

(hambre, sueño, frío, entre otras) y a su vez puede aumentar los niveles de violencia que estos sufren.

Severidad de las Necesidades

Para 2021 se registra el número más grande de personas con necesidades en Colombia (6.7 millones) en los últimos cinco años, representando el 13 por ciento de la población del país; de éstas al menos 5.6 millones presentan necesidades severas y 2,9 millones de personas tienen necesidades agudas por la convergencia de los cuatro choques principales que componen las emergencias con impacto humanitario de la situación interna del país (violencia armada, COVID-19, desastres naturales y movimientos migratorios mixtos). El aumento se debe principalmente al impacto de la pandemia por el COVID-19, ya que agudizó las necesidades ya existentes, y ocasionó nuevas necesidades con alto impacto. La severidad de las necesidades humanitarias y mecanismos de afrontamientos por parte de los diferentes grupos vulnerables, se manifiestan según las dinámicas propias de cada región, sus intereses económicos, niveles de desarrollo o ausencia de este, las diversas características y situaciones relacionadas a sus costumbres, e incluso la resiliencia individual o colectiva según la información a la que se accede.

En esta ocasión a diferencia del 2019, se realizó un análisis a nivel municipal utilizando la metodología JIAF.⁷⁷, lo anterior permitió realizar una evaluación técnica basada en datos abiertos de las autoridades, indicadores priorizados que representen la situación del país, con el fin de definir la severidad de necesidades humanitarias que se atenderán en 2021.

Para la clasificación de las severidades más altas, se tuvo en cuenta los siguientes factores: en la escala severa o tres (3) que tiene relación con los estándares de vida degradados y hay algunas necesidades básicas sin suplir en el mediano plazo, incluyendo afectaciones físicas y mentales que resultan en la pérdida de dignidad de la población. Se consideraron las tasas de mortalidad, brotes epidemiológicos y violencia armada (considerando enfrentamientos, amenazas y contaminación por MAP/MSE) para reflejar una severidad promedio media -considerando además la percepción cualitativa de personas que conocen el contexto en los territorios, para validar la información cuantitativa -. Para la escala extrema o cuatro (4) se considera el colapso en los estándares de vida, necesidades de supervivencia cubiertas, violación de derechos humanos y afectaciones físicas y mentales irreversibles, considerándose las tasas de mortalidad, la percepción cualitativa en terreno, brotes epidemiológicos y violencia armada. Mientras que en la escala cinco (5) que debe reflejar el colapso total en los estándares de vida, necesidades sin suplir, violaciones de derechos humanos y afectaciones físicas y mentales irreversibles, se utilizó una mortalidad dominante, presencia de GAO y GDO activa con afectación directa a la población (desplazamientos, confinamientos, presencia e instalación de MAP/MSE, entre otros) y brotes epidemiológicos, incluido el COVID-19, mucho más altos que el promedio general.

Del total de 1.122 entidades administrativas (considerando municipios y distritos), 20 se encuentran en severidad catastrófica o nivel cinco (5), incluyendo municipios de zona mayoritariamente selvática de la Orinoquía, Amazonía y Pacífico (Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Vichada, Guainía y Meta)

con baja densidad poblacional. Adicionalmente se resalta que, en la mayoría de los municipios con esta clasificación habitan grupos indígenas en zonas de reserva y comunidades afrocolombianas con vías de acceso precarias para acceder a bienes y servicios. La región suroriental y sur de Colombia tiene una infraestructura de desarrollo incipiente, en donde la capital de los departamentos presenta al menos un hospital de bajo nivel, pero las zonas rurales y áreas no municipalizadas carecen de infraestructura básica de acceso a servicios. Es inminente la ayuda humanitaria para salvar vidas.

Otros 228 municipios se clasifican en nivel de severidad cuatro (4) o extrema, de los cuales 56 están en la zona selvática de baja densidad poblacional debido a la convergencia de emergencias humanitarias y una baja capacidad de servicios disponible y respuesta en los territorios. Comunidades indígenas (Awá, Embera, Embera Katio y Wayuu) en la región Pacífico (Nariño, Chocó) noroccidente (Antioquia, Córdoba), La Guajira y gran parte de la Orinoquía y suroriente se ven frecuentemente revictimizadas por hechos de violencia armada y/o por desastres de origen natural. Para este escenario se requiere de ayuda humanitaria donde los daños pueden ser reversibles si se atienden de manera oportuna.

En el nivel de severidad tres (3) o severa, se clasifican 437 municipios, de los cuales 27 están ubicados en la zona selvática y el resto se encuentran dispersos en los departamentos de la zona Caribe, Pacífico y de Frontera con Venezuela. En donde suelen converger dinámicas de violencia armada, brotes epidemiológicos y tasas controladas de mortalidad. Los municipios clasificados en el nivel severo cuentan con administraciones locales preparados para responder ante las emergencias humanitarias, pero cuyas capacidades de respuesta financiera y técnica a veces se ven desbordadas frente a la recurrencia de dichos eventos. A pesar de que se requiere de ayuda humanitaria, también es importante llevar a cabo acciones de prevención para lograr estabilizar las posibles necesidades que empiezan a darse o los riesgos latentes.

⁷⁷ Joint Intersectoral Analysis Framework. Link a vínculo: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JIAF%20Guidance.pdf>

En el resto del territorio - (región Andina o central del país), convergen departamentos y ciudades capitales (Cundinamarca, la capital Bogotá D.C., Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, entre otros), donde no se presentan necesidades consideradas humanitarias dada la desarrollada infraestructura de servicios, la presencia de instituciones del Estado y la no presencia activa o

baja influencia o accionar de grupos armados. Esto ha facilitado que tengan un nivel de desarrollo medio o medio - alto que permita cubrir emergencias asociadas a desastres o como este año, el impacto por el COVID-19.

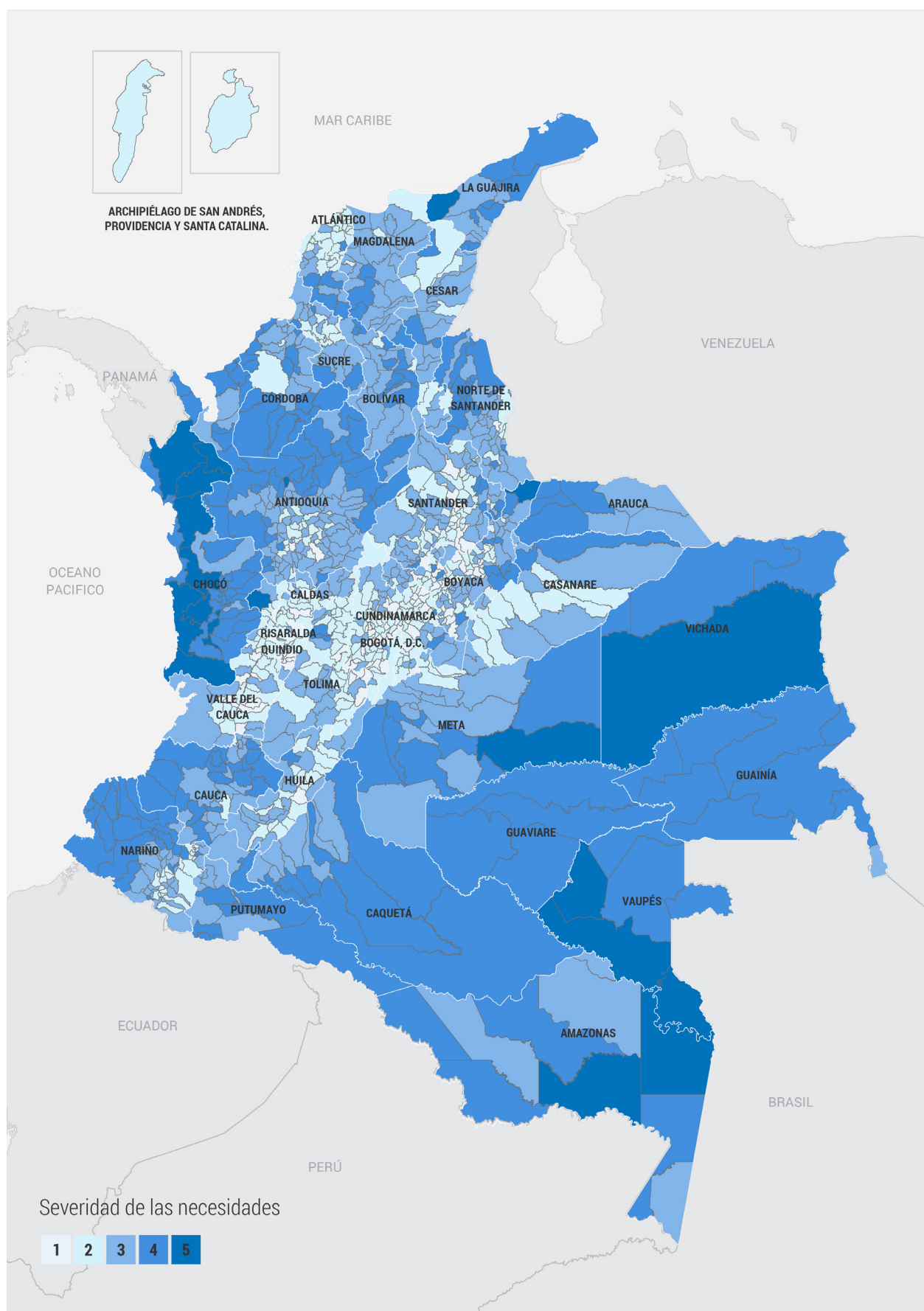


MAICAO/ LA GUAJIRA, COLOMBIA

Unidad móvil de la ESE hospital Maicao brindando atención médica a colombianos y migrantes en condición de calle durante la pandemia del COVID-19

Crédito de la foto: OIM

MAPA SEVERIDAD PIN 2021



Parte 2

Análisis de riesgo y monitoreo de situación y necesidades

ARAUQUITA / ARAUCA. COLOMBIA

Resguardo La Ilusión Comunidad la Vorágine/

Comunidad Hitnu (2018)

Crédito de la foto: ELC Arauca



2.1

Análisis de riesgos

La pandemia seguirá representando un riesgo en muchos municipios sin suficiente capacidad de prevención y respuesta. Es muy probable que se agudicen las necesidades humanitarias sectoriales por el deterioro de las condiciones de seguridad que continúan dejando víctimas, las condiciones climáticas que afectan los medios de vida y por la contracción de la economía que repercutirá en el acceso a bienes, servicios básicos y derechos. Sin embargo, tanto la institucionalidad como la comunidad humanitaria se enfrentan a retos para el financiamiento humanitario y la logística por el difícil acceso a poblaciones de ubicación remota y el contexto de seguridad; así mismo, las administraciones locales también plantean el riesgo de limitar la capacidad de respuesta por el desborde de capacidad operacional. Para 2021, se contemplarán personas afectadas por diferentes emergencias en 2020 y que no hayan superado su situación de vulnerabilidad respecto al tipo de impacto por la situación interna.

La tabla de indicadores INFORM pondera de 0 a 10 la clase de riesgos a los que se enfrenta la población vulnerable. Para los grupos vulnerables en Colombia la exposición a riesgos de origen natural (emergencias por desastres) y de origen humano (emergencias por violencia armada) representan la mayor ponderación, exponiendo a los grupos vulnerables a un riesgo alto. Así mismo la ponderación asociada a debilidades de infraestructura, falta de mecanismos de afrontamiento y la vulnerabilidad socio económica se presentan como riesgos altos o con alta probabilidad de ocurrencia para los grupos vulnerables.

INFORM Index

NATURAL 6,7	INFRAESTRUCTURA 3,0
HUMANO 7,0	FALTA DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 3,7
RIESGO Y EXPOSICIÓN 6,9	RIESGO INFORM 5,4
VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA 3,6	CLASE DE RIESGO ALTO
GRUPOS VULNERABLES 7,7	
VULNERABILIDAD 6,1	

INFORM
INDEX FOR RISK MANAGEMENT

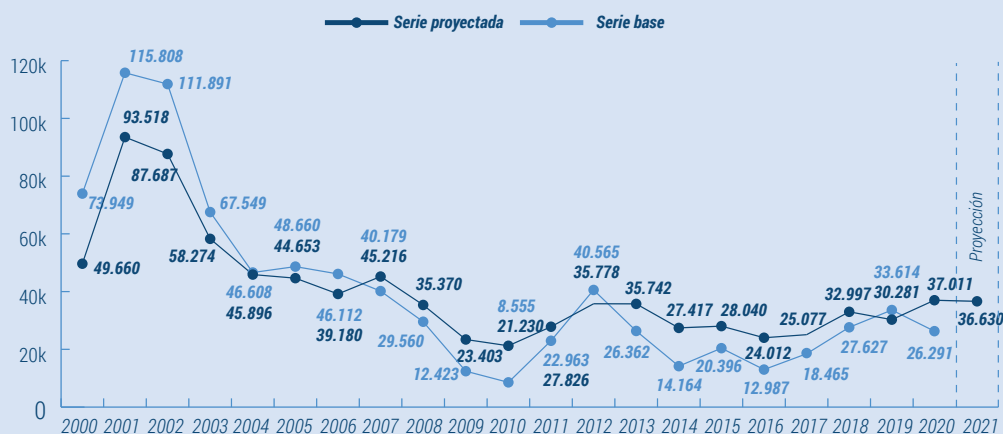
For more information, visit:

www.inform-index.org

Para el 2021, según el análisis e información de socios y contrapartes sobre las dinámicas del contexto en Colombia, se prevé que persistan los choques e impactos en los grupos vulnerables más afectados, algunos con más severidad y magnitud que otros dependiendo de cada región, y de acuerdo con las medidas de mitigación tomadas ante riesgos ya planteados. La confluencia de las acciones de violencia de los diferentes grupos armados actuando de manera conjunta o unilateral, aunado al impacto socio económico que deja la pandemia del COVID-19 en medio de las dinámicas de tránsito y permanencia de refugiados, migrantes y retornados provenientes de Venezuela, seguirán profundizando las condiciones humanitarias en algunas zonas del país.

En este sentido, se realizaron proyecciones de tres tipos de emergencias recurrentes en el país que requerirán de la atención inmediata tanto de la institucionalidad, como la complementariedad y coordinación desde la arquitectura humanitaria (Equipos Locales de Coordinación, Grupo Interclúster) para cubrir necesidades y vacíos sectoriales. Es así como se tomaron datos históricos de desplazamientos masivos, confinamientos y eventos de desastres naturales, con el fin de tener un estimado de las personas que podrían verse afectadas por estas emergencias. Se destacan, que puede haber coyunturas que incidan en las proyecciones, incluso podrían superarlas.

Desplazamientos masivos proyección 2021



Fuente: Monitor y UARIV

Más información sobre la metodología <https://data.humdata.org/organization/ocha-colombia>



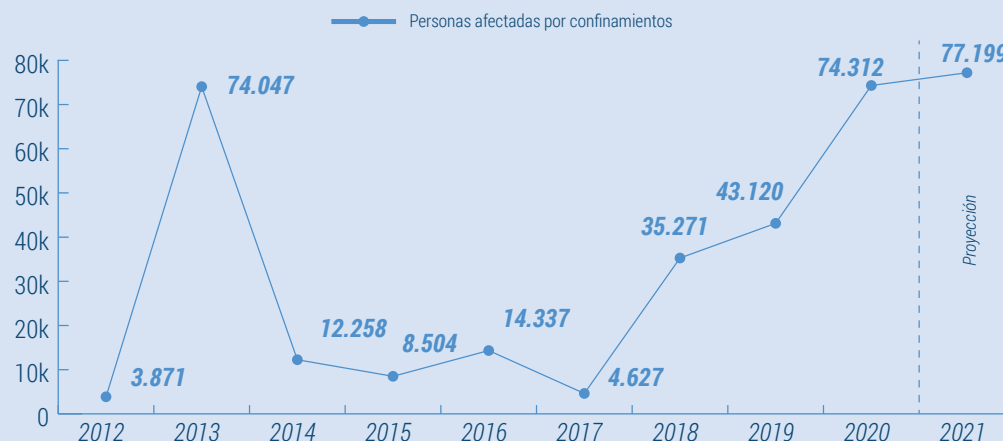
36.631

Personas desplazadas en eventos masivos - cifra proyectada 2021

150.000⁷⁸

Personas desplazadas en promedio cada año desde la firma del Acuerdo Final.

Confinamientos proyección 2021



77.199

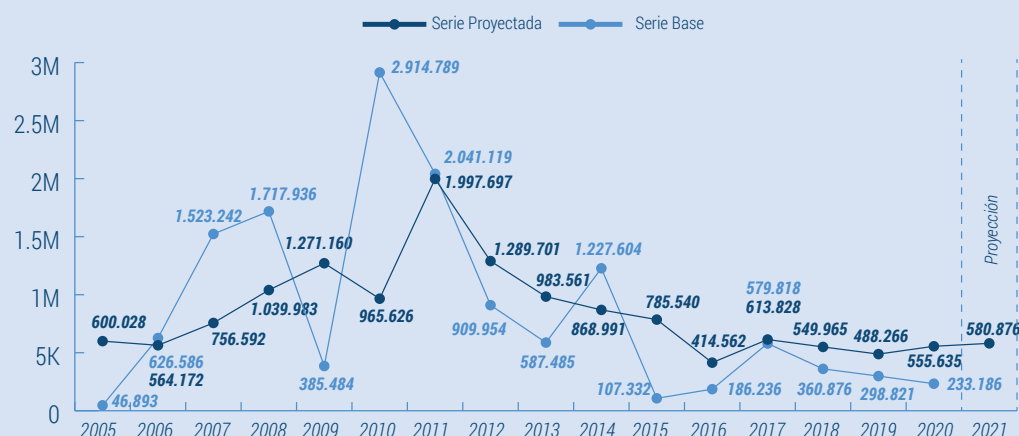
Personas confinadas - cifra proyectada 2021

Fuente: Monitor y UARIV

Más información sobre la metodología:

<https://data.humdata.org/organization/ocha-colombia>

Desastres naturales proyección 2021



Fuente: UNGRD

Más información sobre la metodología [aquí](#)

580.576

Personas afectadas
por desastres
naturales

Riesgos identificados 2021

Preocupa la continuidad e intensificación de la **violencia armada** para el 2021:

- ▶ Seguirán los enfrentamientos entre los GAO y GAD por el control territorial y social, y combates de estos con las Fuerzas Armadas. **Aumento en los niveles de inseguridad para la población civil que habita en zonas con presencia de cultivos de uso ilícito** y economías ilegales. Persistencia de riesgos en protección.
- ▶ **Continuidad de las emergencias asociadas a desplazamientos forzados y confinamiento**, por enfrentamientos armados. Atención especial para los, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y comunidades étnicas.
- ▶ Con la persistencia de la pobreza rural, la desigualdad, las disputas por la tierra y la presencia generalizada de cultivos ilícitos, la violencia armada no dejará de persistir en el país. **Por consiguiente, se prevé que los riesgos de protección siguen siendo graves en las zonas con presencia y bajo influencia o control parcial de los grupos armados**. Los municipios donde se estima sean más visibles las necesidades humanitarias están en la región del Catatumbo (Norte de Santander), San José de Uré (Córdoba), Bojayá, y las cuencas del Alto, Medio y Bajo Baudó (Chocó); comunidades indígenas pertenecientes a resguardos en la zona sur oriental del departamento del Cauca y los municipios de Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y la zona de cordillera (Nariño).
- ▶ La implementación de la **estrategia de erradicación** forzada en zonas con cultivos de uso ilícito seguirá propiciando tensiones y protestas sociales que tendrán repercusiones en la integridad de las familias adscritas a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, y y podría indicar un aumento en las víctimas de MAP/MSE, en departamentos de la zona pacífica y noroccidental (Antioquia, Cauca, Córdoba, Nariño y Putumayo).
- ▶ **Posible afectación en la salud e incremento de la inseguridad alimentaria para mujeres embarazadas en estado de lactancia, niños, niñas y adolescentes, por el impacto de las fumigaciones aéreas**, en zonas donde se lleven a cabo (Noroccidente, suroriente y suroccidente).
- ▶ Durante el 2021 se llevarán a cabo elecciones locales, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), y se teme que los **GAO intervengan en las elecciones para aumentar e control social a través de códigos de conductas en poblaciones** bajo influencia de estos grupos.

En el marco de la **pandemia por COVID-19**, hasta el momento no se avecina un escenario post-COVID-19 optimista.

- **Hasta que se pueda implementar y distribuir la vacuna contra el COVID-19, se espera la segunda ola de contagio en municipios donde no se ha alcanzado el pico de contagio en 2020** y/o con capacidades de procesamiento de pruebas más bajas que el promedio nacional. El impacto será sobre la población adulto mayor y/o con enfermedades preexistentes en zonas rurales con calidad de atención en salud de nivel 1 o inclusive nula.
- En el marco de las emergencias masivas, los vacíos en la respuesta y carencias de alojamientos temporales óptimos para la prevención, **propiciará brotes de COVID-19 principalmente comunidades de acogida** (donde también llega población refugiada, migrante y retornada proveniente de Venezuela, así como afectados por desastres de origen natural).
- La falta de información y elementos para prevenir el contagio de la enfermedad, la ausencia de servicios de agua segura especialmente en zonas con difícil acceso y traslado de pacientes, **harán más vulnerable a la población en general para aumentar la mortalidad por el COVID-19.**
- Mientras se logra una recuperación ante el aumento del desempleo y la consecuente disminución de ingresos de las familias más vulnerables, dependiendo de la capacidad de afrontamiento de estas, **se agudizaría aún más la inseguridad alimentaria en el país, en medio de un aumento de los índices de violencia intrafamiliar, violencia contra niños y niñas, VBG, los índices de criminalidad** y la probabilidad de que más niños, niñas y adolescentes sean reclutadas de manera forzada.

Los **desastres de origen natural y/o antrópicos**, plantean en el 2021 un escenario complejo.

- Con el desarrollo de las emergencias durante el fenómeno de la niña donde se estima vaya hasta

mayo y la temporada de sequía en otros territorios, **se perderán cultivos y será otro factor que incida en la inseguridad alimentaria, porque verán comprometido los medios de vida** y subsistencia de comunidades rurales con necesidades ya severas.

- En La Guajira y la región Amazónica se espera un impacto por los **fenómenos de deforestación** para utilizar más territorio para la siembra de cultivos de uso ilícito, generando una afectación en términos de protección a las dinámicas de las comunidades aledañas, incrementando los riesgos asociados a la presencia, influencia y/o control de GAO y poniendo en riesgo también la seguridad alimentaria de comunidades ubicadas en sitios remotos y en áreas no municipalizadas.
- En cuanto a los desastres de origen antrópico como la **deforestación y minería ilegal, también se afecta la vocación agrícola de muchas comunidades**, pues se genera despoblamiento e inseguridad alimentaria, especialmente para grupos rurales, campesinos, indígenas y afrocolombianos.
- Un **factor de riesgo que preocupa es la reducción del financiamiento humanitario y el desborde de la capacidad operativa y presupuestal de administraciones locales** en donde se presentan emergencias humanitarias constantes; es el caso de Roberto Payán en Nariño y en la zona del Baudó en Chocó, esto limitará las capacidades de respuesta a la población afectada por emergencias humanitarias.

Según el **análisis de la situación y necesidades de refugiados y migrantes venezolanos y de retornados colombianos y binacionales**, el contexto sigue marcado por la incertidumbre frente al impacto del COVID-19. Se proyectan las siguientes dinámicas:

- Un mayor control sobre los focos de contagio por COVID-19 y la reapertura económica permitirían el levantamiento gradual de medidas restrictivas en las fronteras, por lo cual **se prevé un crecimiento moderado de los movimientos de población refugiada y migrante** venezolana y colombianos retornados.

- Teniendo en cuenta la continuidad de la crisis en Venezuela, **se prevé un reingreso paulatino⁷⁹ de quienes retornaron a Venezuela y el ingreso de otros refugiados, migrantes y colombianos retornados**, posiblemente con necesidades exacerbadas. Este escenario tendría tres implicaciones claves:
 - * Exposición a riesgos y afectación por incidentes de protección asociados a la presencia de grupos armados en algunas zonas de la frontera⁸⁰.
 - * Aumento de refugiados y migrantes con vocación de permanencia ubicándose en asentamientos informales, con necesidades intersectoriales y riesgos de protección.
 - * Sobrecarga de la capacidad instalada en regiones fronterizas, a nivel operativo y financiero, limitando el alcance de la respuesta a nivel local y nacional, tanto por parte de instituciones como de socios humanitarios.
- Habría consecuencias en el deterioro del bienestar físico y mental de refugiados y migrantes, con necesidades humanitarias y de protección exacerbadas, así como desafíos para la integración socioeconómica y cohesión social de refugiados y migrantes en sus contextos de acogida, dificultando la mejora de estándares de vida de parte de esta población.
- La falta de documentación válida y el estatus irregular continuarían siendo factores de riesgo de protección para esta población durante el cruce fronterizo y el tránsito (especialmente debido a riesgos de trata y tráfico, violencia sexual y basada en el género, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otros incidentes), así como en los departamentos de acogida por la imposibilidad de acceder a derechos y servicios básicos.



CÚCUTA/ NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Actividades dentro del marco de respuesta humanitaria de Save the Children en Cúcuta
Crédito de la foto: Save the Children

⁷⁹ El carácter paulatino -no masivo- de este reingreso tendría que ver con posibles restricciones de acceso a Colombia en los pasos fronterizos por las posibles medidas de prevención del COVID-19.

⁸⁰ <https://www.hrw.org/es/news/2020/01/22/colombia/venezuela-grupos-armados-controlan-la-vida-de-la-poblacion>



MONTELÍBANO/ CÓRDOBA, COLOMBIA

Evaluación de necesidades

Crédito de la foto: Cruz Roja Colombiana

2.2 Monitoreo de la Situación y Necesidades

Para el monitoreo de la situación humanitaria, se contemplarán seguimiento a los indicadores definidos tanto por los clústeres como los priorizados para el PIN intersectorial, lo que nos permitirá establecer la evolución de la situación. Se cuenta con instrumentos que dan cuenta de la situación y respuesta a las

necesidades, identificando los vacíos que puedan estar quedando y requieran priorizar la asistencia. De otro lado, se contemplan riesgos que pueden incidir en este monitoreo, y posiblemente hacer ajustes de acuerdo con la magnitud.

Parte 3

Análisis Sectorial

NARIÑO / COLOMBIA

Consortio MAPA en comunidad indígena

Crédito de la foto: APS, ACH, PLAN, MDM



3.1 Protección

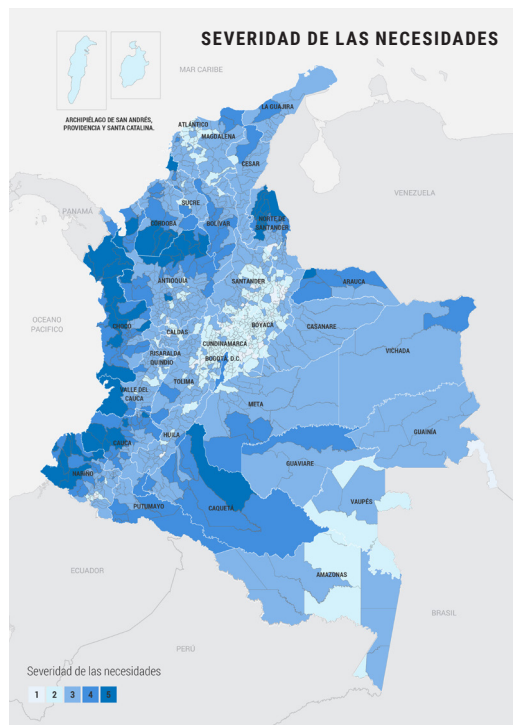
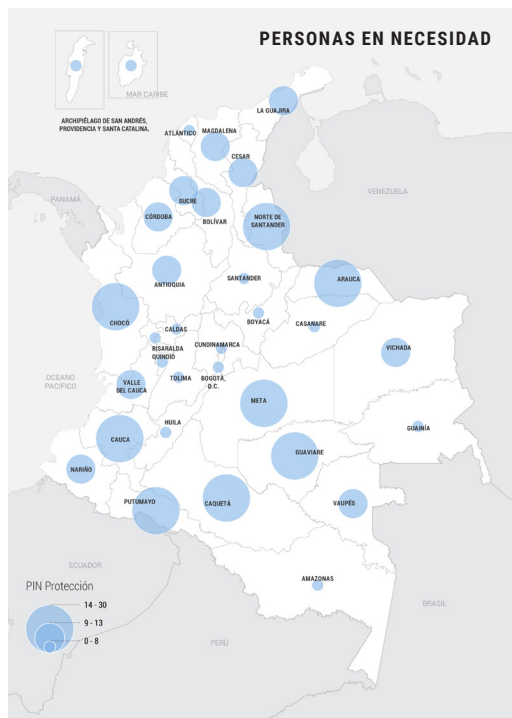
PERSONAS EN NECESIDAD

5.3M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición

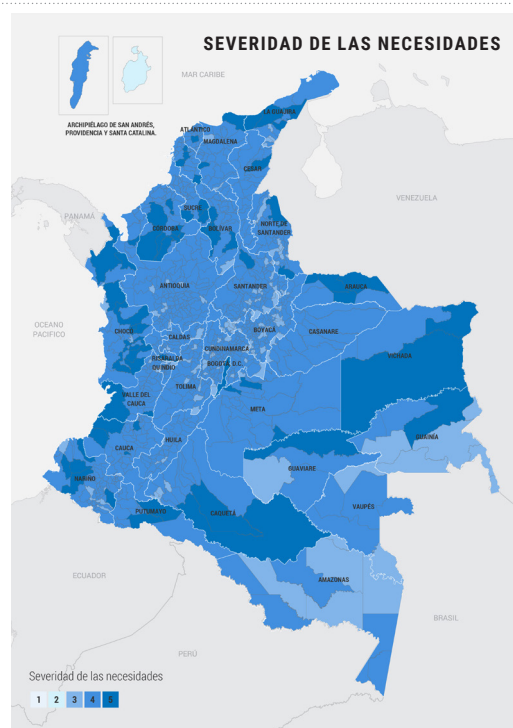
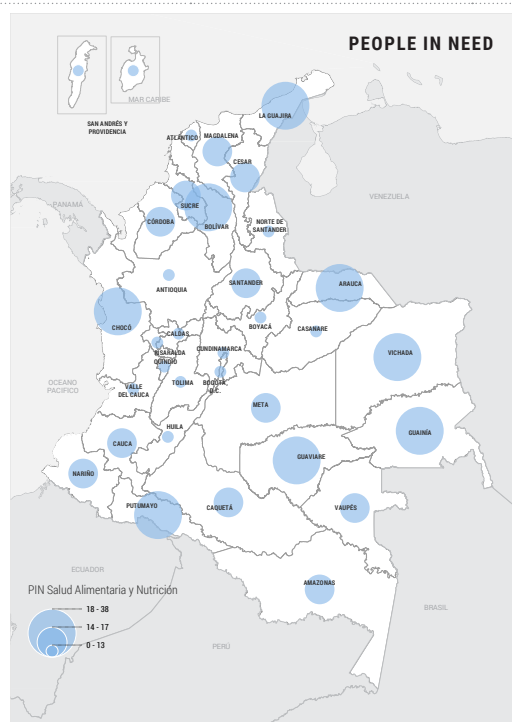
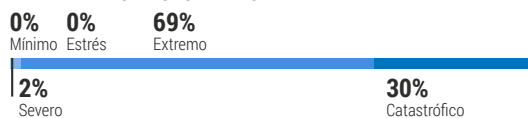
PEOPLE IN NEED

6.4M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.3 Agua Saneamiento e Higiene

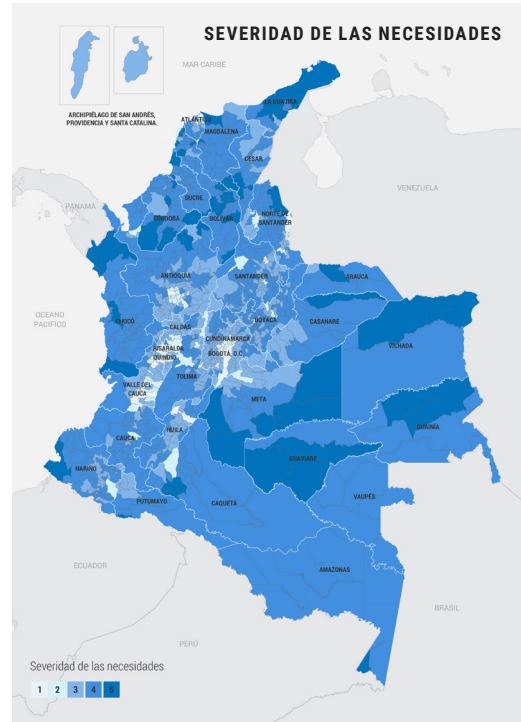
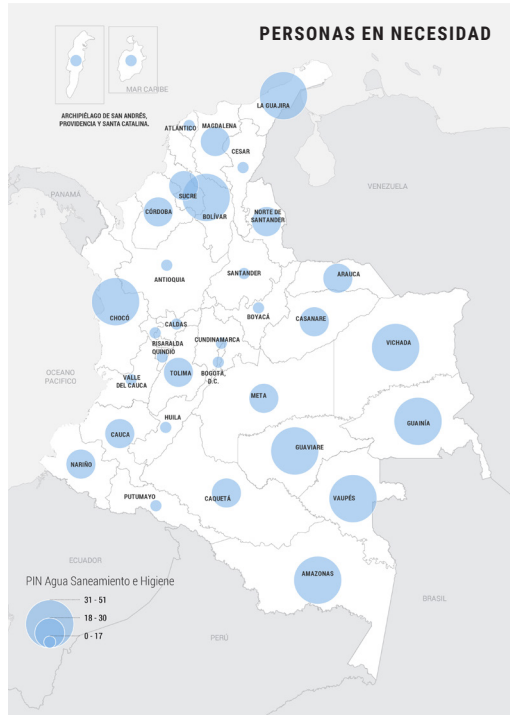
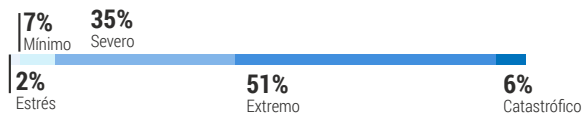
PERSONAS EN NECESIDAD

5.4M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.4 Salud

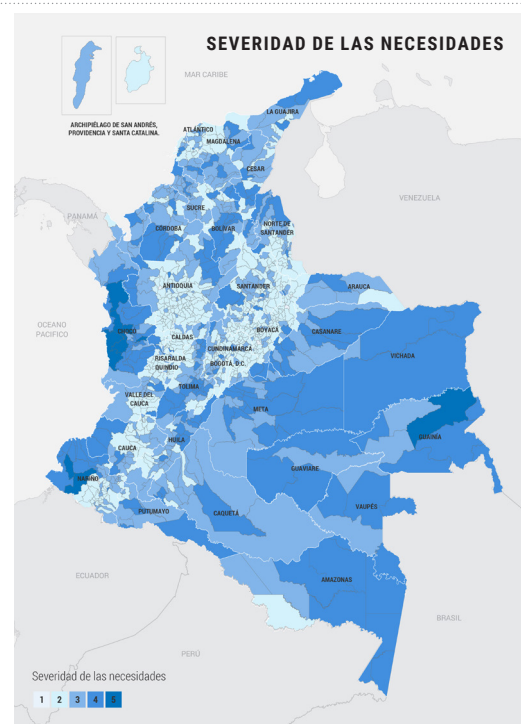
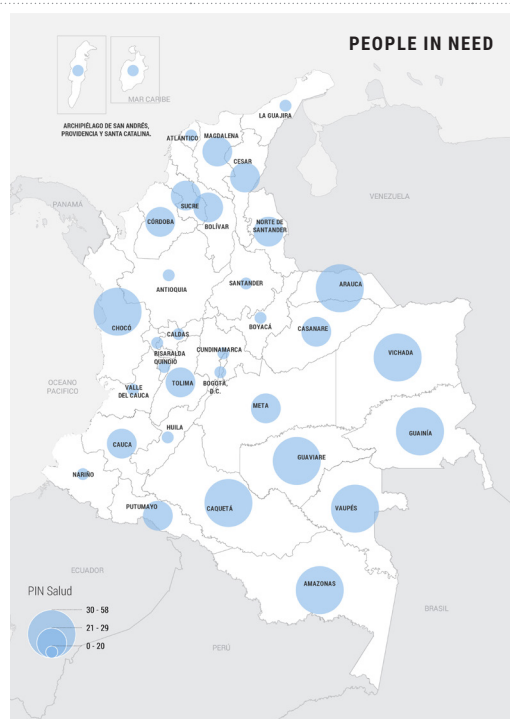
PEOPLE IN NEED

6.1M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.5 Recuperación Temprana

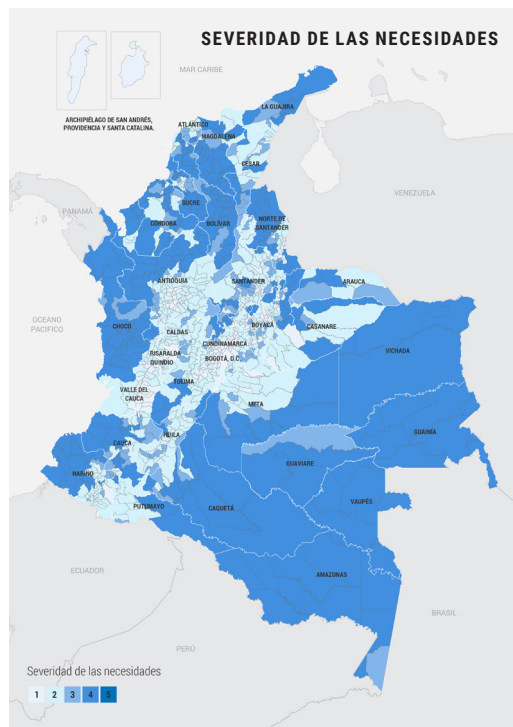
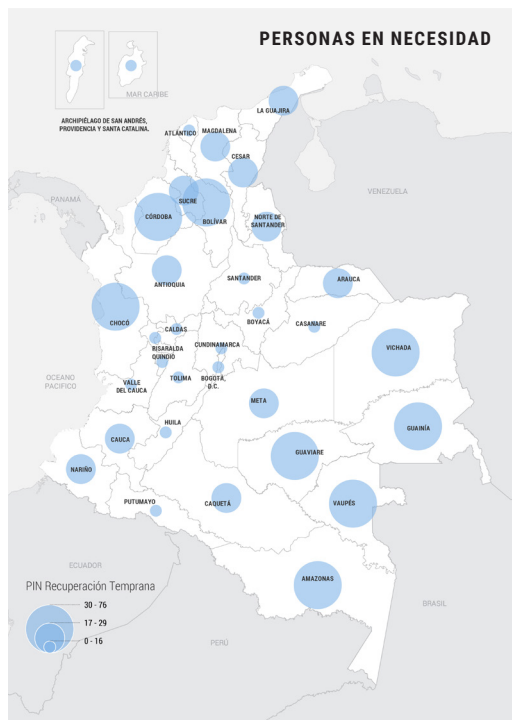
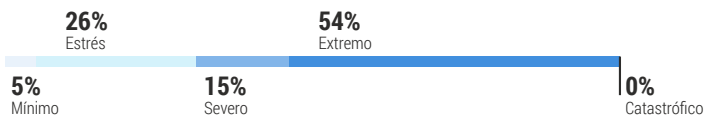
PERSONAS EN NECESIDAD

4.5M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.6 Educación

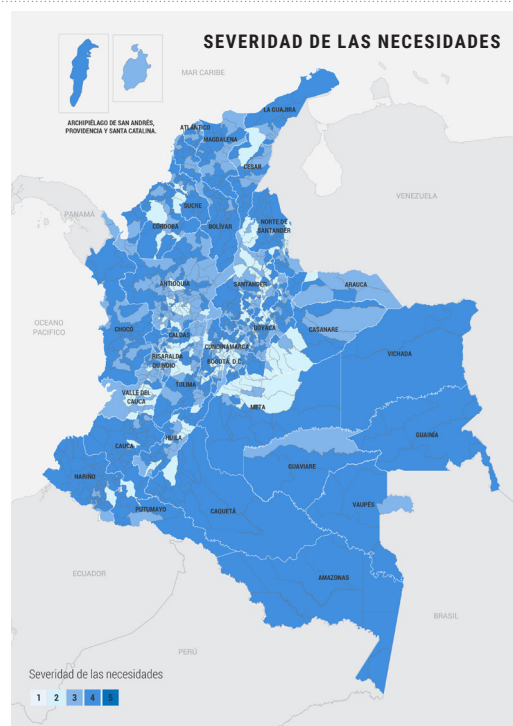
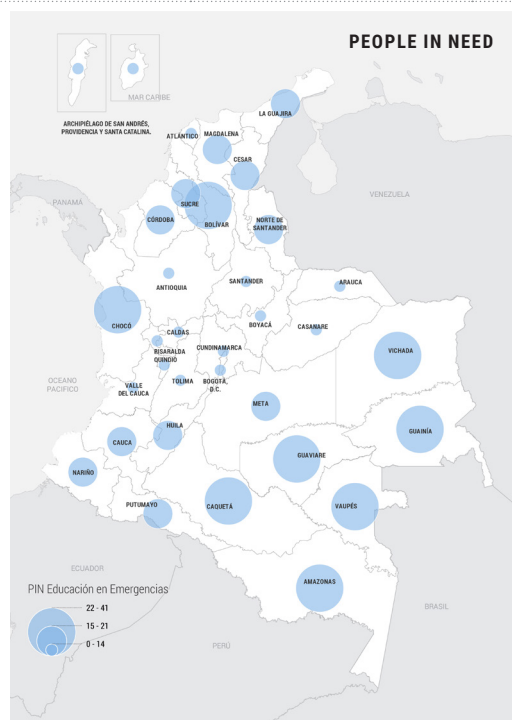
PEOPLE IN NEED

3.6M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.7 Alojamientos Temporales

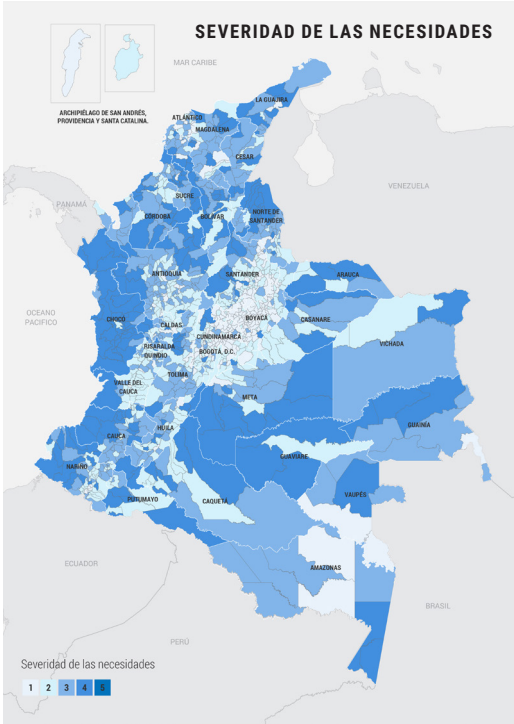
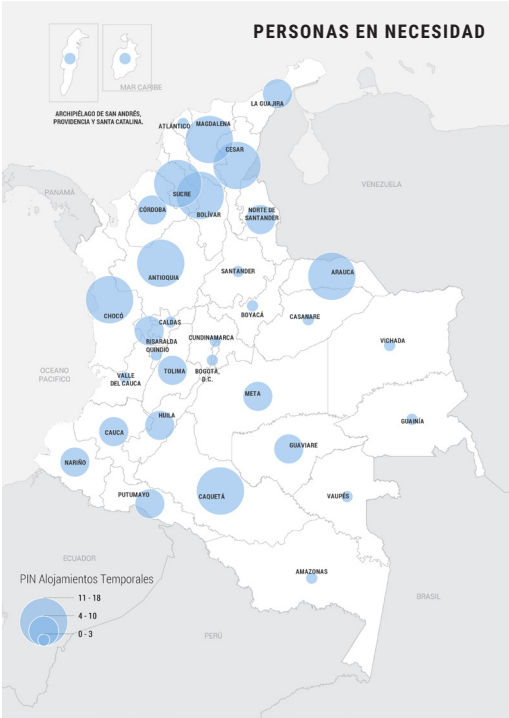
PERSONAS EN NECESIDAD

2.4M

TENDENCIA (2015-2020)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



3.1 Protección



PERSONAS EN NECESIDAD

5.3M

MUJERES

51%

NIÑOS Y NIÑAS

32%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3%

Panorama

La crisis de protección causada por la violencia armada en Colombia sigue siendo una de las más prolongadas en el mundo. Las comunidades están expuestas a riesgos derivados de las hostilidades y acciones de control impuestas por actores armados ilegales, agudizada en regiones con más afectaciones por COVID 19 y/o desastres, profundizando necesidades de protección y asistencia humanitaria de las personas más vulnerables. Al menos, 5,3 millones de civiles tienen necesidades de protección.

Persisten zonas en disputa y/o confrontación entre GAO en territorios con limitada presencia estatal en donde se presentan amenazas y asesinatos selectivos (especialmente de líderes, lideresas sociales y excombatientes de FARC-EP), así como recurrentes desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamientos, violencias basadas en género y accidentes e incidentes con MAP/MSE.

El recrudecimiento de la violencia armada ha generado un aumento en los casos de violencia sexual. El temor a la VBG ocasiona que las mujeres y niñas se desplacen en busca de protección. Adicionalmente, el deterioro de las fuentes de ingresos debido al aislamiento preventivo ha exacerbado el sexo por supervivencia, la prostitución forzada y la explotación sexual.

Por otra parte, en los últimos tres años se evidencia un incremento progresivo del uso de artefactos explosivos por parte de actores armados ilegales, lo que ha ocasionado un aumento en el número de víctimas (114 en 2019 y 167 en lo corrido del 2020) siendo estas mayoritariamente civiles. (62% frente 38% militares en 2020)⁸¹. Un importante número de accidentes se ha producido en zonas previamente consideradas seguras, lo que supone nueva contaminación.

Los niños, niñas y adolescentes siguen estando expuestos a graves violaciones, reclutamiento y utilización, abusos, explotación y otras formas de la violencia armada, además de desastres naturales y como consecuencia de la pandemia. Aproximadamente 1.9 millones de niños y niñas tienen necesidades humanitarias de protección en el país.

Análisis de las necesidades humanitarias

El escenario posterior al Acuerdo Final en Colombia ha generado una serie de oportunidades para las ZOMAC entre las extintas FARC-EP y el Estado. No obstante, en el último año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en estas regiones⁸² y se ha identificado la necesidad de brindar asistencia humanitaria de respuesta rápida, de prevención y protección. En especial, se han evidenciado necesidades de protección en comunidades afrodescendientes, indígenas, niños, niñas

⁸¹ Descontamina Colombia. <http://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d220095b8c>

⁸² Reporte del Secretario General de Naciones Unidas. UNMVC. S/2020/603. <https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n2015182.pdf> y Los impactos del covid-19 en la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz http://ideaspaz.org/media/website/FIP_CapitolioTerritorio_Vol5_ImpactoSeguridadCovid_Final.pdf

⁸³ Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace> y 13 gráficos para entender la violencia organizada en el post-Acuerdo de Paz. Fundación Ideaz para la Paz. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1928>

y adolescentes, mujeres, población con discapacidad, y adultos mayores ante los riesgos generados por el reagrupamiento de actores armados ilegales en su interés por controlar las poblaciones y captar rentas ilícitas en territorios de periferia urbana o rural⁸³.

De esta manera, se identifican al menos 751 municipios afectados por la confluencia de necesidades de protección ante la violencia armada, los desastres y las consecuencias de la pandemia. Los departamentos más críticos son Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca, con una especial afectación en el eje Pacífico.

Preocupa la recurrencia de desplazamientos masivos y confinamientos en comunidades ubicadas en el eje Pacífico, el Norte y Bajo Cauca Antioqueño, el sur de Córdoba, así como el Catatumbo en Norte de Santander. Dichas emergencias desbordan la capacidad de respuesta de autoridades locales y limitan la sostenibilidad de acciones en materia de prevención o protección colectiva. También persisten situaciones individuales con menor visibilidad y con desafíos importantes para el acceso a registro de las víctimas.

En casos reportados, las hostilidades y acciones de grupos armados organizados tuvieron un impacto inmediato en la vida de las comunidades y sus procesos organizativos (entre ellos Juntas de Acción comunal, Mesas de víctimas, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles y organizaciones LGBTI) fracturando la base social que representan. Así mismo, ha generado daños a la propiedad y afectación de la infraestructura comunitaria.

Las condiciones generadas por el aislamiento han determinado el aumento de casos de violencias de género con especial impacto en mujeres y niñas, esta situación es más preocupante en el caso de las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes, quienes tienen un limitado acceso a información y protección en sus territorios.

Los riesgos inherentes a la contaminación por artefactos explosivos en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en zonas rurales siguen siendo una preocupación central, ya que se impide el acceso a las áreas sociales y culturales, a las fuentes de agua, a las escuelas y centros de salud; da lugar al confinamiento, causa desplazamientos y a menudo también impide el retorno seguro de personas desplazadas. Los niños y niñas siguen siendo víctimas por activación de MAP/MSE y su afectación se incrementó un 54 por ciento respecto al 2019⁸⁴.

Los niños, niñas y adolescentes siguen estando expuestos al reclutamiento y/o la utilización, y otras graves violaciones en lugares donde se requiere fortalecer la respuesta estatal, donde las rutas de protección son poco eficientes, los niveles de pobreza extrema son altos y hay presencia de grupos armados organizados; así como limitadas oportunidades educativas, productivas o de desarrollo de proyectos de vida. Los niños, niñas y adolescentes que habitan en comunidades étnicas están especialmente en riesgo y necesitan de una prioritaria acción de protección.

La profundización de necesidades de protección generadas por COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a personas que ya eran vulnerables por las condiciones generadas por el desplazamiento forzado, su edad, género, condición de discapacidad, o pertenencia étnica. Incluso en periferias urbanas de las grandes ciudades las víctimas han visto afectados sus medios de subsistencia en su mayoría dependientes de la economía informal lo que ha aumentado sus niveles de vulnerabilidad.

Se resalta, el impacto de la violencia armada en población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, en especial personas que llegan a zonas en riesgo, sin el conocimiento de las dinámicas de control territorial ejercida por actores armados ilegales.

⁸⁴ Según la base de víctimas de la OACP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz) en 2020 se presentaron 18 víctimas por MAP/MSE que son niños, niñas y adolescentes. <http://ergit.presidencia.gov.co/arcp/pre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d220095b8c>



BAGRE / ANTIOQUIA. COLOMBIA

Entrega de ayudas y registro de víctimas

Crédito de la foto: UARIV

Proyección de las necesidades

En los 167 municipios severamente afectados por violencia armada, los desastres y la pandemia seguirán reportando necesidades de protección cada vez más complejas e interrelacionadas, como resultado de diversas situaciones que irán desde la afectación directa derivada de las hostilidades, el desplazamiento, el confinamiento, y la gestión de emergencias.

La prolongada emergencia de desplazamiento continuará dando lugar a una erosión constante de los mecanismos de afrontamiento y autoprotección de las personas y las comunidades. Se seguirán requiriendo esfuerzos para prevenir y gestionar los riesgos, mitigar el impacto de las vulneraciones de DDHH y promover una respuesta de protección segura e inclusiva, así como priorizar las soluciones duraderas en las zonas a donde han llegado las víctimas; el enfoque de área para la atención integral será clave.

La VBG seguirá estando presente en la vida de las mujeres y las niñas, tanto dentro como fuera de sus hogares, así como comunidades étnicas especialmente afectadas por la violencia armada. Las mujeres, niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, población con discapacidad, adultos mayores, serán las poblaciones más afectadas por la violencia, los desastres y la pandemia. La escala, gravedad y complejidad de la amenaza de los artefactos explosivos seguirá siendo preocupación en materia de protección, lo que agravará la vulnerabilidad de comunidades en zonas rurales, quienes además de estar expuestos a los accidentes, verán restringida su movilidad y acceso a medios de vida. Continuarán los riesgos para la protección de los niños, niñas y adolescentes en los municipios donde persiste el conflicto entre GAO y GDO y las violencias armadas, a través del reclutamiento, uso, utilización, la violencia sexual, la tortura, el homicidio, la mutilación, el secuestro. La vulnerabilidad a nivel familiar y comunitaria, la falta de oportunidades educativas y de proyectos de vida, los canales de denuncia poco eficientes en zonas de limitada presencial estatal seguirán teniendo un impacto negativo en la protección de la niñez.

Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria se realizará a través de la estructura dispuesta por el clúster de Protección: Cuatro Grupos Temáticos de Protección (GTP) ubicados en Norte de Santander, Nariño, Cauca, y Chocó, así como 12 Equipos Locales de Coordinación (ELC) en los territorios mayormente afectados, y dos Equipos Humanitarios Locales donde hay poca presencia de organizaciones; así mismo, los subgrupos de Acción Integral Contra Minas, Violencia basada en Género y Protección de la Niñez. Se pretende realizar misiones al

terreno desde las cuales se puedan aplicar Evaluaciones Rápidas de Protección (ERP), u otros instrumentos de identificación de necesidades humanitarias que le permitan al clúster de Protección acompañar los esfuerzos por fortalecer las redes de protección local. Para efectos de los riesgos e impactos de protección en refugiados y migrantes venezolanos y retornados colombianos y binacionales, se activará la estrategia back-to-back con la estructura del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

El seguimiento se concentrará en las medidas de asistencia y protección de nuevas víctimas de la violencia armada, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes; las condiciones de retorno de desplazados internos, en términos de seguridad, voluntariedad y dignidad. El monitoreo en acciones de prevención,

asistencia y protección ante la contaminación por artefactos explosivos. El acceso a la reparación/solución duradera será clave en el marco de la doble o triple afectación relacionada con los desastres y la pandemia. El monitoreo de las resoluciones 1612 y 1820 seguirán siendo promovidas por el clúster de protección. En cuanto a la VBG, se asegurarán las acciones de prevención y respuesta dirigidas a personas sobrevivientes de VBG y en riesgo, que incluyan estrategias de difusión de información, la gestión de casos y el acceso integral a servicios de salud, atención psicosocial, acceso a la justicia y medidas de protección.

El fortalecimiento de las capacidades institucionales es clave para asegurar los mínimos estándares de calidad de los programas de protección.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Número de personas afectadas por emergencias humanitarias derivadas de la violencia armada	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Sistema de Alertas Tempranas (SAT)
2	Número de personas desplazadas que no han superado su situación de vulnerabilidad generada por la violencia armada	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)



PUERTO ASÍS / PUTUMAYO. COLOMBIA

Jornada de Atención en Salud para población refugiada y migrante
Crédito de la foto: ACNUR

Sub-grupo de Protección Violencia Basada en Género (VGB)

PERSONAS EN NECESIDAD⁸⁵**1.4M**

(expuestas a algún tipo de violencia, psicológica y sexual, con un porcentaje menor para población en riesgo de feminicidio).

En Colombia, así como en otros países, las mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI+ se vieron expuestas a lo que se denominó globalmente como la segunda pandemia: la violencia basada en género. Desde el 25 de marzo de 2020, cuando se declaró el aislamiento preventivo en el territorio nacional, las cifras de VBG han aumentado, con reportes oficiales de incremento del 118% en las llamadas catalogadas como violencia intrafamiliar, a la línea nacional de atención a la violencia contra la mujer, entre el 25 de marzo y el 15 de octubre de 2020. Durante los primeros meses de pandemia el incremento llegó hasta el 142 por ciento.

En los territorios más afectados por la violencia se observa el aumento en los casos de violencia sexual. Por ejemplo, en el Departamento de Chocó, este número ha aumentado 15% entre 2018 y 2019 según los datos de UARIV, aunque no es posible dar cuenta de la magnitud del fenómeno, considerando el alto subregistro.

En varios departamentos como Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander se registran múltiples afectaciones: por violencia armada, pandemia, movimientos migratorios mixtos y desastres naturales, fenómenos

que afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Las desigualdades y la discriminación que enfrentan históricamente mujeres y niñas se incrementan en contextos de emergencia, aumentando los riesgos de violencia intrafamiliar, explotación y violencia sexual, uniones tempranas, trata y tráfico de personas, amenazas cibernéticas y riesgos para defensoras de Derechos Humanos.

Las zonas remotas y rurales presentan mayores desafíos en el acceso a servicios de VBG. Se resalta la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y atención, principalmente las urgencias en salud para violencia física y sexual, PEP kit, a servicios de salud sexual y reproductiva, elementos de higiene menstrual, atención en salud mental, gestión de casos, medidas de protección, acceso a la justicia, información clave sobre rutas en VBG, y servicios presenciales y remotos, así como servicios humanitarios. Igualmente, se resalta la necesidad de servicios adaptados y sensibles a personas LGBTI+, en condición de discapacidad, población indígena y afrodescendiente.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Número de mujeres y niñas afectadas, en riesgo de violencia basada en género (psicológica, física, sexual) y feminicidio en municipios afectados por violencia armada, CONVID-19 y migración	<ol style="list-style-type: none"> 1. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 2. Municipios con registro de "Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado", entre 2019 y 2020, según la UARIV. 3. Municipios con doble o triple afectación (violencia armada, migración, COVID-19). 4. Estimaciones departamentales según la ENDS 2015 Tomo II, de personas expuestas a VBG.

⁸⁵ Cálculo del PIN de VBG – Subgrupo VBG: CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Municipios con registro de "Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado", entre 2019 y 2020, según la UARIV (182 municipios de 1122). 20 municipios con identificación de amenazas y riesgos en VBG por doble o triple afectación violencia armada, migración, COVID-19).

Estimaciones departamentales según la ENDS 2015 Tomo II, de personas expuestas a violencia basada en género (13 a 49 años), de donde se tomaron las siguientes variables a nivel departamental y se extrapolaron a nivel municipal: a) alguna violencia psicológica, b) alguna violencia física, c) alguna violencia sexual, d) alguna violencia.

Sub-grupo de Protección a la Niñez

PERSONAS EN NECESIDAD

1.9M

NIÑOS

51%

NIÑAS

48%

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CON DISCAPACIDAD

9%

Para fortalecer la prevención y respuesta al abuso, negligencia, explotación y violencia contra niños, niñas y adolescentes en emergencias humanitarias ligadas a la violencia armada y desastres naturales y en el marco de la pandemia por COVID-19, se activó en mayo del 2020 el Subgrupo de Protección de la Niñez.

Para el 2020 se proyectó que el 39 por ciento de las personas con necesidades humanitarias de protección iban a ser niños, niñas y adolescentes. A raíz de la creación del Subgrupo de Protección de la Niñez, y de un análisis específico de las necesidades de protección de la niñez, se calculó que 1.900.000 niños, niñas y adolescentes tendrán necesidades de protección en el 2021. (Children in Need CIN/PIN)



PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA / COLOMBIA

Taller de cartografía para niños y adultos

Crédito de la foto: WFP, María Camila Posada

Análisis de las necesidades humanitarias

Los niños, niñas y adolescentes en Colombia siguen expuestos a riesgos relacionados con la violencia armada, como el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual por parte de grupos armados, tortura, homicidio, secuestro y territorios minados. El Registro Único de Víctimas cuenta con 85.149 registros de afectaciones a niños y niñas por hechos victimizantes en 2019, donde los hechos más reportados fueron amenazas, confinamiento y desplazamiento forzado, que expone a los/as niños a otros riesgos de protección como delitos contra su libertad e integridad sexual.

De acuerdo con el Informe del Secretario General, en el 2019 se verificaron 176 violaciones graves contra 168 niños, niñas y adolescentes en Colombia⁸⁶. En el 2020, la Defensoría del Pueblo registró 36 situaciones de riesgo entre marzo y junio, 69 por ciento de ellas en zonas rurales⁸⁷. Entre marzo y septiembre 2020, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de 83 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en medio de la pandemia⁸⁸. Como dato importante, en 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió 37 investigaciones a excombatientes por el reclutamiento forzado de niños⁸⁹. El reclutamiento sigue siendo motivo de preocupación, a la vez que un desafío porque los datos disponibles no dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Son particularmente vulnerables los niños, niñas y adolescentes expuestos a dinámicas de violencia armada y economías ilícitas, con baja presencia estatal,

⁸⁶ Los niños y el conflicto armado en Colombia, Informe del Secretario General de Naciones Unidas (S/2019/1017) <https://reliefweb.int/report/colombia/los-ni-os-y-el-conflicto-armado-en-colombia-informe-del-secretario-general-s20191017>

⁸⁷ Defensoría del Pueblo. (2020, julio). Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Retos de la política pública de prevención. (pg. 50-51) <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/9489/Din%C3%A1mica-del-reclutamiento-forzado-de-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-Colombia-reclutamiento-forzado-informe-Defensor%C3%ADa-ni%C3%B1os-y-adolescentes-Colombia.htm>

⁸⁸ Defensoría alerta por reclutamiento forzado de menores durante pandemia. <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9743/Defensor%C3%ADa-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-menores-durantedepandemia-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa.htm>

⁸⁹ El problema del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes: Desafíos y respuestas urgentes. Quinto informe de Fundación Ideas para la Paz (FIP), página 6. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1907>.

donde los canales de denuncia son poco eficientes, en contextos de vulnerabilidad a nivel familiar y comunitario y sin oportunidades educativas y proyectos de vida, así como los niños y niñas de comunidades étnicas. Por la misma causa se generan necesidades de protección a la niñez y adolescencia refugiada y migrante.

A 31 de octubre de 2020, los niños, niñas y adolescentes víctimas por activación de MAP/MSE han aumentado en un 35 por ciento respecto al 2019 por la proliferación, expansión territorial y enfrentamientos entre grupos armados organizados que las utilizan indiscriminadamente; así como la presencia de artefactos explosivos cerca de escuelas y bienes civiles, y en zonas rurales dispersas. De enero a agosto, el 20 por ciento del total de víctimas civiles fueron niños, afectando principalmente a niños y niñas de comunidades étnicas.

El confinamiento asociado al COVID-19 puso un peso adicional sobre la condición socioeconómica de las familias y las comunidades, y algunos hogares utilizaron mecanismos de afrontamiento negativos como el trabajo infantil. El cierre de escuelas, que representa para muchos el principal entorno protector, aumentó los riesgos y vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencias, incluido el reclutamiento y utilización y la violencia sexual por parte de grupos armados. Asimismo, el confinamiento dificultó la respuesta en protección, reacción y seguimiento por parte de la institucionalidad. Entre marzo y junio del 2020, el ICBF recibió 30.083 solicitudes asociadas a casos de violencias, un aumento del 42 por ciento respecto a las recibidas en el mismo

periodo en 2019. Cuatro de cada cinco solicitudes estaban asociadas con violencia física, psicológica o negligencia, la categoría que más aumentó fue la situación de calle⁹⁰, que expone a los niños, niñas y adolescentes a riesgos de seguridad, maltrato, explotación y mendicidad entre otros. Durante estas fechas, los reportes a través de Medicina Legal bajaron, registrándose 3.386 niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, 3.494 de violencia interpersonal y 10.088 víctimas de presuntos abusos sexuales⁹¹. La reducción puede explicarse por la suspensión de la atención presencial de las instituciones de las que provienen gran parte de las denuncias como colegios o centros de desarrollo infantil, y por la limitación de movilidad, que puso límites a las comunidades para reportar, sobre todo en zonas con presencia de grupos armados.

Proyección de las necesidades

El 2021 supone una agudización del impacto humanitario en el país, acompañado de un recrudecimiento de las acciones armadas. Por lo que prevalecerán los riesgos de protección para los niños y niñas, y posiblemente causarán un ulterior deterioro de los entornos protectores de la niñez. En consecuencia, es necesario fortalecer los entornos protectores a nivel familiar, escolar y comunitario para disminuir los riesgos de violencia, abuso, explotación y negligencia. Tenemos que seguir trabajando con las instituciones para que tengan una oferta de servicios más pertinente, de calidad, para que lleguen a las zonas donde requieren acompañamiento y servicios sociales, para que se fortalezcan las líneas de denuncia y rutas de respuesta efectiva para la activación y la gestión de casos.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias humanitarias derivadas de la violencia armada	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
2	Niños, niñas y adolescentes afectados por violencias físicas y sexuales.	Medicina Legal
3	Niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser afectados por la violencia armada	Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA)

⁹⁰ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Centro de Contacto línea 141. Décimo cuarto boletín sobre la atención de líneas de atención telefónica a mujeres en el contexto de medidas de aislamiento preventivo por CovSar2 en Colombia. <http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/linea-155-boletin-14.pdf>

⁹¹ Boletín Estadístico Mensual de Medicina Legal. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/494197/Boletin+agosto+2020.pdf>

Sub-grupo de Acción Contra Minas

PERSONAS EN NECESIDAD

268k

MUJERES

49%

NIÑOS Y NIÑAS

19%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3%

En los últimos tres años, se ha evidenciado una tendencia ascendente del número de víctimas por artefactos explosivos (MAP, MSE, AEI). De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al menos 128 víctimas de MAP y MSE han sido registradas a septiembre de 2020; superando ya el número total registrado en 2019. Asimismo, preocupa que la proporción de víctimas civiles sigue siendo más alta que las militares (62% frente 38% en 2020) y que la mayoría de los accidentes se producen en zonas hasta ahora consideradas seguras por las comunidades, lo que supone una contaminación reciente. Desde el 2018, el número de víctimas por el uso de otros artefactos explosivos de naturaleza improvisada también ha aumentado en un 7 por ciento.

Asimismo, es preocupante el incremento de incidentes y accidentes en departamentos en los que no se habían registrado previamente. Aunque Nariño, Norte de Santander y Antioquia siguen siendo los departamentos con mayor afectación en 2020; se observa con preocupación, la situación en Putumayo donde se ha registrado un aumento del 225 por ciento en el número de víctimas entre 2019 y 2020, luego de no haber reportado accidentes en 2017 y 2018.

Se estima que esta tendencia al alza se debe al uso de artefactos explosivos por parte de grupos armados organizados tanto para atacar a las Fuerzas Militares como para defender los territorios y rutas donde tienen presencia y desarrollan sus actividades ilícitas. La implementación de políticas de erradicación forzada de

cultivos ilícitos también es un factor que ha generado nueva contaminación. La participación de civiles en los procesos de erradicación sin garantías de protección ha puesto también sus vidas en riesgo, por ejemplo, en Tumaco, Nariño, donde se presentaron 31 víctimas civiles que se encontraban realizando actividades de erradicación en 2019.

Si bien el número de víctimas humanas registradas en Colombia es un indicador del problema, el grado de la afectación no puede medirse sólo con esto. Las tendencias en los últimos años, demuestran que los riesgos inherentes de la contaminación por artefactos explosivos para las comunidades indígenas y afrodescendientes (27% de las víctimas de 2020 pertenecen a estas comunidades), y campesinas en las zonas rurales, impide el acceso a grandes extensiones de tierra, en particular a las áreas sociales y culturales, a las fuentes de agua, a las escuelas y centros de salud; da lugar al confinamiento, causa desplazamientos y a menudo también impide el retorno seguro de víctimas de desplazamiento forzado.

Se estima que debido a la reconfiguración de la violencia armada durante el COVID-19, el número de víctimas y afectaciones a las comunidades va a seguir en aumento y al menos 268.319 personas en 156 municipios, van a necesitar asistencia humanitaria inmediata y de prevención y protección., incluyendo educación en el riesgo de minas y asistencia a víctimas.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Afectación por presencia de artefactos explosivos	Oficina del Alto Comisionado para la Paz

3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición



PERSONAS EN NECESIDAD

6.4M

MUJERES

51%

NIÑOS Y NIÑAS

29%

Panorama

El sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición observó un aumento significativo en el número de personas con necesidades en comparación con al año anterior. En efecto, para el año 2020, se estimó que al menos 2,4 millones de personas en Colombia, tendrían necesidades en seguridad alimentaria y nutrición. Para 2021, se estima que esta cifra alcance los 6,2 millones de personas. Este incremento puede explicarse en gran medida por el impacto socioeconómico de la pandemia Covid-19 sobre la pérdida de ingresos en amplios sectores de la sociedad colombiana, en particular en zonas urbanas y periurbanas con alta densidad poblacional, territorios urbanos y rurales con importante presencia de personas afectadas por emergencias preexistentes al Covid-19 y sectores económicos informales.

En este contexto, es importante señalar que existe un riesgo significativo frente al deterioro del estado nutricional en los menores de 5 años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Así mismo, el impacto del Covid-19 no sólo se da en términos de salud, sino también de afectación de los sistemas alimentarios y medios de subsistencia esenciales que a su vez profundizan los riesgos alimentarios para los más vulnerables. La ocurrencia de emergencias asociadas al clima también ha impactado la seguridad alimentaria y nutricional de personas en alta vulnerabilidad y para el 2021 se prevé un incremento frente a las afectaciones reportadas en el año 2020. Finalmente, el riesgo de inseguridad alimentaria persiste en zonas rurales como consecuencia del desplazamiento forzado, confinamiento y presencia de minas antipersonal en varias regiones del país aún afectadas por

dinámicas de violencia armada, así como por causas estructurales asociadas a los altos índices de pobreza multidimensional que se ven agudizados cada vez que sucede una emergencia.

Análisis de las necesidades humanitarias

Para el año 2021, se estima que al menos 6,2 millones de personas estarán con necesidades de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 1.122 municipios. Por una parte, el accionar de grupos armados organizados en zonas rurales de varios departamentos del país trae como consecuencia riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional para personas víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y riesgos por presencia de MAP/MSE, así como para las comunidades receptoras.

En este contexto, las familias rurales se ven limitadas para desarrollar las actividades tradicionales de obtención de alimentos destinados al autoconsumo y venta (recolección, pesca, caza, cultivos de pancoger), deben abandonar temporal o definitivamente sus territorios y sus activos productivos (tierra, semillas, insumos agropecuarios, unidades productivas), ven disminuida la disponibilidad y acceso a los alimentos, pierden su autonomía alimentaria y se pone en alto riesgo su estado nutricional y de salud, en particular de los grupos más vulnerables (menores de 5 años, madres gestantes y lactantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad). Esta situación es particularmente notoria en la región del Pacífico colombiano (departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Chocó) y la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Por otra parte, el impacto socioeconómico de la pandemia Covid-19 ha generado una pérdida de ingresos en amplios sectores de la sociedad colombiana, en particular en zonas urbanas y periurbanas con alta densidad poblacional y sectores económicos informales. En el marco del HNO, se ha estimado un PIN crítico de 3,3 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria severa en 16 departamentos. Con la persistencia y evolución de la pandemia para el 2021, es probable que la situación de inseguridad alimentaria y nutricional continúe su deterioro. En este contexto, es importante señalar que existe un riesgo significativo frente al deterioro del estado nutricional en menores de 5 años, como ya lo señalan algunas alertas del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, es de notar que el impacto de la pandemia del Covid-19 no sólo se da en términos sanitarios, también afecta los sistemas alimentarios, los medios de subsistencia esenciales y profundiza los riesgos alimentarios y nutricionales para los más vulnerables. A abril de 2020 el 87 por ciento de los pequeños productores agropecuarios encuestados en 20 departamentos de Colombia enfrentaban múltiples impactos que afectaron su rol en la producción, uno de los principales factores fue el aumento de los precios de los agro insumos, con casos críticos en Córdoba, Boyacá y Tolima. Le siguen en importancia los problemas de transporte para sacar los productos a la venta, especialmente en Antioquia y Putumayo.

Finalmente, es necesario resaltar que fenómenos de desastres por eventos naturales tales como sequías e inundaciones, aunque con afectaciones humanitarias relativamente menores en los últimos tres años, siguen teniendo un impacto significativo para poblaciones del Chocó, Nariño, La Guajira, Arauca y Putumayo, por ejemplo. Para el último trimestre del año 2020 e inicios del 2021 existe alta probabilidad de lluvias excesivas en gran parte del territorio colombiano, acompañadas de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y anegaciones, lo cual afectará total o parcialmente los activos esenciales y los medios de vida de las familias más vulnerables y agudizará las brechas para acceder a servicios básicos, en especial los alimentos. En las comunidades rurales las pérdidas y daños en cultivos y animales son una de las principales afectaciones.

En este sentido, los principales grupos vulnerables por afectaciones humanitarias vinculadas a la violencia armada, COVID-19 y desastres naturales son: hogares con jefatura femenina, grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos), hogares con pérdida de empleo o con actividad en el sector informal, hogares en áreas rurales y con múltiple afectación. Es importante resaltar que los grupos étnicos (comunidades indígenas y afrocolombianas), han sido particularmente afectados por estos factores. Así, los riesgos a la seguridad alimentaria y nutricional se identifican en zonas rurales, urbanas y periurbanas

Para información, los indicadores utilizados para el cálculo del PIN sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición son: Población afectada por desastres de eventos naturales; total de nacidos vivos con bajo peso; Inseguridad Alimentaria; Desnutrición aguda en menores de 5 años.

Proyección de las necesidades

Como se ha proyectado en varias instancias, el impacto de la COVID-19 en el 2021 seguirá deteriorando la situación de inseguridad alimentaria y nutricional, en particular, hogares vulnerables que agotan sus mecanismos de supervivencia y podrían pasar de una inseguridad alimentaria moderada a severa y el deterioro en la condición nutricional en niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Se espera que grupos armados organizados continúen su accionar en las zonas rurales donde actualmente ejercen su influencia, por lo cual los riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional por desplazamiento, confinamiento y el control de los grupos armados en los territorios continuarán; además se espera afectación de medios de vida asociada a aspersiones con glifosato para la erradicación de coca. Se proyecta una afectación especial para comunidades rurales aisladas, pueblos étnicos (indígenas/ afrocolombianos), mujeres, niños, niñas y adolescentes; posible incremento de casos de desnutrición aguda y otras formas de malnutrición en menores de 5 años, madres gestantes y lactantes; además de interrupción de los sistemas productivos y alimentarios. Las afectaciones sectoriales vinculadas a la violencia armada, COVID-19 y desastres naturales, se suman a



ARAUCA. COLOMBIA
Proyectos productivos en la región
Crédito de la foto: WFP

las afectaciones y necesidades propias asociadas al movimiento de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y la sobrecarga para los mecanismos de supervivencia de las comunidades de acogida.

Por lo anterior y dado el contexto volátil, para el Clúster SAN es importante focalizar acciones encaminadas al levantamiento de información que permitan conocer los cambios, la priorización, y toma de decisiones en la asistencia alimentaria de emergencia, la prevención y tratamiento de malnutrición, y acciones de agricultura en emergencia como la recuperación rápida y protección de medios de vida esenciales.

Monitoreo

El monitoreo del clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición se realizará semestralmente, con consulta a fuentes externas y propias y a la par del monitoreo de respuesta con socios (proceso que será acumulativo al final del año). Así mismo, se hará seguimiento a los indicadores y bases de datos de fuentes oficiales (como

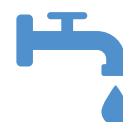
UARIV, UNGRD y otras entidades gubernamentales), con el ánimo de contrastar y robustecer la obtención de información y facilitar el análisis de necesidades. Cabe señalar que no existen aún datos oficiales en términos de impacto en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) por COVID-19. El levantamiento de información sobre necesidades SAN por parte de la institucionalidad y de los socios del Clúster será muy útil para el monitoreo de las necesidades y la adaptación de la respuesta en este contexto cambiante.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Indicador: Población afectada por desastres naturales	UNGRD
2	Nacidos con bajo peso	DANE
3	Indicador Desnutrición <5 años	DANE

3.3

Agua Saneamiento e Higiene



PERSONAS EN NECESIDAD

5.4M

MUJERES

29%

NIÑOS Y NIÑAS

40%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7%

ADULTOS MAYORES

11%

PERSONAS DE GRUPOS ÉTNICOS

33%

PERSONAS QUE HABITAN LA RURALIDAD

76%

La emergencia sanitaria por el COVID 19 ha aumentado las necesidades en agua, saneamiento e higiene (WASH) en las zonas rurales, urbanas y periurbanas incluso en aquellas donde no había afectaciones directas por violencia armada y desastres. De esta manera la falta de acceso con calidad de los servicios WASH supone un riesgo para las comunidades toda vez que impide implementar medidas de prevención del contagio de la COVID-19 como el lavado de manos con agua y jabón, la limpieza y desinfección.

Algunas comunidades, familias, centros de salud, instituciones educativas no cuentan o son limitados los a puntos de lavado de manos con agua y jabón. Asimismo, estas comunidades presentan dificultades para acceder a insumos básicos como el jabón, el alcohol, el cloro y tapabocas.

Por su parte, las dinámicas de la violencia armada siguen demostrando un aumento de acciones que afectan a comunidades, generando desplazamientos forzados y confinamientos en varios territorios del país. Estos actos se producen en comunidades donde normalmente el acceso a los servicios WASH es limitado. En el caso de las comunidades confinadas, adicionalmente se ven afectadas por la imposibilidad de recibir de afuera insumos básicos para las prácticas de higiene y son limitadas en su movilidad, lo cual impide el acceso a fuentes abastecedoras y el ir a conseguir agua se convierte en un riesgo de protección. En cuanto a los desplazamientos además de los limitantes para acceder a los servicios en los territorios

de partida, en los territorios donde llegan no cuentan con el servicio o este es limitado, lo cual a su vez un estrés adicional sobre el acceso a los servicios de la comunidad de acogida

Entre enero y noviembre de 2020 más de 591.000 personas han sido afectadas por desastres, para el 2021 esta cifra puede aumentar ya que Colombia sigue siendo muy vulnerable a los efectos del cambio climático, a los derrames de hidrocarburos, a los efectos de la minería, la deforestación y a otros desastres de carácter antrópicos. De igual manera la capacidad de los prestadores de los servicios WASH para mitigar los efectos de estos eventos y de aquellos puramente naturales, hace que la severidad de los desastres sea muy alta y que se afecte inmediatamente el acceso a los servicios WASH y su directo vínculo con la salud y vida de los afectados.

Por último, este año se contó como fuente de información los resultados del Censo 2018, estos resultados permitieron tener información a con un mayor nivel de detalle en los territorios, y permitieron realizar un análisis más cercano a la realidad de los territorios y de las vulnerabilidades por la falta de acceso a los servicios de Agua, Saneamiento e Higiene, resultados que fueron validados por los ELC/ELH y socios en el terreno.

Análisis de las necesidades humanitarias

El escalamiento de la violencia armada y los riesgos de desastres contienen de por sí privaciones en el acceso a los servicios WASH, estas situaciones se agravan toda vez que en la actualidad ocurren en el contexto de la emergencia sanitaria la cual además de las necesidades que de por sí genera, incrementa el impacto de las demás.

Las causas de las emergencias han impactado especialmente a las comunidades con mayores privaciones como los son las comunidades rurales y el quintil más pobre de la población, quienes de por sí ya carecían de acceso con calidad a los servicios WASH y ahora se encuentran en un riesgo mayor de contraer la COVID-19 y de mortalidad por la misma.

En cuanto a las comunidades rurales, periurbanas y de los municipios más pobres hay un impacto especial ante la imposibilidad de contar con servicios de salud de calidad por la falta de acceso de estos a los servicios WASH y a Equipos de Protección Personal. Esto es

especialmente crítico en cuanto al COVID 19 por la imposibilidad de los centros de salud para responder con calidad a las personas contagiadas por el virus que lo causa.

En cuanto a la violencia armada y los desastres, los niños y niñas al no poder acceder a los servicios WASH y a prácticas adecuadas de higiene, pueden contraer enfermedades prevenibles y ponerse en riesgo de malnutrición. Y en cuanto al COVID 19 este grupo poblacional corre el riesgo de contraer el virus por no contar con servicios WASH de calidad a nivel de hogar, en Instituciones Educativas y Centros de Desarrollo Infantil.

Los niños, niñas y adolescentes de varias comunidades afectadas por violencia y desastres principalmente en la rurales, no cuentan con acceso de calidad al derecho de la educación, entre otros motivos, porque las instituciones educativas y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) no cuentan con servicios de WASH de calidad, por ejemplo carecen de servicios sanitarios



**VILLAVICENCIO /
META, COLOMBIA**

Entrega de kit de tratamiento de agua en Villavicencio
Crédito de la foto: NRC

íntimos, seguros, iluminados y limpios que permitan evitar hechos de VBG y/o violencia sexual, además de realizar prácticas necesarias para la higiene menstrual. Tampoco cuentan con puntos de lavado de manos con agua y jabón o con acceso constante a agua con calidad.

Todas estas causas han puesto a las mujeres en un especial riesgo de contraer enfermedades relacionadas al mal manejo de la higiene menstrual por la imposibilidad de acceder a productos para esta práctica y a los servicios WASH necesarios para hacerla correctamente. Igualmente, el no acceder a estos servicios presentan un riesgo especial de protección y de desescolarización ya que son las mujeres adultas y adolescentes las que normalmente se encargan de gestionar los servicios WASH, por ejemplo, en la Guajira las mujeres gastan hasta siete horas al día gestionando la recolección de agua en pozos ubicados en áreas remotas. Además de lo anteriormente mencionado las mujeres gestantes y lactantes, por falta de un adecuado acceso a los servicios WASH también ponen en riesgo su seguridad nutricional y la de él/la bebé en gestación o recién nacido/nacida.

Hay varios territorios que, por falta de acceso a servicios de saneamiento, pero también por otros determinantes sociales y culturales hay una gran presencia de defecación a campo abierto y contaminación fecal, lo cual impide romper las rutas de contaminación por heces fecales. Situación que genera varias enfermedades prevenibles como las EDAs que pueden ser potencialmente mortales.

Las comunidades étnicas en Colombia son las que representan porcentualmente la mayoría de las víctimas del desplazamiento 65 por ciento y el 44 por ciento de las víctimas de confinamiento, sus comunidades generalmente carecen de acceso a los servicios WASH de calidad, lo cual incrementa sus necesidades y el de las comunidades anfitrionas en el caso de los desplazamientos.

En cuanto a la COVID-19 los adultos mayores y las personas con comorbilidades tienen mayores riesgos de morir luego de contraer el virus. En ese sentido es muy importante garantizar el acceso a servicios WASH y EPP a estos grupos poblacionales con el fin

de garantizar prácticas como el lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies. La pandemia también ha puesto en un riesgo especial a las personas dedicadas a actividades económicas informales ya que debido a situaciones estructurales de falta de recursos económicos dificulta su acceso de calidad y de manera estable a Seguridad alimentaria y nutricional, Salud, Educación, Protección y WASH. Situación que les impide asegurar el aislamiento físico o hacer parte de una actividad económica donde se les ofrezcan protocolos básicos de bioseguridad, incrementando su exposición al riesgo y el posible impacto en salud lo cual agrava sus condiciones ya de por sí vulnerables.

Las personas en situación de calle carecen de elementos básicos de protección e higiene, así como de sitios donde puedan ejercer protocolos básicos de bioseguridad. En lo territorial los impactos de las necesidades del sector WASH son especialmente severas en departamentos con triple afectación como el Chocó, Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Nariño, Antioquia, Cauca, Putumayo, Amazonas, Vichada, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Proyección de las necesidades

La falta de acceso con calidad a los servicios WASH comporta un deterioro de los estándares de vida que pone en riesgo la salud, dignidad y la vida de las personas. El no tener acceso al servicio de agua o que esta no sea de calidad, aumenta el riesgo de generar EDAs, las cuales son potencialmente mortales para los y las menores de dos años.

Así mismo la defecación a campo abierto y la imposibilidad de garantizar barreras a las rutas de contaminación por heces fecales es una de las mayores fuentes de enfermedades gastrointestinales y de otros tipos de parásitos que afectan la salud, incluso el desarrollo físico y cognitivo de niños y niñas. Igualmente, el mal manejo de las aguas residuales o de aguas estancadas ocasiona la proliferación de diferentes vectores y parásitos como son los casos de los mosquitos transmisores de la malaria y el dengue. Así mismo, la falta de servicios, elementos y prácticas de higiene ocasionan enfermedades como EDAs, IRAs, COVID-19 y otras enfermedades prevenibles.

Las necesidades en WASH son especialmente severas en territorios como La Guajira, el Chocó, el Pacífico Nariñense, el Catatumbo (Norte de Santander) el sur de los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba. Es probable que las necesidades para el 2021 se aumenten ya que se ha mantenido una tendencia de aumento en hechos victimizantes como desplazamiento (10 más que a septiembre del 2019) y confinamiento (10 más que a septiembre de 2019), así como, por la presencia en estos y otros territorios de actividades como la minería ilegal, la deforestación y otras industrias extractivas que modifican los ecosistemas y perjudican directamente el acceso a WASH o generan desastres.

Además, la COVID-19, pone a las comunidades en riesgo si no se cuenta con centros de salud con servicios WASH de calidad que puedan prestar servicios para atender los casos para que no se conviertan en un foco de contagio localizado. En el mismo sentido los niños y las niñas requerirán centros de enseñanza seguros donde puedan realizar protocolos básicos de bioseguridad para esto se debe aumentar el acceso con calidad de los servicios WASH en Instituciones Educativas y Centros de Desarrollo Infantil.

El incremento de estas necesidades será especialmente severo para niños, niñas, adolescentes y mujeres, víctimas de VBG, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores y comunidades étnicas.

Monitoreo

El monitoreo de las necesidades se realizará en primera medida identificando los resultados que se vayan lanzando trimestralmente por parte de la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) sobre los indicadores de acceso a agua, acceso a saneamiento básico y acceso a recolección de residuos sólidos. Igualmente se utilizará la Encuesta de Calidad de Vida. Ambas encuestas son lideradas por el DANE. Asimismo, se monitorea los avances en la implementación de la política pública del programa Agua al Campo y de las otras iniciativas de acceso a agua y saneamiento rural mediante el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) y el Sistema de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS). Por último, en cuanto a los sistemas públicos se cuenta con Índice de Riesgo

y Calidad e Agua (IRCA) el cual es monitoreado a nivel nacional por el Instituto nacional de Salud.

De la misma manera, se utilizarán como medio de monitoreo los informes de las evaluaciones de necesidades de los diferentes socios y los informes sobre necesidades de las mesas WASH que existen en los diferentes territorios. Por último, el clúster viene implementando la estrategia de aseguramiento de la calidad de las intervenciones en cuatro puntos:

1. Impacto en la salud pública
2. Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
3. Enfoque de protección
4. Calidad de la infraestructura.

Para este monitoreo de la calidad, se cuenta con un sistema basado en Kobo que permite el seguimiento de las acciones por parte de cada uno de los socios.

Adicionalmente para el monitoreo de las necesidades también se utilizará el monitoreo a la respuesta mediante el sistema 345W, cuyos resultados contrastados con las necesidades permiten construir un análisis de brechas que salgan de contrastar las necesidades con la respuesta. También se utilizará como medio para monitorear necesidades y brechas visitas a terreno por la coordinación del sector a nivel nacional y territorial.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Acceso al servicio de agua	Censo 2018
2	Acceso al servicio de saneamiento	Censo 2018
3	Acceso al servicio de recolección de residuos sólidos	Censo 2018



3.4 Salud

PERSONAS EN NECESIDAD

6.1M

MUJERES

51%

NIÑOS Y NIÑAS

32%



NARIÑO, COLOMBIA

Jornada de tamizaje al adulto mayor

Crédito de la foto: Alianza por la Solidaridad

Panorama

El total de población con necesidades para el año 2020 fue de 2,1M⁹², cifra que aumenta en un 68 por ciento para el 2021, alcanzando seis millones de personas con necesidades, situación en parte relacionada con la pandemia, sus impactos directos e indirectos, así como el incremento de las situaciones de violencia en los territorios. Se tuvo en cuenta en la priorización de los indicadores, los principales impactos en la salud relacionados con la situaciones de violencia y emergencias, principalmente; población con barreras a salud, mortalidad materno infantil, coberturas de vacunación infantil, violencia interpersonal y sexual, y la afectación por eventos relacionados al acceso agua,

las condiciones de saneamiento y el adecuado manejo de vectores, situaciones predominantes en territorios con problemáticas de violencia y economías ilegales.

Con respecto a la clasificación de la severidad de los municipios, para el año 2021 el aumento se presenta para los municipios con estrés y severa pasando del 4 al 41 por ciento y de 21 al 37,6 por ciento respectivamente.

En cuanto a las necesidades priorizadas en salud durante el 2020 se identificaron las relacionadas la salud mental, el apoyo psicosocial, la salud sexual y reproductiva, la salud materno perinatal y la vigilancia en salud pública, prestando particular atención a los eventos: Mortalidad en menores de cinco años, Mortalidad materno perinatal, ITS, VIH/SIDA, Enfermedades transmitidas

⁹² Panorama de Necesidades Humanitarias en Colombia 2020 <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019>

por vectores (ETV), Violencia de género, conducta suicida y Afectaciones a la misión médica.

Se ratifican para el año 2021 las necesidades de 2020, pero se observan aumentos en factores como el desplazamiento, confinamiento, amenazas por grupos armados organizados, los desastres socio naturales y la pandemia. De acuerdo con el análisis realizado, para 2021 las principales necesidades en salud corresponden a salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, violencias de género, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles, no transmisibles.

Análisis de las necesidades humanitarias

En 2021 la situación humanitaria se verá influida por los efectos de la pandemia, debido a una capacidad reducida de los servicios de salud o la falta de continuidad en la atención institucional para garantizar los servicios básicos de la población con principios de acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios esenciales de salud debido y la concentración de los esfuerzos en la emergencia sanitaria. Esto derivará en reducción en atención de salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención materna, salud nutricional, Enfermedades preexistentes No Transmisibles, (cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares), Enfermedades Transmisibles (VIH/ SIDA, TB, etc.) y las enfermedades transmitidas por vectores, principalmente.

Puntualmente, en lo que se refiere a las necesidades en salud sexual y reproductiva, se estima un aumento de los embarazos no planeados, por la interrupción de estos servicios y la escasez de insumos esenciales, aumento de las morbimortalidades relacionadas con la gestación, las ITS/VIH, VBG y salud mental.

Por otra parte, se deberá prestar especial atención al escalamiento de acciones armadas en los territorios y de nuevos grupos armados emergentes, así como el asesinato de líderes sociales y excombatientes, la disputa de territorios para el control del narcotráfico y el uso indiscriminado de MAP/MSE, teniendo en cuenta que estos escenarios que representan un riesgo para la misión médica y aumentan las necesidades de atención en salud de la población, incluida la atención

en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y violencias de género y sexuales por las condiciones extremas psicosociales en poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Revisadas las situaciones humanitarias, y en consulta con los socios del Clúster de Salud, las principales necesidades se concentrarán en Arauca, Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Caquetá, Córdoba, Chocó, La Guajira, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Putumayo y Vichada.

Proyección de las necesidades

- Acceso efectivo a servicios de salud (prestación directa de servicios de salud, fortalecimiento de modelos de atención en salud rural y rural dispersa y aseguramiento de la población)
- Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud y capacidad resolutoria del primer nivel de atención con participación de la comunidad con dispositivos comunitarios y acción intersectorial.
- Fortalecimiento de los procesos de articulación entre cooperación y las entidades territoriales para la definición de rutas de atención en salud con la oferta disponible.
- Fortalecimiento de acciones de información, educación y comunicación de acuerdo con las necesidades de la población.
- Enfermedades No Transmisibles (Cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares)
- Salud Infantil (Vacunación, salud nutricional, recién nacidos, menores de 5 años, etc)
- Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (Salud Materna, ITS/ VIH, IVE, Anticoncepción, etc)
- Apoyo a los sistemas locales de salud (equipos, insumos, personal, apoyo técnico, refuerzo de la respuesta programática)

- Respuesta a la COVID-19
- Violencia Basada en Género (prevención y atención)
- Apoyo gastos médicos no cubiertos (ayudas técnicas con discapacidad, copagos, etc)
- Enfermedades transmisibles (ETA, ETV, otras)
- Salud mental y apoyo psicosocial incluye prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.
- Discapacidad e inclusión social.
- Vigilancia epidemiológica, incluyendo la comunitaria

localización geográfica, las acciones desarrolladas y las atenciones efectuadas, entre otros aspectos.

De manera cualitativa, el monitoreo y seguimiento se efectúa mediante los espacios de diálogo técnico en el Clúster de Salud y los sub-clústeres de:

- Vida Saludable, Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles. Facilitado por la OPS/OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Salud Materna, Salud Sexual y Reproductiva/VBG. Facilitado por UNFPA y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Niños, niñas y adolescentes. Facilitado por UNICEF y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Monitoreo

El seguimiento de la respuesta humanitaria en salud se realiza cuantitativa y cualitativamente. Respecto del reporte cuantitativo se cuenta con los reportes de las organizaciones a los sistemas de información que permiten la identificación de los proyectos, la

En dichos espacios se propicia el intercambio de información sobre necesidades en salud, las emergencias que se puedan estar presentando, los eventos de interés en salud pública, entre otros aspectos.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
01	Número de mujeres, niños, niñas y adolescentes que reciben acciones de salud mental y apoyo psicosocial.	Socios clúster salud
02	Número de mujeres, niños, niñas y adolescentes que reciben acciones de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.	Socios clúster salud
03	Número de mujeres, niños, niñas y adolescentes que reciben acciones de medicina general, especializada y promoción y prevención, incluida la atención de enfermedades crónicas y discapacidad.	Socios clúster salud
04	Número de mujeres y adolescentes que reciben acciones de salud materno-perinatal.	Socios clúster salud
05	Número de mujeres, niños, niñas y adolescentes y población clave que se benefician de acciones en salud sexual y reproductiva.	Socios clúster salud
06	Número de autoridades y/o instituciones de salud apoyadas o fortalecidas para atención y mantenimiento de servicios. Incluye dotación de insumos de protección personal, medicamentos e insumos esenciales para la atención en salud	Socios clúster salud
07	Número de personas de salud capacitadas y/o fortalecidas.	Socios clúster salud
08	Número de personas de la comunidad que se benefician de acciones de capacitación, comunicación del riesgo y equipamiento en salud.	Socios clúster salud

3.5 Recuperación Temprana



PERSONAS EN NECESIDAD

4.5M

MUJERES

47%

NIÑOS Y NIÑAS

17%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3%

Se evidencia un cambio en la severidad de las necesidades relacionado con los efectos de la pandemia que a la par de la emergencia sanitaria, ha generado un impacto socioeconómico que ha agravado las necesidades humanitarias derivadas de la violencia armada, desastres de origen agroclimático y socioambiental, pobreza multidimensional y brechas de género. Esto ha generado situaciones de triple y cuádruple afectación. Este incremento en la severidad se evidencia en un aumento en los retos institucionales por tener que atender las diferentes emergencias de manera simultánea y de responder ante contextos de posteriores a la emergencia en lógica de soluciones sostenibles y restitución de DD.HH.

De igual manera, se ha generado una afectación masiva en los medios de vida de subsistencia, que ha afectado a la población más vulnerable ubicada en los territorios más complejos del país. Todo ello, ha generado una pérdida de poder adquisitivo afectando de manera drástica la canasta familiar y el acceso a bienes básicos; un aumento en el cierre de micro y pequeñas empresas, así como una pérdida masiva de empleos especialmente en algunos sectores como el comercio, la construcción, la cultura, etc., afectando especialmente, a las personas que viven de empleos informales. El impacto socioeconómico de la pandemia ha generado también efectos en los mercados locales, incrementándose dificultades en el abastecimiento, alteración de precios, producción, distribución y comercialización de productos. Por otro lado, se ha evidenciado un incremento en el accionar de GAO/GDA que, en muchas partes del país, han aprovechado de las medidas de aislamiento preventivo, para incrementar acciones de control social y de restricción a la movilidad, y se han incrementado las

amenazas, los hostigamientos, y los homicidios tanto a defensores de DDHH como a la población en proceso de reincorporación. Finalmente, se ha visto limitada la posibilidad de las comunidades de participar, acceder a rutas institucionales y de exigir derechos por la misma situación de doble o triple afectación que ha superado la capacidad de respuesta institucional. Riesgos de cohesión social y de discriminación también se han visto incrementados en este periodo.

Análisis de las necesidades humanitarias

Se analiza un incremento en la severidad de las necesidades por la intersección de brechas que se potencian entre sí, incluyendo brechas de desarrollo, procesos inacabados de reparación a víctimas y necesidades humanitarias aumentadas derivadas de la pérdida de medios de vida e ingresos por emergencias con impacto humanitario originadas por violencia armada, desastres naturales y por la afectación del COVID-19 que ha profundizado todas las brechas preexistentes. Esto supone una afectación específica en poblaciones étnicas, comunidades rurales dispersas, territorios PDET, así como en zonas periurbanas que debido al impacto del COVID-19 han visto afectadas sus fuentes de ingresos, y los mercados locales han vivido procesos de desabastecimiento, alteración de los precios y dificultades de distribución y comercialización, profundizando brechas de pobreza y desigualdad. Las mujeres y especialmente aquellas cabezas de hogar tanto en zonas rurales como urbanas se han visto especialmente afectadas por esta situación de afectación múltiple, lo que ha profundizado brechas de género y ha incrementado situaciones de riesgo de violencias basadas en género y de explotación sexual.

Por otro lado, la atención centrada de las instituciones en responder ante la contingencia del COVID-19 ha cambiado las prioridades institucionales y las víctimas en procesos de reparación han visto ralentizados sus procesos de restitución de derechos y se ha dificultado el acceso a las rutas institucionales. En las zonas urbanas y periurbanas, también se ha visto una disminución de ingresos por la pérdida de empleos y de negocios, afectando especialmente a la población más vulnerable dependiente de actividades informales, generándose altos impacto en los medios de vida y en la canasta familiar. Otras poblaciones de riesgo y con mayores afectaciones son la población adulto mayor que ha tenido y sigue teniendo una sobreexposición a la morbilidad ante el COVID-19, la población con discapacidad y enfermedades preexistentes y las personas sobrevivientes de MAP-MSE. A nivel geográfico, se detecta una alta vulnerabilidad por afectación múltiple en zonas de frontera, y se visualiza niveles de severidad alta en Chocó, Cauca, Magdalena Medio, Bajo cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba.

Dentro del PIN se calcula un 47 por ciento de población femenina (2.120.390) de las cuales, aproximadamente 1.463.000 se ubican en las escalas 3 y 4 de severidad por lo que se detecta una afectación diferencial en las

mujeres, generándose fenómenos de feminización de la pobreza que incrementa vulnerabilidades antes violencias basadas en género y explotación sexual. Los niños y niñas también han visto incrementados de manera diferencial sus necesidades, sobre todo por las dificultades de acceso a la escuela en tiempos de COVID-19, lo que ha generado riesgos de deserción escolar, desigualdades en las brechas digitales y mayor exposición a la violencia intrafamiliar.

El PIN de recuperación temprana se sitúa en 4.5 millones de personas, destacando el hecho que, del total de PIN, el 69 por ciento se ubica en la escala de severidad 3 y 4 como PIN severo, hay 3.1 millones con impacto en 457 municipios y como PIN crítico, 2.6 millones de personas con alcance en 311 municipios.

Los indicadores que relacionan el PIN de recuperación temprana tienen que ver con 3 categorías de análisis: i). Pobreza multidimensional; ii). Desastres naturales midiendo afectación de vivienda; y iii). Soluciones sostenibles de población víctima retomando los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y de víctimas que no han superado el estado de vulnerabilidad.



PAILITAS / CESAR. COLOMBIA

Tiendas Comunitarias.

Crédito de la foto: Sebastián Zuleta - PNUD

Proyección de las necesidades

Las necesidades sectoriales predominantes en contextos marcados por las brechas de desarrollo, impacto por desastres naturales, violencia armada y COVID-19 tienen que ver con:

- Estrategias de recuperación emocional y recuperación de proyecto de vida, línea de intervención que está muy relacionada con el acompañamiento psicosocial requerido para la recuperación de medios de vida.
- Gestión del riesgo por desastres generados por eventos agroclimáticos y eventos socioambientales, vinculando institucionalidad y comunidades. Esta línea contempla ampliar el concepto de gestión del riesgo, incorporando el abordaje del COVID-19 e incluyendo estrategias de resiliencia y recuperación socioeconómica con un énfasis en población vulnerable ante casos de riesgo e instituciones locales respondientes.
- Estrategias de recuperación, protección y diversificación de medios de vida y generación de ingresos con énfasis en población con múltiple afectación y mujeres cabeza de hogar.
- Procesos de soluciones sostenibles y reparación a víctimas que incluye población desplazada de corta y de larga duración, enfatizando en procesos de retorno, reubicación, reparaciones colectivas e integración urbana en áreas tanto rurales como urbanas y periurbanas.

- Como poblaciones priorizadas, se encuentran las poblaciones víctimas por violencia armada y control de grupos armados, afectadas por desastres de origen natural, en riesgo de afectación o afectada por COVID-19, violencias basadas en género, afectación por MINAS y comunidades PDET. De manera desagregada, la atención está focalizada en mujeres, hombres, jóvenes, adulto mayor, población étnica, discapacidad, comunidades triple o cuádruple afectación (víctimas, desastres, migración, COVID-19).

Monitoreo

El clúster de RT tiene reuniones periódicas (bimensuales) a nivel nacional que servirán para poder hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores, a la evolución de las necesidades humanitarias en los territorios priorizados de intervención y al impacto diferencial en la población objetivo.

Adicionalmente, se realizarán los reportes correspondientes en función del ciclo de programación humanitaria, y se analizará de manera paulatina la información que los integrantes del clúster reportan en las distintas plataformas como 345W. Esta información alimenta los distintos indicadores para las diferentes categorías de análisis y permite relacionar las acciones del clúster frente a las necesidades establecidas en el PIN y otros ejercicios de focalización o programación.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Afectación vivienda por desastres naturales	UNGRD
2	Población en pobreza multidimensional	DANE
3	Necesidades básicas insatisfechas	DANE-DNP
4	Número de mujeres y adolescentes que reciben acciones de salud materno-perinatal.	UARIV



3.6 Educación

PERSONAS EN NECESIDAD

3.6M

MUJERES

N/A

NIÑOS Y NIÑAS

100%

El cierre de las escuelas debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 en todo el territorio nacional ha interrumpido el goce efectivo del derecho a la educación de 10 millones de niños, niñas y jóvenes. El aprendizaje a distancia se convirtió de este modo en el mayor reto para la educación en 2020, persiguiendo el objetivo de preservar los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso equitativo a la educación virtual. Sin embargo, los problemas de conectividad en gran parte del territorio nacional, especialmente en la ruralidad (asociados a falta de infraestructura local y a la pobreza de las familias) han puesto en riesgo la continuidad y calidad del proceso educativo, causando aumento de fenómenos como la deserción, especialmente de los grupos más vulnerables como las personas con discapacidad, niñas y adolescentes y la niñez de las comunidades étnicas. Las interrupciones en el tiempo en que niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan de actividades pedagógicas tiene un impacto severo en sus aprendizajes resultando en una mayor probabilidad de no volver a la escuela, con todos los riesgos que eso implica a corto y largo plazo.

Adicionalmente, siendo las escuelas espacios protectores y de confluencia para la garantía de otros derechos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en las ZOMAC, las situaciones que requieren atención humanitaria se han agudizado con la pandemia. El cierre de las escuelas aumentará la brecha de pobreza y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más vulnerables son los que tienen mayores dificultades en el acceso y continuidad educativa, mayores tasas de deserción y mayores déficits en aprendizaje. Estos factores se incrementan durante

la pandemia dado que estos mismos niños, niñas, adolescentes y jóvenes son los que tienen menos oportunidades para acceder a educación a distancia. Adicionalmente, se incrementarán los riesgos asociados al reclutamiento forzado, uso y utilización por las nuevas estructuras armadas que se están proliferando en zonas rurales y de ubicación estratégica para la circulación de economías ilícitas, así como la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en plantaciones de uso ilícito.

Análisis de las necesidades humanitarias

El análisis de necesidades se realizó considerando los indicadores más representativos de la situación educativa en el país frente a deserción escolar, calidad y cobertura educativa. Adicionalmente, debido a las afectaciones particulares de educación a la población por la pandemia, se añadió el acceso a internet como una variable extra y la baja capacidad de docentes para la enseñanza a distancia y virtual que permitiese una aproximación a las dificultades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para acceder a la educación en este contexto.

Al poner a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el centro del análisis se evidencia que las necesidades sectoriales inmediatas están relacionadas con el acceso a la educación (especialmente en modalidades virtuales y a distancia), a la calidad educativa en tiempos de pandemia, al seguimiento a los aprendizajes y la pérdida de estos, al mejoramiento de la infraestructura escolar y al eventual retorno seguro a las instituciones educativas. Sin embargo, la emergencia sanitaria por COVID-19 ha exacerbado necesidades adyacentes,

consecuencia de la ausencia presencial en las escuelas, que constituyen entornos protectores para la garantía de otros derechos:

- Riesgos incrementados de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por los grupos armados ilegales debido a la ausencia de clases en las instituciones educativas.
- El incremento en el desempleo y las dificultades de las familias para acceder a ingresos suficientes y estables ha aumentado el riesgo de trabajo infantil y la negligencia en el hogar, debido a la necesidad de padres y cuidadores de salir a trabajar, dejando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desatendidos. Esta situación se ha vinculado además con cargas de hogar incrementadas para niñas y adolescentes particularmente, a las que se les responsabiliza del
- cuidado de otros menores o adultos mayores, así como del cuidado del hogar y la alimentación.
- Incremento de violencia en el entorno familiar relacionado con la pérdida de la protección y el seguimiento que brindan las escuelas.
- Niñas y adolescentes en riesgos de abandono escolar en las etapas de retorno gradual debido al incremento de responsabilidades de cuidado y trabajo en el hogar que les impide en retorno oportuno a la escuela.
- Padres y cuidadores sin suficientes recursos para realizar un acompañamiento adecuado a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus procesos de aprendizaje en casa, al igual que falta de recursos de la familia para dedicarlo a herramientas pedagógicas.



TUMACO / NARIÑO, COLOMBIA

Campaña "Quédate en Casa", la cual promueve el aprendizaje desde el hogar a los niños de la comunidad por medio de kit escolares.

Crédito de la foto: Save The Children

- Altos niveles de estrés, afectaciones psicosociales y emocionales ocasionadas por los largos periodos de cuarentena y desvinculación con el entorno social y escolar como red de apoyo que impactan el aprendizaje y el bienestar de la niñez.
- Pérdida de acceso a la seguridad alimentaria y nutricional para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se apoyaban en el plan de alimentación escolar para recibir su comida diaria.

Esta convergencia de necesidades desencadena un crecimiento de la deserción (como fenómeno multicausal) de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ya se encontraban matriculados (adicional al número que ya existía de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desescolarizados), agravando en consecuencia las situaciones que ocasionaron la deserción en primer lugar. Se ha encontrado que 480 municipios presentan tasas de deserción superiores a la media nacional del 3% y 284 municipios tienen tasas de cobertura menores al 89.9%.

Estas situaciones afectan particularmente a los más vulnerables, las poblaciones étnicas y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad y las niñas que incluso antes de la pandemia ya se enfrentaban a barreras de acceso, permanencia y calidad (incluida la pertinencia y adaptación de la educación en emergencia a las comunidades). Los territorios más afectados son aquellos donde los indicadores de educación tienen los comportamientos más preocupantes y donde se presenta doble y triple afectación por desastres naturales, violencia armada y COVID-19. La incursión de la educación virtual ensanchó la brecha en acceso, calidad y permanencia educativa de estos territorios; en este sentido, se evidencia una población en edad escolar de más de 4 millones de personas sin acceso a internet que garantice un aprendizaje a distancia oportuno y de calidad como la única alternativa actual para continuar su aprendizaje y culminar toda su trayectoria educativa.

Por último, es menester resaltar las necesidades de docentes (igualmente acrecentadas durante la pandemia) quienes por un lado requieren fortalecimiento de sus capacidades para la pedagogía a distancia y el seguimiento a las condiciones de sus estudiantes

y por el otro, reportan afectaciones psicosociales importantes por el aumento de las cargas laborales, el confinamiento y las condiciones precarias que reportan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a su cargo.

Proyección de las necesidades

Se destacan las siguientes proyecciones de las necesidades:

- La emergencia sanitaria por COVID-19 y la necesidad de mantener y reforzar medios para la educación a distancia continuará siendo relevantes en un futuro cercano.
- Las dinámicas de la pandemia y, en consecuencia, del eventual retorno a las escuelas hace que sea de gran importancia analizar y hacer seguimiento a nuevas variables que generan necesidades en el contexto del COVID-19.
- Las zonas rurales y de doble y triple afectación continuarán siendo más afectadas por la falta de acceso a educación a distancia y es necesario apoyar con otras alternativas
- Las áreas afectadas por la presencia, influencia y/o control de grupos armados organizados ven sus necesidades incrementadas en época de COVID-19: los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al no estar en la escuela son más vulnerables al reclutamiento y utilización e economías ilícitas. Algunos ejemplos: Córdoba, Cauca, Chocó, entre otros.
- Se espera un deterioro de las habilidades socioemocionales y la necesidad de apoyo psicosocial adicional para familias y docentes debido a la pérdida del vínculo educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las cargas aumentadas
- La capacidad de los docentes para la enseñanza virtual y a distancia será un factor esencial para garantizar que los niños de las zonas más vulnerables acceden al derecho de la educación en las etapas de retorno escolar y apertura gradual de las escuelas.

Los indicadores de pobreza multidimensional se interrelacionan con mayor deserción escolar e interrupción de las trayectorias educativas, por lo que se espera que sea en estos lugares donde los indicadores de deserción tengan el peor comportamiento.

Monitoreo

Con el fin de aportar al monitoreo de la disminución de esta brecha de la población en condiciones de necesidad, se realizará un seguimiento a los siguientes indicadores

- Tasa de deserción intra-anual escolar por nivel educativo
- Tasa de cobertura neta y bruta por nivel educativo
- Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por fuera del sistema educativo

- Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con cobertura del Plan de Alimentación Escolar
- Tasa de extraedad
- Número de establecimientos educativos en modelo de alternancia

Estos datos son recopilados por el Ministerio de Educación y permiten hacer un monitoreo a los cambios en las necesidades. Adicionalmente, el Clúster de Educación en Emergencias realiza monitoreos de la situación en los territorios donde se tiene presencia de los socios, con el fin de alimentar los informes situacionales, complementar los análisis que se realizan a partir de fuentes oficiales y contar con información actualizada para la respuesta oportuna.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Tasa de Deserción en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial	SIMAT
2	Tasa de cobertura en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial	SIMAT
3	Número de estudiantes evaluados en las pruebas saber 11 en el segundo periodo de 2019	ICFES
4	Número de población entre los 5 y 19 años sin acceso a internet	CNPV 2018

3.7 Alojamientos Temporales



PERSONAS EN NECESIDAD

2.4M

MUJERES

50%

NIÑOS Y NIÑAS

25%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

10%

Panorama

En relación con las necesidades identificadas del año anterior, se evidencia un incremento leve con el PiN sectorial de acuerdo con el análisis de los conductores de las emergencias por impacto humanitario: desastres, violencia armada, con especial relevancia en la emergencia por la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas para la prevención y respuesta; estas situaciones generaron un mayor impacto, agudizando la situación humanitaria de las personas y comunidades afectadas en los territorios identificados y priorizados por el Sector.

El análisis de la severidad para la consecuencia humanitaria relacionada al bienestar físico y mental se determinó con relación al acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales, de las personas y comunidades afectadas por la violencia armada, Desastres y COVID-19. Así mismo, el acceso a soluciones adecuadas de alojamiento e infraestructura comunitaria de la población afectada por la violencia armada y COVID-19, y su relación con los medios de vida y las soluciones progresivas a mediano plazo, fue la que determinó el análisis de la severidad para la consecuencia asociada a las condiciones de vida.

Análisis de las necesidades humanitarias

De acuerdo con el análisis realizado para la identificación de necesidades sectoriales, relacionadas con los conductores de las emergencias, se identificó un PiN Crítico de 2.4 millones en al menos 778 municipios.

En cuanto al espacio habitable: Los ocupantes están muy inseguros. La vivienda está severamente comprometida, por lo que la integridad de las personas está en riesgo inmediato. Las personas afectadas no disponen de artículos domésticos esenciales para mantener la salud, seguridad y dignidad.

Las personas y comunidad han sido desplazadas, no tienen acceso a soluciones de alojamiento temporal (albergue, reutilización de infraestructura comunitaria para alojamiento, carpas o cambuches, alojamiento en hoteles u hospedajes, alojamiento en familias de acogida), artículos domésticos esenciales o si acceden, estos no cumplen los estándares mínimos.

Las personas de la comunidad se ven gravemente perjudicadas por las interrupciones de los servicios por falta de acceso a la infraestructura comunitaria y servicios esenciales (acceso a servicios públicos, instalaciones de salud, instalaciones educativas, accesos por carretera o rutas de evacuación, infraestructuras para el acceso a medios de vida, telecomunicaciones o energía).

Frente a los grupos vulnerables, se realizó un especial énfasis en:

- Personas desplazadas internas
- Poblaciones afectadas por desastres de origen natural
- Comunidades indígenas y afrocolombianas
- Mujeres gestantes y lactantes

- Personas adultas mayores y/o con enfermedades preexistentes y personas en condición de discapacidad
- Líderes o defensores de derechos humanos
- Población LGTBIQ+

Las áreas geográficas con mayor impacto para el clúster se focalizaron en departamentos como: Antioquia, Arauca, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, La Guajira,

Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca, con relación al acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales, de las personas y comunidades afectadas por la violencia armada y desastres. Así mismo, ofrecer el apoyo a soluciones duraderas a través del acceso a soluciones adecuadas de alojamiento e infraestructura comunitaria de la población afectada por la violencia armada, para facilitar su retorno al lugar de origen, integración o reubicación, en articulación con los sectores de recuperación temprana, y medios de vida.

Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales para mantener la salud, seguridad y dignidad para las personas afectadas por desastres de origen natural, socio natural y/o antrópico no intencional	Consolidados 2019 - 2020 de Población afectada UNGRD (desastres de origen natural)
2	Acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales para las personas afectadas por la violencia armada	UARIV (hecho victimizante: desplazamiento forzado individual, masivo y confinamiento) 2019
3	Acceso a soluciones adecuadas de alojamiento e infraestructura comunitaria de la población (retornada, reubicada y/o en proceso de integración local) afectada por la violencia armada	DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018 UARIV (hecho victimizante: desplazamiento forzado individual, masivo y confinamiento) 2019 DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018 UARIV (hecho victimizante: desplazamiento forzado individual, masivo y confinamiento) 2019



PROVIDENCIA, COLOMBIA

Construcción de alojamientos temporales en Providencia tras el paso del huracán IOTA

Crédito de la foto: OCHA, Johana Botia

Part 4

Anexos

TUMACO, NARIÑO. COLOMBIA

Campaña de lavado de manos

Crédito de la foto: Save The Children



4.1

Fuente de los datos

El desarrollo del estudio intersectorial se soportó en la elaboración de un análisis compuesto por bases de datos con desagregación por área (municipalidad). Para ello se utilizaron diez fuentes de información cuantitativa de datos abiertos del Gobierno de Colombia centradas en las siguientes dimensiones de análisis: Población, Desplazamiento, Desastres, Salud, Educación y Violencia. (ver fuentes en nota metodológica).

De igual manera, la realización de talleres a nivel local desde los Equipos Locales de Coordinación para la validación de severidades y dinámicas específicas locales, fueron fuente para la ponderación de la severidad total por municipalidad.

Finalmente, en esta oportunidad y debido a las limitaciones de desplazamiento y acceso a los territorios producto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, no fue posible el despliegue de amplia cobertura a nivel nacional de evaluaciones de necesidades, por lo que no se tuvieron en cuenta para el cálculo de PIN.

De esta manera el ejercicio fue extrapolado a los 1.122 municipios del territorio nacional tomando en cuenta su población como número de casos dentro del análisis, basado en la evidencia de los datos.

Para la información relacionada a flujos migratorios mixtos la información ha sido tomada del capítulo de Colombia del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 2021⁹³, el cual recoge las prioridades y estrategias de respuesta frente a las necesidades de los refugiados, migrantes, colombianos retornados

y comunidades de acogida en el país, y está bajo embargo hasta su eventual publicación en diciembre de 2020. Para medir las necesidades y prioridades de la población refugiada y migrante, 34 socios del Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) llevaron a cabo una evaluación conjunta de necesidades en julio de 2020, a través de encuestas con más de 3.000 hogares⁹⁴. Estos resultados fueron vinculados con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para generar un panorama intersectorial de las necesidades a lo largo del país. Los resultados de estas evaluaciones, y otros ejercicios, fueron revisados por expertos sectoriales y personal de primera línea de atención, para informar y robustecer el análisis de necesidades.

Tabla indicadores VBG

#	INDICADOR	FUENTE
		5. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
1	Número de mujeres y niñas afectadas, en riesgo de violencia basada en género (psicológica, física, sexual) y feminicidio en municipios afectados por la violencia armada, COVID-19 y migración	6. Municipios con registro de "Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado", entre 2019 y 2020, según la UARIV. 7. Municipios con doble o triple afectación (violencia armada, migración, COVID-19). 8. Estimaciones departamentales según la ENDS 2015 Tomo II, de personas expuestas a VBG.

⁹³ <https://reliefweb.int/report/world/rmrp-2021-plan-regional-de-respuesta-para-refugiados-y-migrantes-enero-diciembre-2021>

⁹⁴ GIFMM Colombia: Evaluación Conjunta de Necesidades ante COVID-19 | Julio 2020 (<https://r4v.info/es/documents/details/79280>)

Enlaces de resultados proporcionados por HDX:

PiN Colombia 2021: resultados intersectoriales y sectoriales desagregados por Departamento - Humanitarian Data Exchange (<https://data.humdata.org/>):
<https://bit.ly/2Kuhm9D>

PiN Colombia 2021: resultados intersectorial y sectoriales desagregado por Municipio-Severidades - Humanitarian Data Exchange (data.humdata.org/):
<https://bit.ly/3nVWxkZ>

PiN Colombia 2021: resultado intersectorial & estimación de Grupos Vulnerables - Humanitarian Data Exchange (data.humdata.org/):
<https://bit.ly/3o2WpQB>

PiN Colombia 2021: Resultado Intersectorial & Estimación de indicadores de severidades - Humanitarian Data Exchange (data.humdata.org/):
<https://bit.ly/3o5hr1m>



NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA








Encuentro de Autoridades Barí

Crédito de la foto: OCHA, Laura Rodríguez

Tabla de Número de Evaluaciones

Durante 2020 y en relación con las emergencias por los diferentes choques e impactos, se realizaron al menos 110 evaluaciones rápidas de necesidades, representando un 98 por ciento del territorio nacional. Se destacan principalmente las relacionadas a medir las necesidades de las comunidades en el marco de la emergencia por la Covid-19, las cuales tuvieron que adaptarse a la coyuntura de las medidas de asilamiento preventivo, haciendo uso de las tecnologías y realizando los contactos a través telefónico y online con dispositivos móviles. Se contó con la participación organizaciones

que hacen parte del Foro de ONGs internacional, otras nacionales, al igual que el Consorcio MIRE⁹⁵, y agencias, fondos y programas (AFP) del Sistema de Naciones Unidas. Aunque en menor proporción, se destacan 46 evaluaciones relacionadas a las emergencias por la violencia armada (30) y por eventos asociados a desastres naturales (16), que requirieron de la respuesta humanitaria en medio de las restricciones, ante las necesidades y consecuencias desencadenadas.

								Transferencias monetarias	Total
Amazonas	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Antioquia	4	2	4	5	0	2	0	1	18
Arauca	1	0	0	3	1	1	0	1	7
Atlántico	0	0	0	3	0	0	0	1	4
Bogotá	0	0	0	1	0	0	1	1	3
Bolívar	0	0	0	3	0	0	0	1	4
Boyacá	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Caquetá	0	0	0	3	0	0	0	1	4
Cauca	1	1	3	4	0	2	0	1	5
Cesar	0	0	0	4	0	0	0	1	5
Chocó	6	5	6	8	0	6	0	5	36
Córdoba	1	1	2	5	0	1	0	1	11
Cundinamarca	0	0	0	3	0	0	0	1	4
Guainía	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Guaviare	0	0	1	2	0	1	0	0	4
Huila	0	0	0	3	0	0	0	1	4
La Guajira	1	1	1	5	0	1	0	1	10
Magdalena	0	0	0	1	0	1	0	1	3
Meta	0	0	0	4	0	0	0	1	5
Nacional	1	0	1	2	0	1	0	0	5
Nariño	7	6	8	11	0	7	0	4	43
Norte de Santander	2	1	2	4	1	1	0	1	12
Putumayo	1	0	0	4	1	1	0	1	7
Santander	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Sucre	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Tolima	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Valle del Cauca	0	0	0	3	0	0	1	12	5
Vichada	2	1	1	2	1	2	0	1	10
Total general	28	18	35	91	3	28	2	28	233

⁹⁵ Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencia: <https://nrc.org.co/2020/07/07/mire-nuevo-consorcio-humanitario-para-responder-rapidamente-a-emergencias-en-colombia/>



JURADÓ / CHOCÓ. COLOMBIA

Entrega de ayudas por parte del equipo de ACNUR
Crédito de la foto: ACNUR

4.2 Metodología

La metodología para el cálculo de personas en necesidad (PiN) intersectorial para el Humanitarian Needs Overview (HNO) 2021 por parte de OCHA Colombia, se desarrolló siguiendo la nueva metodología global JIAF, (Joint Intersectoral Analysis Framework, por sus siglas en inglés⁹⁶) en el que se analizan los eventos o shocks que afectan las condiciones humanitarias en la población a partir de tres pilares: *i. Estándares de vida, ii. Mecanismos para afrontar el shock y iii. Bienestar Físico y Mental. Se contempló*

un marco analítico, el cual realizó una selección de “Drivers” que determinan las necesidades humanitarias en el país que requieren asistencia (afectaciones por Violencia Armada, afectaciones por Desastres Naturales, afectaciones por Covid-19), definiendo para cada uno de ellos los indicadores que determinen el impacto de los grupos vulnerables, asignando una carga poblacional según los niveles de severidad del 1 al 5, en donde 1 son estándares mínimos aceptables y necesidades básicas satisfechas y 5 corresponde el

⁹⁶ Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF) 2021. https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/03.HPC_2021-JIAF_Guide.pdf

colapso total de los estándares de vida, de parte de cada clúster. **Se seleccionó el escenario de análisis compuesto por bases de datos con desagregación por área**, extrapolado a los 1.122 municipios del país, tomando en cuenta su población como número de casos dentro del **análisis y basado en la evidencia de los datos**.

También se seleccionaron los indicadores sectoriales (33) que, desde una visión estratégica, ponen una mayor presión en la inminencia de las necesidades humanitarias. siguiendo el juicio de expertos, además del contexto del país de manera histórica y con un enfoque estratégico, se optó por **tomar las severidades de los indicadores intersectoriales más representativos**: Violencia Armada, Mortalidad y Vulnerabilidad extrema y población de riesgo

(capacidades de adaptación) y brotes epidemiológicos (Covid, Malaria y Dengue) que a su vez reflejan las severidades más altas y críticas.

De esta manera, **se procedió a realizar una reconfiguración de los indicadores, con el fin de realizar un análisis simplificado y multidimensional**, conformando así cuatro dimensiones críticas: i) Mortalidad/ Vulnerabilidad extrema y población de riesgo (capacidades de adaptación), ii) Violencia armada, iii) Brotes Epidemiológicos y un; iv) Factor Cualitativo compuesto por los datos que arrojaron los ejercicios cualitativos de talleres regionales de terreno (ELC). ([Ver nota metodológica y resultados desagregados en el siguiente link: https://data.humdata.org/organization/ocha-colombia](https://data.humdata.org/organization/ocha-colombia)).



ARAUCA, COLOMBIA

Taller regional para calcular la severidad departamental y el número de personas en necesidad (año 2019 antes de la pandemia)

Crédito de la foto: OCHA

4.3

Vacíos de información y limitaciones

La nueva metodología utilizada para la construcción del HNO, enfocada la magnitud y la severidad de las necesidades de los grupos poblacionales más afectados, constituyó un reto en términos de indicadores, fuentes de datos y lineamientos. A pesar de haber logrado un resultado representativo a nivel municipal y basado indicadores, se identificaron algunos vacíos que deben abordarse desde la arquitectura humanitaria para fortalecer estos análisis de manera temprana de cara al inicio del Ciclo de Programación Humanitaria en futuros procesos HNO.

- En primer lugar, la transformación de los datos discretos y continuos a ordinales para cada uno de los indicadores definidos, evidencio las limitantes de algunas fuentes de información que por su naturaleza no lograban dar el alcance requerido para la clasificación, según las cinco escalas de severidad predefinidas en la metodología (ejercicios sectoriales e intersectorial). La configuración de indicadores alineados a las definiciones de cada escala supuso un reto, exigiendo recurrir en algunos casos a métodos estadísticos para lograr el cometido. A pesar de lo anterior y respecto al ejercicio del año pasado, la inclusión de indicadores como unidades de medida de las distintas afectaciones permitió solucionar algunos de los vacíos y limitantes evidenciados.
- Por otro lado, las dinámicas cambiantes y nuevas coyunturas en el país tales como el COVID 19, también requirió nuevos retos analíticos y casi en tiempo real conforme se conoce información, Frente al cruce de fuentes de datos que pudieran ejemplificar dinámicas entre indicadores. Si bien existe mucha información de COVID actualizada al día, la periodicidad de actualización de fuentes de datos diferentes no va a la par en muchos casos lo cual plantea una barrera que impide identificar correlaciones clave entre variables que podrían haber agregado valor a los análisis realizados.
- Se reconocen fuentes oficiales que cuenta con toda la información y niveles de desagregación, sin embargo, algunas requieren actualizarse más periódicamente. Otro aspecto importante, es poder determinar con más tiempo toda la información que se va a necesitar, y así poder tener respuesta a solicitudes formales que pueden tardar.
- Otra de las mayores limitantes para el ejercicio realizado fue la desagregación del PIN para grupos vulnerables; si bien la metodología propone obtener esta información directamente de las fuentes consultadas fue imposible llegar a este nivel de detalle en la mayoría de bases de datos consultadas, evidenciando grandes vacíos respecto a las desagregaciones demográficas y étnicas ausentes en las bases de datos y requeridas para mostrar con certeza el número de personas en necesidad correspondientes a cada uno de los grupos vulnerables. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de plantear alternativas desde el enfoque metodológico para aquellos países en los que se tienen estas barreras y limitantes de información.
- En cuanto a la calidad de información, se siguen evidenciando grandes problemas de subregistro en algunas bases de datos consultadas. En este sentido, la baja capacidad de recolección de datos en zonas de difícil acceso en el país, y factores sociales como el temor a denunciar por parte de la comunidad, es otra limitante para el análisis de información precisa y veraz que dé cuenta de la dimensión y gravedad de las situaciones estudiadas.
- Respecto a la metodología JIAF 2021, a pesar de que plantea bases sólidas, se identifican puntos a mejorar relacionados al uso de definiciones como: la regla del 25% y la regla del Máximo del promedio del 50% usadas en la clasificación de severidades, ya que son genéricas y aplicable al nivel global haciendo que su representatividad al nivel del contexto del país no sea la más adecuada

- Las baja cantidad o ausencia de evaluaciones de necesidad e insumos cualitativos de terreno para los ejercicios sectoriales impidieron contrastar y/o ajustar los resultados cuantitativos, de manera tal que el resultado final a nivel de cada clúster fuera más representativo. Aquí es vital robustecer y promover la recolección de datos a nivel de los territorios para los clústeres, de manera tal que al realizar los análisis se puedan evidenciar brechas y sopesar los vacíos de información entre los datos cualitativos y cuantitativos.
- Finalmente, tal como se planteó el año pasado, es importante resaltar la necesidad de fortalecer las capacidades en manejo de información a todos los niveles de la arquitectura humanitaria, y poner

como centro del análisis los grupos poblacionales identificados, de modo que en el futuro se cuente con información más precisa, confiable y desagregada tempranamente para robustecer aún más los procesos y cerrar las brechas identificadas; así mismo, focalizar la respuesta de la manera más consecuente frente a los objetivos propuestos.



ITUANGO / ANTIOQUIA. COLOMBIA

Resguardo Jaidukamá, etnia Embera Eyabida

Crédito de la foto: OCHA, Andrea Acuña

4.4

Acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	FMM	Flujos Migratorios Mixtos
CBPF	Country-Based Pooled Funds	GAO	Grupos Armados Organizados
ACPC	Ataque Contra la Población Civil	GAPD	Grupos Armados Pos-Desmovilización
AEI	Artefactos Explosivos Improvisados	GEIH	Gran Encuesta Integrada de Hogares
AGC	Autodefensas Gaitanistas de Colombia	GIC	Grupo Inter Clúster
CANI	Conflicto Armado No Internacional	GIFMM	Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja	GTMI	Grupo Temático de Manejo de Información
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos	GTP	Grupos Temáticos de Protección
DDHH	Derechos Humanos	HNO	Humanitarian Needs Overview, por sus siglas en inglés
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas	HRP	Humanitarian Response Plan
DIH	Derecho Internacional Humanitario	ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
DTM	Displacement Tracking Matrix	IDH	Índice de Desarrollo Humano
EAS	Explotación y Abuso Sexual	INFORM	Index for Risk Management, por sus siglas en inglés
EDA	Enfermedad Diarreica Aguda	INML	Instituto Nacional de Medicina Legal
EHP	Equipo Humanitario de País	IRA	Infección Respiratoria Aguda
ELC	Equipo Local de Coordinación	ITS	Infecciones de Transmisión Sexual
ELN	Ejército de Liberación Nacional	MAP	Minas Anti Personal
ENDS	Encuesta Nacional de Demografía y Salud	MIRA	Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment, por sus siglas en inglés
EPL	Ejército Popular de Liberación	MSE	Municiones Sin Explotar
ERA	Enfermedad Respiratoria Aguda	NNA	Niños, Niñas y Adolescentes
ERM	Educación en el Riesgo de Minas	NNAJ	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
ERP	Evaluaciones Rápidas de Protección	OACP	Oficina del Alto Comisionado para la Paz
ETCR	Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo; antigua guerrilla que hizo parte del conflicto histórico colombiano; firmaron Acuerdo Final con el Gobierno de Colombia en noviembre de 2016.	OCHA	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
		OIM	Organización Internacional para las Migraciones
		OMS	Organización Mundial de la Salud

ONG	Organización/es No Gubernamental/es
PAE	Programa de Alimentación Escolar
PAT	Planes de Acción Territorial
PDET	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PEP	Permiso Especial de Permanencia
PIB	Producto Interno Bruto
PIN	People In Need (Personas Con Necesidad)
PMA	Prorama Mundial de Alimentos
PNIS	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
PPV	Población Proveniente de Venezuela
REG	Remanentes Explosivos de Guerra
RUV-UARIV	Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas
SAN	Seguridad Alimentaria y Nutricional
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
SNARIV	Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
SNU	Sistema de Naciones Unidas
TMF	Tarjeta de Movilidad Fronteriza
UARIV	Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas
UNCT	Equipo de País de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés
UNDAF	Marco de Asistencia para el Desarrollo, por sus siglas en inglés
UNGRD	Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética
VBG	Violencia Basada en Género
ZOMAC	Zonas Más Afectadas por el Conflicto

**PANORAMA DE LAS
NECESIDADES HUMANITARIAS**
COLOMBIA

DICIEMBRE 2020